Proyecto de Ley N° 4185/2022-CR

PEDRO EDWIN MARTÍNEZ TALAVERA
CONGRESISTA DE LA REPUBLICA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite y Digitalización de Documentos
07 FEB. 2023
RECIBIDO
Firma
Hora 10:57am

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS, A FIN DE IMPLEMENTAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO COMO METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR Y ELIMINAR BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES DESDE SU GÉNESIS.

Los congresistas de la República que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista **PEDRO EDWIN MARTÍNEZ TALAVERA**, con la facultad prevista en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 22° inciso c), 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente:

PROYECTO DE LEY

El Congreso de la República;
Ha dado la siguiente Ley:

LEY QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 1256, LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS, A FIN DE IMPLEMENTAR EL ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO COMO METODOLOGÍA QUE PERMITA IDENTIFICAR Y ELIMINAR BARRERAS BUROCRÁTICAS ILEGALES DESDE SU GÉNESIS.

Artículo 1. Objeto
El objeto de la ley es la modificación del Decreto Legislativo 1256 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocrática, que precisa la supervisión y el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública, incorporando el análisis de impacto regulatorio de ex ante y ex post.

Artículo 2. Modificación e incorporación
Modifíquense el artículo 1°; numeral 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 11 del artículo 3°; incorporación del numeral 3 del artículo 4°; modificación del numeral 6.1, 6.2 y 6.3 del artículo 6°; numeral 8.1 del artículo 8°, artículo 9°, artículo 10°, artículo 11°, artículo 13°; numeral 14.1 literal a, b, incorporación numeral 14.2, literales a, b, c, d, e, f, acápite 1,2,3 del artículo 14°, modificación del artículo 19, numeral 2 del artículo 20, modificación del artículo 21, modificación del numeral 23.1, 23.2 del artículo 23° modificación del numeral 2,3, del artículo 24, modificación numeral 25.1 del artículo 25; modificación del numeral 27.1, 27.2,27.3 del artículo 27; modificación del literal a, b del numeral 29.2 del artículo 29; modificación del artículo 34°; artículo 13modificación del literal c del numeral 35.1 del artículo 35; modificación del numeral 42.3 del artículo 42; modificación del numeral 2 el articulo 43; modificación del artículo 45; modificación articulo 46; articulo 47; numeral 48.1, literal d, del artículo 48, modificación del artículo 49;

articulo 50, articulo 51; y Tercera Disposición Complementarias Finales y Transitorias, del Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, **en los términos siguientes:**

Artículo 1. Finalidad de la ley
La presente ley tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)** con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública.

Para operacionalizar esta finalidad el presente artículo introduce la obligación legal de que toda entidad de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, deban realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación (condiciones de mercado), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

Artículo 3. Definiciones
Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones:

[...]

3. Barrera burocrática: Es todo requisito, limitación, prohibición, **obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad**, cobro **o toda exigencia que imponga cualquier entidad, y que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil**, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).**

La sola calidad de requisito, limitación, prohibición, **obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad**, cobro **o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento** no implica necesariamente su carácter ilegal, **pero si la disposición normativa de carácter general que <u>estableció</u>, <u>incorporó</u> o <u>modificó</u> dicha exigencia no cuenta con el respectivo sustento y/o justificación usando la metodología del AIR de manera previa a su aprobación, o un agente económico denuncia esta exigencia como barrera burocrática y la entidad denunciada no es capaz de presentar el debido sustento y/o justificación cumpliendo con los criterios de calidad regulatoria planteados por la OCDE en el AIR, en ese caso, si se considera barrera burocrática ilegal y se ordena su inaplicación.**

4. Formas de materialización: Las barreras burocráticas se materializan a través de actos administrativos, **disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes)** y/o actuaciones materiales.
[...]

6. Disposiciones normativas de carácter general: todo dispositivo normativo emitido por una entidad **(como el reglamento de una ley),** destinado a producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados y/o agentes económicos**, a partir de establecer, incorporar o modificar exigencias como las que se señalan en el artículo 10 de DS 063-2021-PCM.**

7. Actuación material: todo comportamiento, manifestación y/o actividad material de una entidad o un funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que sin ser viabilizada a través de un acto y/o **Disposición normativa de carácter general**, produce efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante y el air ex post**.

9. Administrados: personas naturales y/o jurídicas que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un procedimiento administrativo sujeto a las normas y/o principios de simplificación administrativa o **del análisis de impacto regulatorio (air) ex ante y el air ex post**.

10. Inaplicación con efectos generales: efecto de una resolución que beneficia a todos los agentes económicos y administrados afectados, real o potencialmente, por una barrera burocrática contenida en una **disposición normativa de carácter general**.

11. Inaplicación al caso concreto: efecto de una resolución que beneficia únicamente al denunciante que obtiene un pronunciamiento favorable en los supuestos regulados en la presente Ley, **a menos que sea que se declare barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad a un numeral, literal, inciso, o artículo de una disposición normativa de carácter general, en cuyo caso no existe aplicación al caso concreto sino inaplicación con efectos generales.**

Artículo 4. Principios de las autoridades a cargo de supervisar la presente ley
[...]
3. Principio de Calidad Regulatoria. - Los órganos encargados del inicio de las acciones de parte o de oficio dentro del Indecopi privilegian el análisis para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de evaluar si la alternativa regulatoria elegida es de calidad, al ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico vigente de Análisis de Impacto Regulatorio.

Artículo 6. Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas.

6.1. De la Comisión y la Sala

La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer **las disposiciones normativas de carácter general y** los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en **el Decreto Supremo N 063-2021-PCM,** los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley.

6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión
La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en el órgano instructor en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Es competente para realizar todo tipo de acciones preventivas, investigaciones, inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones de supervisión de oficio sobre la materia. **Es competente para realizar el Análisis de Impacto Regulatorio ex ante a las disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento**, así como para realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM,** Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.

6.3. De la Secretaría Técnica de la Sala
La Secretaría Técnica de la Sala es competente para tramitar y realizar las labores de instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Sala, a estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el **Decreto Supremo N° 063-2021-PCM,** Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.

Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones normativas de carácter general

8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en **disposiciones normativas de carácter general o** disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.
[...]

Artículo 9.- De la declaración de barreras burocráticas ilegales

Las entidades de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, tienen la obligación de realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el

otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

Artículo 10.- De la inaplicación al caso concreto
10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en **actos administrativas o actuaciones materiales**, dispone su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante. Sin embargo, si la declaratoria de ilegalidad de barreras burocráticas es materializada en **disposiciones normativas de carácter general o en actos administrativos o actuaciones materiales que tienen como sustento un numeral, literal, inciso o artículo de una disposición normativa de carácter general**, en ese caso, dispone su inaplicación con efectos generales.
[...]

Artículo 11.- Mecanismos para lograr la derogación de las disposiciones normativas de carácter general que contienen barreras burocráticas

En los procedimientos iniciados **a pedido de parte o** de oficio, **en contra de disposiciones normativas de carácter general que no han cumplido el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante para aprobar condiciones de operación o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil, el Indecopi debe comunicar a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) para que esta presente, durante la inmediatamente siguiente sesión del Consejo de Ministros, la necesidad de la modificación de cualquier numeral, literal, inciso o artículo de cualquier disposición normativa de carácter general u otras normas de inferior jerarquía del Poder Ejecutivo que contengan las barreras burocráticas identificadas como ilegales, a fin de lograr su derogación o nulidad. En caso la barrera burocrática declarada ilegal se encuentre consignada en** normas municipales y regionales de carácter general con rango de ley, **Indecopi deberá** acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra **dichas normas** que contengan barreras burocráticas identificadas como ilegales.

Artículo 13.- Metodología de análisis
La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad de las barreras burocráticas contenidas en **disposiciones normativas de carácter general** en los procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo **y la contenida en el Decreto Supremo N 063-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales donde se establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio ex ante y ex post.** La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y actuaciones materiales se efectúa de acuerdo **con la** metodología del presente capítulo en cuanto corresponda.

Artículo 14.- Análisis de legalidad

14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica, **en un primer momento** que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos:

[...]
a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis y si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la **elaboración, aprobación,** emisión y/o publicación de la **disposición normativa de carácter general** que materializa la barrera burocrática **denunciada**.

b. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa **o de calidad regulatoria como las contenidas en el Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM,** o cualquier **otro** dispositivo legal **vigente al momento en el cual la disposición normativa de carácter general fue publicada en el Diario Oficial El Peruano.**

14.2. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica, en un segundo momento, que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúen si la entidad denunciada ha desarrollado en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que aprueba la condición de operación u otra exigencia objeto de denuncia como barrera burocrática, todas y cada una de las seis (06) componentes del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) de manera previa a la elaboración de dicha disposición normativa de carácter general, la cual establece, incorpora o modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil. Para ello se deberá evaluar;

a. Si se ha definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable cuál es el problema de política pública que la entidad denunciada intenta resolver mediante el establecimiento, incorporación o modificación de la condición de operación o cualquier otra exigencia cuestionada. Para ello se debe demostrar la existencia de un interés público que sustente la aplicación de la medida cuestionada, y la existencia del problema que se pretendería solucionar con la medida cuestionada. Para acreditar que existe un real problema de política pública a resolver, se debe presentar evidencias objetivas, cuantitativas y/o cualitativas, para lo cual se debe realizar un diagnóstico del problema público identificando sus causas en base a evidencia, lo que implica el análisis de datos estadísticos, investigaciones, estudios empíricos u otra información verificable.

b. Si se ha identificado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable quiénes son los posibles afectados por la condición de operación o cualquier otra exigencia que se va a establecer, incorporar o modificar. Se debe identificar a las personas naturales o jurídicas que podrían resultar afectadas y beneficiadas con la regulación cuestionada si son los consumidores, los proveedores, o es la sociedad en su conjunto. La finalidad de esto es calcular correctamente el impacto de la norma, por un lado; y, conocer las opciones de los involucrados, por otra.

c. Si se ha identificado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable cuáles son las alternativas de solución planteadas para resolver el problema de política pública identificado en el paso uno y si se ha identificado y redactado un objetivo SMART que se pretenda alcanzar por cada una de las alternativas de regulación planteadas. El objetivo SMART debe de ser; específico: es decir que debe redactarse de tal

manera que sea claro lo que se pretende conseguir y debe circunscribirse a un aspecto, tarea o acción determinada por la entidad, medible: es decir que se pueda contar con los medios para medir los resultados alcanzados, alcanzable: es decir que el objetivo sea perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta, relevante: es decir que se encuentra alineada con los objetivos generales de la entidad, y temporal: es decir que se encuentran limitados en el tiempo, un tiempo determinado para alcanzar el objetivo planteado, y pueda ser verificado mediante el AIR "Ex Post". Para ello se debe identificar y desarrollar cada alternativa de solución regulatorio o no regulatoria. Nunca se debe dejar de lado la alternativa "no hacer nada", considerando que muchas veces la solución estatal no es razonable, por generar mayores costos (fallas del Estado) o por no tener los efectos esperados. A veces, dejar que el mercado se corrija a sí mismo o soportar la falla de mercado son alternativas más razonables.

d. Si se ha realizado una adecuada evaluación de los impactos de cada una de las alternativas de solución planteadas por la entidad o los agentes económicos afectados al resolver el problema de política pública identificado en el paso uno. Para ello se debe identificar cuáles son los costos y beneficios que genera cada alternativa incluyendo sus mecanismos de cumplimiento, con la finalidad de elegir la mejor alternativa de solución del problema público identificado (regulatoria o no regulatoria). Para realizar el análisis costo-beneficio (ACB) sobre las alternativas propuestas, se debe realizar una valorización de los costos fijos y variables que implica su cumplimiento para los agentes económicos posiblemente afectados por cada una de las alternativas viables. Muchas veces se comete el error de hacer solamente el ACB sobre la propuesta elegida, pero esto pierde de vista que la utilidad y la función del ACB es comparar alternativas. Por tanto, se debe realizar el ACB sobre cada una de las alternativas propuestas.

e. Si se ha realizado una presentación de las alternativas de solución y su respectivo análisis costo-beneficio, así como su matriz de evaluación de impactos a los grupos de interés afectados por la regulación denunciada como barrera burocrática, para el debate público. No existe una forma única de realizar esta consulta y tampoco un momento específico en el AIR. El momento en que se haga dependerá del problema y la necesidad de recabar información de los stakeholders a quienes afecta la regulación denunciada. Además, se deberá identificar, describir y desarrollar los mecanismos de implementación y cumplimiento para asegurar la viabilidad de la alternativa seleccionada como resultado del input de la socialización de las alternativas de solución y de la matriz de evaluación de impactos. También se deberá presentar el sustento y/o justificación del motivo por el cual se seleccionó la alternativa elegida, teniendo que demostrar que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida.

f. Si se ha demostrado que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite los siguiente tres puntos de manera complementaria;

1. Se realizó una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida elegida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.
2. Que se acredite que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.

3. **Que se acredite que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas.**

14.3. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara barrera burocrática ilegal la condición de operación o la exigencia denunciada.

Artículo 19.- Duración del procedimiento
El procedimiento seguido ante la Comisión tiene una duración máxima de ciento veinte (120) días hábiles **los cuales se computan desde la fecha en la que se presenta la denuncia por imposición de barreras burocráticas en la mesa de partes del Indecopi**. El mismo plazo se aplica para el procedimiento seguido ante la Sala **cuyo plazo de 120 días se computa desde la fecha en la que se emite la resolución de primera instancia por parte de la Comisión, razón por la cual la Comisión dispone de un plazo de 24 horas para poner en conocimiento de la Sala la resolución emitida por dicha instancia, las apelaciones presentadas por las partes del proceso y su resolución de admisión de las apelaciones, si las hubiera**.

Artículo 20.- Requisitos para interponer una denuncia
Para interponer una denuncia, además del pago de la respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos, los siguientes aspectos:

1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.

2. El medio de materialización: **disposiciones normativas de carácter general**, acto administrativo y/o actuación material. En caso de denunciar **una disposición normativa de carácter general**, el denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo**, el numeral, el literal, el inciso** o parte pertinente en que se encuentra materializada la barrera burocrática.

[...]

Artículo 21.- Representación en el procedimiento

[...]

21.3. Cuando las denuncias sean presentadas por una asociación, **no es necesario que** esta última deba precisar si lo hace en nombre propio o como representante de otros agentes económicos y/o administrados **si es que la barrera burocrática denunciada es materializada** en **disposiciones normativas de carácter general, pues en caso declararse barrera burocrática ilegal se** dispone su inaplicación con efectos generales. **En caso la barrera burocrática denunciada sea materializada en actos administrativos o actuaciones materiales, se debe acreditar la representación de aquellos agentes económicos que aporten los medios probatorios que acrediten la imposición de la barrera burocrática denunciada, y en caso sea declarada ilegal, su inaplicación será al caso concreto de los agentes económicos que hayan otorgado poderes de representación procesal suficientes para ser representados por dicha asociación. Si la declaratoria de ilegalidad de barreras burocráticas es materializada en actos administrativos o actuaciones materiales que tengan como sustento un numeral, literal, inciso o artículo de una disposición normativa de carácter general, en ese caso, se dispone su inaplicación con efectos generales.** La inaplicación al caso concreto a la que hace referencia el artículo 9 de la presente Ley, solo beneficia a aquellos asociados cuya representación fue acreditada por la asociación

mediante los citados poderes antes de la admisión a trámite de la denuncia. **Adicionalmente a ello, una asociación puede iniciar un procedimiento a pedido de parte pagando la tasa correspondiente, o presentar una denuncia informativa para que esta se inicie de oficio, en caso sea este último caso,** la Comisión o la Sala, **deben incorporar a la asociación como parte del procedimiento, para que le pueda llegar los descargos de la entidad denunciada, presente aclaraciones o apelaciones a la resolución de la Comisión en caso lo estime conveniente.**

Artículo 23.- Medidas cautelares
23.1. A sólo pedido del agente económico o gremio que lo representa, y que han presentado una denuncia de parte, la Comisión debe **emitir una resolución que conceda la** medida cautelar **solicitada, juntamente con la resolución de admisión a trámite,** con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente ilegal a ser evaluada, **mientras se emita** la resolución final.

23.2. En caso de que la medida cautelar haya sido dictada por la Comisión, el efecto de **esta** permanece hasta que la Sala emita pronunciamiento final o la revoque al declarar fundada una apelación **de la entidad denunciada.**

Artículo 24.- Requisitos para dictar medidas cautelares
Para dictar una medida cautelar, la Comisión debe verificar la existencia concurrente de:

1. La barrera burocrática que se pretende inaplicar.

2. La verosimilitud del carácter ilegal de la barrera burocrática **denunciada**.

3. La posibilidad de que por el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, **120 días hábiles** en primera instancia **y otros 120 días hábiles** segunda instancia, se cause un daño que se torne en irreparable para el denunciante.

Artículo 25.- De las costas y costos
25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, la Sala, **debe** ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos en los que haya incurrido el denunciante, **sin necesidad de** que este lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento, **ello con la finalidad de ofrecer desincentivos para que las entidades de la administración pública sigan aprobando condiciones de operación o cualquier otra exigencia sin realizar el debido Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, como sustento y/o justificación de las condiciones de operación u otras exigencias que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil**.
[...]

Artículo 26.- Resolución de admisión a trámite o de inadmisibilidad
[...]

21.2. Cuando la unidad de trámite documentario del Indecopi o la Secretaría Técnica de la Comisión advierta el incumplimiento de alguno de los requisitos antes mencionados, se puede hacer un único requerimiento para subsanar dentro del plazo de **cinco (05) días hábiles**. En caso de que el requerimiento efectuado no sea respondido dentro del plazo o, habiendo sido respondido, no se cumpla con subsanar las observaciones, la Secretaría Técnica de la Comisión puede declarar la inadmisibilidad de la denuncia y disponer la devolución de los actuados y de la tasa.

Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de parte

27.1. **La Secretaría Técnica de la Comisión** declara la improcedencia de la denuncia de parte de acuerdo con los supuestos establecidos en el Código Procesal Civil.

27.2. **Si la Secretaría Técnica de la Comisión**, estima que la denuncia es improcedente, la declara de manera liminar, finalizando así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por la Secretaría Técnica, pudiendo admitir los demás extremos.

27.3 **la Secretaría Técnica de la Comisión** puede efectuar requerimientos de información respecto de aspectos de procedencia de la denuncia.

Artículo 29.- Plazo para la presentación de descargos
[...]

29.2. En sus descargos, la entidad debe:

a. Presentar los argumentos de legalidad, dependiendo de lo cuestionado en la denuncia o en el procedimiento de oficio, respecto de la barrera burocrática cuestionada, conforme a la metodología de análisis **señalada en el artículo 13.- Análisis de legalidad, de la** presente ley.

[...]

c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación de la barrera burocrática cuestionada denunciada **en caso esta se encuentre contenida en una disposición normativa de carácter general** y/o la inaplicación de **esta** al denunciante en caso la barrera burocrática se encuentre materializada en un acto administrativo o actuación material. Esta obligación se mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento. La entidad debe presentar los documentos que acrediten sus afirmaciones.

[...]

Artículo 30.- Informe oral
El procedimiento seguido ante la Comisión incorpora una audiencia de informe oral a llevarse a cabo dentro de los primeros 30 días del plazo de 120 días que tiene la Comisión para resolver. Esta primera audiencia es donde las partes presentan sus alegatos de apertura, y comunican a los comisionados la teoría del caso, que debe presentarse de manera ordenada y estructurada, siguiendo la siguiente estructura; la introducción, presentación de los hechos, presentación de los fundamentos jurídicos y la conclusión.

En el procedimiento seguido ante la Sal también se incorpora una audiencia de informe oral a llevarse a cabo dentro de los primeros 30 días del plazo de 120 días que tiene la Sala para resolver. En esta segunda audiencia es donde las partes presentan sus alegatos de cierre o clausura, y comunican a los vocales los argumentos de la apelación, o descargos contra la apelación de la otra parte, que debe presentarse de manera ordenada y estructurada, siguiendo la siguiente estructura; la introducción, presentación de los hechos, presentación de los fundamentos jurídicos y la conclusión.

Ambas audiencias de informe oral, de apertura y de cierre, deben ser transmitidos en tiempo real, y deben permanecer en el Facebook y el canal de YouTube del INDECOPI, con la finalidad de promover una cultura de calidad regulatoria en la sociedad.

Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato
La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal **con efectos generales** al que se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley.

2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal **con efectos al caso concreto** al que se hace referencia en el artículo 9 de la presente ley.

Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales
[...]

c. Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con sustento normativo vigente, **o estando aprobado dicho sustento en una disposición normativa de carácter general esta no cumple con haber elaborado el debido sustento y/o justificación usando la metodología del Análisis de Impacto Regulatorio Ex ante señalado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM que establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante** .

[...]

Artículo 42.- Responsabilidad del procurador público o abogado defensor de la entidad denunciada
[...]

42.3. Es obligación del procurador público o abogado defensor de una entidad a la que se le denunció, de parte o de oficio, por imposición de barreras burocráticas, que antes de presentar al Indecopi, los descargos elaborados por la dirección responsable de redactar dicha barrera burocrática, revise si esta ha cumplido con presentar en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que establece, incorpora o modifica la condición de operación u otra exigencia objeto de denuncia como barrera burocrática, el debido sustento y/o justificación usando para ello la estructura expuesta en los lineamientos para implementar el Análisis de Impacto Regulatorio planteados en el artículo 13 de la presente ley, y en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM.

[...]

Artículo 43.- Medidas correctivas
[...]
2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales mediante las resoluciones de la Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las resoluciones de la Sala, como medida complementaria **para lo cual, en el portal de transparencia de la entidad, al costado del botón de acceso a la información pública, deberá crearse un botón denominado ¨calidad regulatoria¨, donde se almacenen todas las resoluciones del Indecopi que han fallado en contra de las barreras burocráticas impuestas por la mencionada entidad, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades de la sociedad.**

Artículo 44.- Forma de implementación y plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas:
[...]

Artículo 45.- Autoridad a cargo
La Comisión y su Secretaría Técnica tienen facultades para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia e iniciar procedimientos de oficio, las mismas que son ejercidas por los funcionarios que designen para tal fin. Las atribuciones en materia de investigaciones se rigen por lo señalado en la presente ley, **por lo dispuesto en el Decreto Supremo N 063-2021-PCM,** y por lo dispuesto en los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo N° 807 y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan.

Artículo 46.- Finalidad de las actividades de prevención
De conformidad con lo establecido por el principio de acción preventiva, los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales por parte de las entidades sujetas a investigación.

Artículo 47.- Actividades de supervisión, investigación e inspección en materia de eliminación de barreras burocráticas
Las actividades de supervisión, investigación e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio de procedimientos administrativos de competencia de la Comisión se rigen por el principio de acción preventiva reconocido en la presente ley, así como por las disposiciones sobre la materia establecidas en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM**, Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan. La Comisión y/o su Secretaría Técnica puede solicitar toda la información o documentación que consideren necesarias para el cumplimiento de las actividades descritas, a través de cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o electrónico.

Artículo 48.- Elaboración y difusión del Ranking de entidades en materia de barreras burocráticas
48.1. El Indecopi, previa propuesta de la Secretaría Técnica de la Comisión, **debe** elaborar y difundir **anualmente, en enero de cada año, informes** en los que incluya una relación de entidades según su nivel de cumplimiento respecto de las normas sobre eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa **y calidad regulatoria usando el Análisis de Impacto Regulatorio**, con la finalidad de dar a conocer esta información a los agentes económicos y administrados. De manera enunciativa y no limitativa, estos **informes deben desarrollar** los siguientes **temas**:
[...]
d. Un archivo Excel conteniendo en orden cronológico; el número de expediente, el número de resolución, la fecha de resolución, el nombre y RUC de la entidad denunciada, y la sumilla de la resolución final, de las resoluciones que declaran barreras burocráticas ilegales identificadas a través de procedimientos iniciados de parte y de oficio por la Comisión, y que, durante el año anterior, la Sala hubiera emitido Resolución final que haya agotado la vía administrativa.

[...]

Artículo 49.- Abogacía para la eliminación de barreras en leyes

Si durante la tramitación de los procedimientos, la Comisión o la Sala identifica la existencia de **reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil** dentro de una ley o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa, que pueda restringir o limitar el desarrollo de una actividad económica o las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa **o del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante y el air ex post**, **debe** disponer que su respectiva secretaría técnica emita una opinión a través de un informe técnico, recomendando la implementación de medidas que promuevan la eliminación de tales obstáculos en resguardo de las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o la simplificación administrativa **y/o calidad regulatoria**. **Dicho** informe técnico debe ser puesto en conocimiento del Congreso de la República y de **la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR)** del Poder Ejecutivo.

Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la eliminación de barreras burocráticas

50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se haya declarado la ilegalidad de una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan quedado consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno de la entidad respectiva dispone las acciones que considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.

[...]

Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras burocráticas

Créase el portal **de transparencia de Indecopi, al costado del botón de acceso a la información pública, un botón denominado "calidad regulatoria", donde se almacenen todas las resoluciones del Indecopi que han fallado en contra de las barreras burocráticas impuestas por diversas entidades de nivel nacional, regional y local,** teniendo como principal objetivo incluir el registro **las** resoluciones de la Comisión y de la Sala que declaran barreras burocráticas ilegales, **y las resoluciones en sede judicial de procedimientos contenciosos administrativos impulsadas por la entidad denunciada,** para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades de la sociedad. **Este registro debe estar separado por año, entidad denunciada, nivel de gobierno, y si son resoluciones de la Comisión, la Sala o un juzgado contencioso administrativo, entre otros criterios de filtro para búsqueda.**

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS

[...]

Tercera.- Aplicación supletoria

Las autoridades encargadas de la supervisión de la presente ley se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el **Decreto Supremo N 063-2021**, Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo N° 1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las normas que las sustituyan, en aquello que sea aplicable.

Artículo 3. Supresión

Suprímase el artículo 9°, 15°, 16°, 17° y 18°, numeral 6 del artículo 20, del Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, quedando sin efecto

Artículo 4. Modificación e incorporación

Modifíquense el numeral 13.1. del artículo 13°, y inciso a) y b) del artículo 22° del Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, **en los términos siguientes:**

Articulo 13. De los vocales de las Salas del Tribunal

13.1 Los Vocales de las Salas serán designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, **previo concurso público**, realizado conforme a lo establecido por el Reglamento.

13.2 Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y **moral** y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Sala.

Los Comisionados o Vocales deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:
1. No ser menor de 35 años de edad.
2. Contar con título profesional y grado de post grado.
3. No contar con antecedentes penales ni judiciales.
4. No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.
5. Contar con 10 años de experiencia profesional acreditada, de los cuales al menos 5 años deben ser en la administración pública.
6. No estar en situación de concurso, inhabilitado para contratar con el Estado o encontrarse condenado por delito doloso incompatible con el ejercicio de la función.
7. No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
8. No tener conflicto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su función. Y otros que establezca el Reglamento.

En caso de vencimiento del plazo del mandato, el comisionado o vocal ejerce funciones hasta la designación del reemplazante.

13.4 El cargo de vocal de Sala del Tribunal el desempeñado será a tiempo completo y exclusivo a excepción de la docencia universitaria previa autorización del Consejo Directivo.

Articulo 22. Designación de Comisionados

Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones:

a) Son designados por el Consejo Directivo, **previo concurso público**, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y,

[...]

DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL

UNICA: Adecuación de la Reglamentación

El poder ejecutivo mediante el presidente del Consejo de Ministros, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Economía y Finanzas, adecuaran el Reglamento en el plazo no mayor a 30 días, las disposiciones modificadas en la presente ley.

Lima, enero 2023.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MARTINEZ TALAVERA Pedro Edwin FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 03/02/2023 09:24:18-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Hernan FAU 20161749126 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 03/02/2023 10:35:04-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VERGARA MENDOZA Elvis Hernan FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/02/2023 10:34:45-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: PAREDES FONSECA Karol Ivett FAU 20161749126 soft
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 03/02/2023 09:52:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ARRIOLA TUEROS Jose Alberto FIR 25542661 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 06/02/2023 15:05:57-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: SOTO PALACIOS Wilson FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07/02/2023 09:51:31-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALVA PRIETO Maria Del Carmen FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/02/2023 14:31:47-0500

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

La presente iniciativa legislativa pretende la modificación, adición y supresión de la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, con la finalidad de adecuarla a lo que dispone; la Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030 aprobada mediante el Decreto Supremo 345-2018-EF y el Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado mediante el Decreto Supremo 237-2019-EF en lo que corresponda al **Objetivo Prioritario 6: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo**, así como cumplir el compromiso de implementar normas y principios de calidad regulatoria que realizó el gobierno peruano con la **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos** (**OCDE**; en inglés, Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), organismo de cooperación internacional cuya razón de ser es el intercambio de información para armonizar políticas públicas con la finalidad de maximizar el crecimiento económico y el desarrollo social de los países miembros, razón por la cual el Perú ha suscrito un acta para unirse a la OCDE y ha convertido en política de Estado la implementación de políticas de calidad regulatoria, como se acredita a continuación.



Unclassified **English/French**
10 June 2022

COUNCIL

Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022

ROADMAP FOR THE OECD ACCESSION PROCESS OF PERU

(Adopted by the Council at Ministerial level on 10 June 2022)

Con el presente proyecto se buscan introducir en el ordenamiento jurídico peruano la **exigencia legal** de que toda **condición de operación** (condición de mercado) y cualquier otra exigencia que genere o implique **variación de costos** en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil, deba presentar en la exposición de motivos de las disposición normativa de carácter general (reglamento de ley o norma con rango de ley) que las apruebe, el respectivo sustento y/o justificación técnica. Para elaborar dicho sustento y/o justificación, se debe usarse de manera obligatoria los lineamientos para el **Análisis de Impacto Regulatorio** (**AIR**; en inglés, Regulatory Impact Assessment, RIA) propuestos en las normas y principios de calidad regulatoria que la OCDE sugiere que el Perú deba implementar con la finalidad de aceptar su postulación como país miembro, en el marco de los compromisos a cumplir con el **Regulatory Policy Committee** (Comité de Política Regulatoria), como se acredita a continuación.

Appendix: List of Accession Core Principles for OECD Committees

This Appendix sets out Core Principles for the technical accession review of each OECD committee. As stated in Section III above, as part of its review, each committee will evaluate the alignment of Peru vis-à-vis all the substantive OECD legal instruments within its area of competence as well as Peru's policies and practices as compared to OECD best policies and practices, with reference to the corresponding Core Principles set out in this Appendix. These lists of Core Principles are non-exhaustive and the committees may consider other issues within their competence as appropriate. In coming to their own conclusions, committees may rely on technical opinions provided by their subsidiary bodies.

Regulatory Policy Committee

- Commitment to strengthen public governance through regulatory policy leading to high quality, fit-for-purpose laws and regulations that ensure transparency, legitimacy, accountability and respect for the rule of law to continuously strengthen trust in institutions and democracy;
- Improve and strengthen regulatory policy and governance at all levels of government to promote regulations that respond to economic, social and environmental challenges;
- The approach to policy development, including the establishment of institutions and processes for ensuring sound policy development, including regulatory impact assessment (RIA) and oversight and reporting on government-wide compliance with regulatory management practices;
- RIA assessment capacity, including the implementation of a regulatory impact assessment framework that addresses the appropriateness of regulating, determines the effectiveness of regulations to achieve their objectives, ascertains whether regulations give rise to unnecessary costs

and incorporates explicit consideration of alternative policy instruments, non-regulatory options as well as the efficient use of market mechanisms;

- Adherence to the principles of transparency and public participation in the development of regulations;
- Regulatory performance, including the performance of its regulatory system, focussing on the organisation of the functions of its regulatory agencies and inspectorates, their public accountability and their conformance with review and appeals processes;
- Multi-level governance for regulatory coherence, including the promotion of regulatory coherence through coordination with national, sub-national and supra-national bodies and the promotion of international regulatory co-operation;
- Develop agile regulatory governance to respond to the changing environment with more flexible regulatory systems that will be more resilient to future shocks;
- Capacity to consider relevant foreign and international regulatory frameworks when regulating and the ability to assess the transboundary impacts of regulatory measures.

En el caso del AIR, el Comité de Política Regulatoria de la OCDE afirma que se debe implementar una evaluación de impacto regulatorio marco que aborde la idoneidad de la regulación, determine la eficacia de la regulación para lograr sus objetivos, determine si la regulación genera costos innecesarios e incorporan la consideración explicita de instrumentos de política alternativos, opciones no regulatorias, así como el uso eficiente de mecanismos de mercado. En caso la entidad no acredite haber realizado el AIR para sustentar y/o justificar técnicamente toda **condición de operación** (condición de mercado) y cualquier otra exigencia que genere o implique **variación de costos** en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil dicha exigencia deberá ser declarada una barrera burocrática ilegal.

A continuación, se presenta la definición de barrera burocrática ilegal alineada a lo desarrollado en el **numeral 10.1 del artículo 10 Ámbito de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio** del Decreto Supremo 063-2021-PCM que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio.

Barrera burocrática ilegal: Es todo requisito, limitación, prohibición, obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad, cobro o toda exigencia que imponga

cualquier entidad, y que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). La sola calidad de requisito, limitación, prohibición, obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad, cobro o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento no implica necesariamente su carácter ilegal, pero si la disposición normativa de carácter general que estableció, incorporó o modificó dicha condición de operación o exigencia, no cuenta con el respectivo sustento y/o justificación usando la metodología del AIR de manera previa a su aprobación, o un agente económico denuncia esta condición de operación o exigencia como barrera burocrática y la entidad denunciada no es capaz de presentar el debido sustento y/o justificación cumpliendo con los criterios de calidad regulatoria planteados por la OCDE en el AIR, en ese caso, si se considera barrera burocrática ilegal y se ordena su inaplicación.

PROBLEMÁTICA DE LA GENERACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS

En el Perú la falta de un marco normativo que estandarice el procedimiento de emisión de normas pone en riesgo todo proceso de promoción de calidad en la regulación que se puede lograr a través de la implementación del Análisis de Impacto Regulatorio. Antes de la promulgación del Decreto Supremo 063-2021-PCM no existía una **obligación legal** para que las entidades públicas del Poder Ejecutivo de ámbito nacional implementen de manera obligatoria el AIR como un medio para elaborar el sustento y/o justificación técnica de toda disposición normativa de carácter general, cuando estas establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación (condiciones de mercado), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil. Sin embargo, el Decreto Supremo 063-2021-PCM ha excluido de dicha **obligación legal** para elaborar el sustento y/o justificación técnica usando el AIR a las **entidades públicas tanto de ámbito regional como local (provincial y distrital)**, lo cual se deduce de los siguientes numerales del artículo 10 del Decreto Supremo 063-2021-PCM;

> *10.1 La entidad pública del Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar el AIR Ex Ante previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (...)*
> *(...)*
> *10.6 La implementación por parte de los gobiernos regionales, gobiernos locales, u organismos a los que la Constitución Política del Perú y sus leyes orgánicas confieren autonomía, se realiza sin perjuicio de su autonomía y en todo aquello que resulte aplicable sin transgredir las leyes que los regulan, no encontrándose sujetos a la evaluación por parte de la CMCR.*

El numeral 10.1 del DS 063-2021-PCM hace referencia a que la obligación de implementar el AIR corresponde única y exclusivamente a las entidades públicas del Poder Ejecutivo, lo cual se deduce pues estas son de ámbito nacional, y no se hace referencia de ninguna manera a las entidades públicas de ámbito regional como son los gobiernos regionales, y a las entidades públicas de ámbito local como son los gobiernos municipales provinciales y distritales.

En el numeral 10.6 del DS 063-2021-PCM se permite que la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria se desentienda de hacer cumplir la obligación de implementar el AIR por parte de los gobiernos regionales y gobiernos locales, lo cual atenta contra el principio de calidad regulatoria planteado por la OCDE, pues a los agentes económicos los regula no sólo las entidades del Poder Ejecutivo, sino también las entidades públicas de ámbito regional como local. Así por ejemplo, a un agente económico que tiene su base en el Cuzco, y que presta el servicio turístico de transporte turístico terrestre de personas lo regula el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad que puede imponer barreras burocráticas de ámbito nacional, pero también lo regula la gerencia de transporte y la gerencia de turismo del gobierno regional del Cuzco, y la gerencia de transporte y la gerencia de turismo del municipio provincial y del municipio distrital del ámbito geográfico donde opere dicho agente económico, las cuales pueden imponer barreras burocráticas en el ámbito regional o local. Lamentablemente, de acuerdo con lo dispuesto por el DS 063-2021-PC, dichas entidades de ámbito regional y local no tienen la **obligación legal** de presentar el debido sustento y/o justificación técnica de la barrera burocrática denunciada, usando para ello obligatoriamente el AIR, por esta razón es necesario la modificación que introduce el presente proyecto de Ley a la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, donde se introduce la obligación legal de que las entidades públicas tanto de ámbito nacional, como regional y local, tengan como exigencia que toda condición de operación o cualquier exigencia que deseen aprobar, de manera previa deban elaborar el respectivo sustento y/o justificación técnica usando el AIR, ello independientemente de que tenga el visto bueno de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria.

En el Informe "**Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality**". Paris, Francia: OECD Publishing, **OCDE (2016)**, y en el Informe "**Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Gobierno Central del Perú: Estudios de caso 2014-16**". Paris, Francia: OECD Publishing, **OCDE (2019)**, se señala que sin ningún **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio, el objetivo de promover la calidad en la regulación se ve seriamente comprometido, aumentando el riesgo de captura regulatoria, y por consiguiente el aumento de barreras burocráticas, ya que la no existencia de mecanismos institucionalizados que confronten la validez, pertinencia y necesidad de la regulación, y el hecho de no rendir cuentas en un proceso transparente de generación de regulación o de evaluación "ex ante" de la normativa, genera como consecuencia un mayor riesgo a que los burócratas o agentes económicos dominantes tengan una influencia negativa sobre la regulación.

Es por ello por lo que el presente proyecto de Ley zanja dicha inquietud de la OCDE pues se señala de manera clara, expresa, taxativa e indubitable que es Indecopi mediante la Comisión y la Sala de eliminación de barreras burocráticas, durante el proceso de eliminación de barreras burocráticas ilegales, y no la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, el

organismo supervisor que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio como justificación y/o sustento técnico de las condiciones de operación o cualquier otra exigencia denunciada como barrera burocrática impuestas por entidades tanto del ámbito nacional como regional y local. En caso no cumplirse con la justificación usando el AIR, Indecopi la declara una barrera burocrática ilegal. Merece destacar que en el numeral 10.6 del artículo 10 del Decreto Supremo 063-2021-PCM, ya se excluyó a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria para que sea el **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio de las normas emitidas por las entidades públicas de ámbito regional y local.

De igual manera, en el DS 237-2019-EF donde se aprueba el Objetivo Prioritario (OP) 6: Ambiente de negocios. Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo, se señala que es responsabilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, y no de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, la Incorporación del Análisis de Impacto Regulatorio en la etapa previa a la formulación de propuestas normativas de alcance general en el Poder Ejecutivo y, progresivamente, los instrumentos de calidad regulatoria en los gobiernos subnacionales. Nuevamente, es por ello por lo que el presente proyecto de Ley zanja nuevamente la inquietud de la OCDE pues se señala de manera clara, expresa, taxativa e indubitable que es Indecopi mediante la Comisión y la Sala de eliminación de barreras burocráticas, durante el proceso de eliminación de barreras burocráticas ilegales, y no la Presidencia del Consejo de Ministros, el **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio como justificación y/o sustento técnico de las condiciones de operación o cualquier otra exigencia denunciada como barrera burocrática impuestas por entidades tanto del ámbito nacional como regional y local. En caso no cumplirse con la justificación usando el AIR, Indecopi la declara una barrera burocrática ilegal.

A modo de ejemplo, del error que sería que se designe a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria o la Presidencia del Consejo de Ministros como el **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio, en el siguiente cuadro se presenta la cantidad de denuncias por imposición de barreras burocráticas presentadas por los agentes económicos desde la creación del Indecopi. En dicho cuadro se evidencia una tendencia creciente que va desde cero en los años iniciales a 769 denuncias por imposición de barreras burocráticas sólo el año 2022, llegando a un total de 5,572 denuncias. Pero lo más saltante es que del año 2021 fecha en la que se promulga el Decreto Supremo 063-2021-PCM, el cual establece Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, al año 2022, se incrementó el número de denuncias de los agentes económicos por imposición de barreras burocráticas de 239 a 769, es decir hubo un incremento del 222%, con lo cual se acredita que ni la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria ni la PCM, responsables de implementar el DS 063-2021-PCM, deben constituirse en el **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio como la forma de elaborar el debido sustento y/o justificación de las barreras burocráticas denunciadas por los agentes económicos.

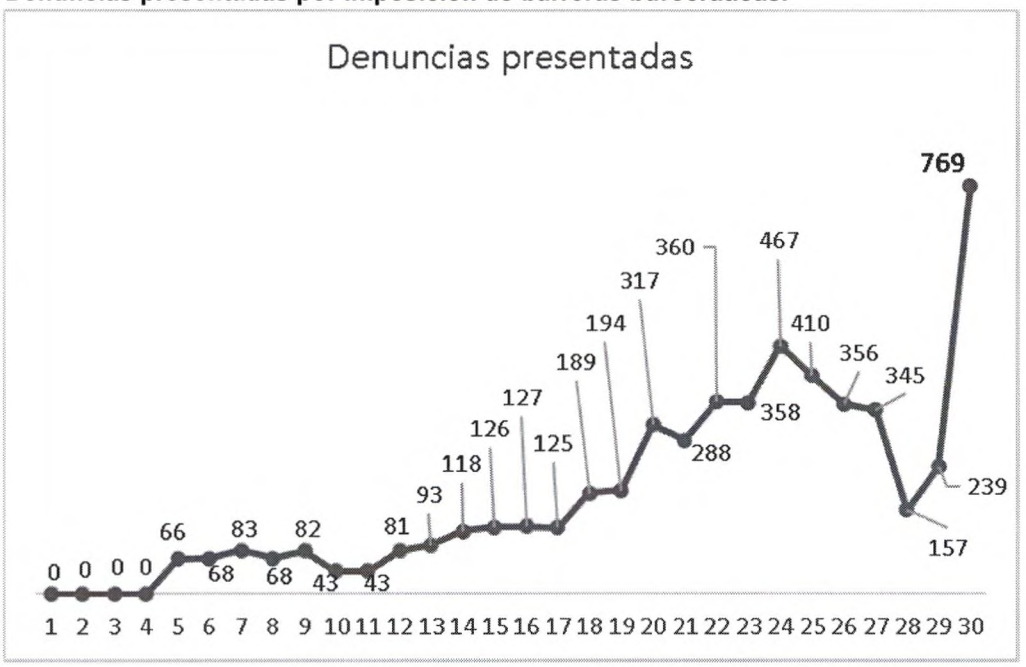
Denuncias presentadas por imposición de barreras burocráticas.

Año	Denuncias presentadas	Monto recaudado por tasas (S/.)
1993	0	
1994	0	
1995	0	
1996	0	
1997	66	
1998	68	
1999	83	
2000	68	24,882
2001	82	30,797
2002	43	18,122
2003	43	16,120
2004	81	32,019
2005	93	41,184
2006	118	50,817
2007	126	53,820
2008	127	56,420
2009	125	64,603
2010	189	100,376
2011	194	110,160
2012	317	190,368
2013	288	178,185
2014	360	249,256
2015	358	252,809
2016	467	307,128
2017	410	317,788
2018	356	273,115
2019	345	286,822
2020	157	118,790
2021	239	156,863
2022	769	439,624
Total =	5,572	2,828,626

Fuente: INDECOPI. Elaboración propia.

El incremento del 222% respecto al número de denuncias de los agentes económicos por imposición de barreras burocráticas, de un total de 239 el año 2021 fecha en la que se promulgó el Decreto Supremo 063-2021-PCM, a 769 el año 2022, como se muestra en el siguiente gráfico, se debió a que la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria y la PCM, decidieron de manera inconsulta con INDECOPI y con los gremios empresariales que estamos siguiendo el proceso de implementación de los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio, que el AIR sólo aplica a las normas que se aprueben a partir del año 2023, y no a las normas aprobadas el año 2022 o años anteriores.

Denuncias presentadas por imposición de barreras burocráticas.



Fuente: INDECOPI. Elaboración propia.

Si bien se denunciaron 769 barreras burocráticas el año 2022, según consultas realizadas con los gremios empresariales, sólo la grandes, medianas y pequeñas empresas son las que presentan denuncias por imposición de barreras burocráticas, las microempresas, las cuales representan más del 96% de las empresas del Perú no suelen presentar denuncias por imposición de barreras burocráticas debido a que no cuentan con la capacidad económica para; pagar la "tasa" o "derecho de tramitación" de S/ 507.65 que exige Indecopi para iniciar "el procedimiento para la determinación e inaplicación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad que limitan el acceso o permanencia en el mercado de los agentes económicos, así como las trasgresiones a las normas y principios de simplificación administrativa comprendidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General", o no cuentan con presupuesto para pagar los servicios de un abogado que haga el análisis de legalidad, y un economista o ingeniero que elabore **indicios de carencia de razonabilidad**, necesarios para presentar una denuncia por imposición de barreras burocráticas ante Indecopi. Por esta razón se considera que, si bien se denunciaron 769 barreras burocráticas durante el 2022, el número de barreras burocráticas no denunciadas debiera ser mucho mayor, pero no fueron denunciadas por el excesivo costo que implica a las microempresas poder denunciarlas, lo cual el presente proyecto de Ley busca corregir.

Por estas razones el presente proyecto de Ley elimina la exigencia que la CARGA DE LA PRUEBA recaiga en el agente económico que sufre la barrera burocrática, y en su lugar recaiga en la entidad pública tanto de ámbito nacional, como regional o local que emite la barrera burocrática denunciada la cual tendrá que sustentar y/o justificar mediante el AIR. Actualmente los indicios de carencia de razonabilidad, que pueden o no ser aceptados por Indecopi, se da debido a que actualmente no existe en el marco legal peruano una **obligación legal** para que las entidades públicas elaboren un sustento y/o justificación de toda disposición normativa de carácter general, cuando estas establezcan, incorporen o modifiquen

condiciones de operación o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento, razón por la cual se constituyen en barreras burocráticas.

Por otro lado, mediante la **Resolución de Secretaría de Gestión Pública 008-2021-PCM**, de 11 de junio de 2021, la PCM da excesivos plazos como el año 2027 para que los ministerios y organismos públicos inicien a aplicar obligatoriamente el AIR como sustento y/o justificación técnica de las barreras burocráticas denunciadas por los agentes económicos.

Tabla 6. Cronograma de aplicación obligatoria y progresiva del AIR Ex Ante y la Agenda Temprana en las entidades públicas del Poder Ejecutivo

Entidades de los sectores	Proyectos de regulaciones que son evaluados	Plazo de inicio para la aplicación obligatoria del AIR Ex Ante	Plazo de inicio para la aplicación obligatoria de la Agenda Temprana[2]
Grupo 1: Presidencia del Consejo de Ministros, Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Vivienda, Construcción y Saneamiento	**Ministerios:** Proyectos Decretos Supremos Multisectoriales o Sectoriales y normas con mayor jerarquía de carácter general en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante. **Organismos Públicos:** Proyectos normativos de alcance general aprobados mediante resolución del órgano de dirección o titular de la	01 de julio 2022	Enero 2023
Grupo 2: Economía y Finanzas, Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, y Energía y Minas.		03 de octubre 2022	
Grupo 3: Transportes y Comunicaciones, Educación, Trabajo y Promoción del Empleo, y Cultura		02 de enero 2023	
Grupo 4: Justicia y Derechos Humanos, Interior, Salud, Defensa, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social y Relaciones Exteriores	entidad en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el -proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante; siempre que cuente con habilitación de norma con rango de ley.	03 de abril 2023	
Todos los grupos: 1, 2, 3 y 4	**Ministerios y Organismos Públicos:** Demás proyectos normativos de carácter general, de menor jerarquía a lo dispuesto en el cuadro anterior, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la Aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.	01 de julio 2027	

Para incrementar el plazo de implementación del AIR, la PCM aduce que se debe a que se requiere previamente una capacitación de los funcionarios públicos a cargo de la regulación. Sin embargo, lo que parece pretender desconocer PCM es que desde hace años la OCDE recomienda integrar el AIR a las primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas que formulen proyectos regulatorios nuevos, por lo que desde el año 2017 el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de contribuir a mejorar la creación de normas en el Perú y en respuesta a las sugerencias de la OCDE elaboró la **"Guía sobre el Análisis de Impacto Regulatorio: Introducción a la Evaluación Post Regulatoria"**, Minjus (2017), en la cual se desarrolla el proceso de formación normativa usando el AIR, razón por la cual los funcionarios públicos a cargo de la regulación ya se encuentran capacitados, como se acredita en la siguiente tabla.

Tabla: Proceso de formación normativa usando el AIR.

Contenido	Finalidad
1) Definición del problema	- Definir adecuadamente problema que la regulación pretende resolver. - Definir si la causa del problema es una falla de mercado o una falla de regulación, para lo cual se analiza causas, naturaleza e implicancias.
2) Identificación de posibles afectados	- Identificar a los agentes económicos afectados o beneficiados. - Identificar a los gremios que representan a dichos agentes económicos. - Recabar opinión de dichos gremios respecto a problema identificado.
3) Identificación de alternativas	- Alternativa de solución 1: Alternativa de la entidad reguladora. - Alternativa de solución 2: Alternativa de los agentes económicos. - Alternativa de solución 3: Dejar que el mercado se regule sólo.
4) Análisis costo beneficio	- Hacer análisis costo-beneficio de cada alternativa de solución. - Costos de medida para agentes económicos debe ser validado por ellos.
5) Consulta alternativas	- Matriz de comparación de alternativas presentadas a interesados. - Mesas técnicas con gremios representan "stakeholders" afectados.
6) Definición de alternativas	- Desarrollar proceso transparente de elección de la alternativa elegida. - Alternativa elegida no debe ser arbitraria y debe ser "proporcional a sus fines".

Fuente: MINJUS (2017). Elaboración propia.

En primer lugar, se identifica el problema que hace necesario la acción del Estado, el cual puede ser generado por fallas de mercado o fallas de la regulación existente. Luego se identifica a los posibles afectados por la política pública a implementar. Seguidamente se identifica y define las posibles opciones regulatorias, incluyendo la opción de no regular o que los agentes se autorregulen.
[...]
En cuarto lugar, se procede a realizar un análisis costo beneficio que permita elegir entre las opciones disponibles, seguidamente se realizan consultas públicas con participación de los involucrados. Finalmente, se elige la opción regulatoria más adecuada.

Es por ello por lo que, tal como se recomienda en OCDE (2016) y en OCDE (2019), el **organismo supervisor** que exija el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio debiera ser Indecopi. Estas recomendaciones pasan por la absorción de los órganos de PCM, MEF y Minjus que integran la CMCR a un solo ente supervisor que concentre todas las competencias de política regulatoria, el cual se encuentra formado por la **Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas** (**CEB**) y la **Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas** (**SEL**) del

Indecopi, lo cual debiera ser realizado mediante una **Ley General de Mejora Regulatoria**, tal como lo sugiere la propio OCDE. Este nuevo órgano sería responsable de implementar el AIR, así como supervisar, fiscalizar y sancionar su incumplimiento en las entidades del Estado, tanto a nivel nacional, como regional y local. Siendo también competente para eliminar barreras burocráticas impuestas por las entidades del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Locales.

En lugar de seguir las recomendaciones planteadas en OCDE (2019), el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de gestión Pública, creó la **Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria** (**CMCR**) que inicialmente era de naturaleza temporal para realizar el **Análisis de Calidad Regulatoria** (**ACR**) para la creación o modificación de procedimientos administrativos del **Texto Único de Procedimientos Administrativos** (**TUPA**) de las entidades de la administración pública. Y ahora convirtió dicha Comisión multisectorial, en una de naturaleza permanente para realizar el **Análisis de Impacto Regulatorio** (**AIR**) de los proyectos normativos de las entidades del Poder Ejecutivo a aprobarse a partir del año 2023, lo cual genera un **LIMBO LEGAL** que el presente proyecto de Ley pretende resolver.

El **LIMBO LEGAL** al que se hace referencia en el párrafo anterior, corresponde a que para la CMCR el AIR recién debe implementarse a partir del año 2023, pero no se señala de manera clara, expresa, taxativa e indubitable que ocurrirá con **la revisión de la regulación existente (Stock Regulatorio)**, que son disposiciones normativas de carácter general mediante las cuales ya se han aprobado que estas establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil. El presente proyecto de ley brinda una salida para dicho limbo legal.

Indecopi mediante Informe N° 000772-2022-OAJ/INDECOPI, de fecha 22 de diciembre de 2022, en la respuesta al representante legal de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas – APETUR, en el fundamento 29, identifica el problema, mediante la existencia de problema y la necesidad de intervención en función a la revisión del stock regulatorio y al agente mejor posicionado; fundamentando que el problema radica en que el INDECOPI, en la actualidad se encuentra restringido, pues debe hacer este análisis de acuerdo a lo que señala el Decreto legislativo N° 1256, el cual se encuentra desactualizado y es anacrónico, con respecto a lo que señala el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, y además en su fundamento 56 se entiende que por jerarquía de normas el Decreto Supremo 063-2021-PCM debió haberse adecuado al Decreto Legislativo 1256, al tratarse la segunda de una norma con rango de ley y la primera una norma posterior con rango reglamentario.

La finalidad de la propuesta legislativa es mejorar la supervisión del cumplimiento del marco legal de **calidad regulatoria**, que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa, y **la calidad regulatoria** de las disposiciones normativas de carácter general con el objeto de procurar una

eficiente prestación de servicios al ciudadano y a los agentes económicos por parte de las entidades de la administración pública. Bajo los parámetros de la Buena gobernanza y regulación, que en la actualidad son dos de los conceptos clave que constituyen la base de los programas de calidad regulatoria, es que han sido desarrollados e implementados entre los países "bien gobernados", agrupados a la OCDE, para contribuir a su crecimiento económico y a una mejor calidad de vida de los ciudadanos y fortalecer el imperio de la Ley.

Por ello se propone la iniciativa legislativa de modificación, supresión y adición en el Decreto Legislativo 1256 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, que fue publicado el 07 de diciembre del 2016, a la fecha se encuentra desactualizado dificultando la aplicabilidad a la entidad encargada de INDECOPI. Y posterior a ello se publicó el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, donde incorpora las innovaciones y actualizaciones necesarias que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria; así como, establecer los lineamientos generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio y de otros instrumentos que aseguren la idoneidad y la calidad del contenido de las intervenciones regulatorias, en el marco de lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1448, Decreto Legislativo que modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de Simplificación Administrativa, y Perfecciona el Marco Institucional y los Instrumentos que rigen el Proceso de Mejora de Calidad Regulatoria, con la finalidad de establecer las reglas y responsabilidades para garantizar el adecuado funcionamiento del marco institucional para la Mejora de la Calidad Regulatoria; así como, la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

Marco Normativo

- Constitución Política del Perú
- Reglamento del Congreso de la Republica
- Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
- Decreto Supremo 004-2019, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo Nº 807, Facultades, normas y organización del INDECOPI.
- Decreto Legislativo Nº 1033, Decreto Legislativo que aprueba la ley de organización y funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
- Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
- Decreto Supremo Nº 123-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- Decreto Supremo Nº 237-2019- EF se aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
- Decreto Supremo Nº 237-2019- PCM, Aprueban Reglamento que regula las Políticas Nacionales.
- Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y

eliminación de barreras burocrática.

- Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

La Constitución Política del Perú de 1993, Reconoce los derechos fundamentales a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa, los cuales se encuentran relacionados con la protección del desempeño de las actividades económicas en el mercado (derechos económicos). Asimismo, la Constitución Política reconoce el derecho fundamental de petición, el cual garantiza a los ciudadanos que los procedimientos administrativos ante entidades públicas cumplan con parámetros que respalden eficiencia y oportunidad. Dichos derechos fundamentales conforman en conjunto un contrapeso frente a la labor del Estado de garantizar la protección del 'interés público'. Por lo que, la Constitución Política se convierte en un auténtico instrumento legal de control del poder económico del Estado y de los propios particulares. La búsqueda de un equilibrio entre los derechos fundamentales señalados y el 'interés público' da lugar al "procedimiento de eliminación de barreras burocráticas.

Interés Público: como sociedad se busca y espera alcanzar se da a través de las entidades de la Administración Pública quienes de acuerdo con sus competencias y facultades establecen normativas en aras de dicho interés. La manifestación de la protección del Estado hacia el 'interés público' se canaliza a través de su actividad de policía, conocida como el conjunto de limitaciones de las actividades privadas, por parte de una autoridad y en el interés público. El poder de policía incluye toda la actividad del estado relacionada con la reglamentación y control de las acciones de los agentes privados.

En todos los casos, abarca una serie de aspectos (colectivos) de la vida que el Estado debe proteger y garantizar al ciudadano: seguridad, salud, orden público, educación, tranquilidad, entre otros. De ahí que, el término 'interés público' pueda resultar difuso, abstracto y amplio, considerado un concepto jurídico indeterminado, pero - al mismo tiempo – es la justificación de una determinada acción y regulación de las entidades públicas al ejercer la referida protección en un ámbito específico.

Derechos a la Libre Iniciativa Privada y a la Libertad de Empresa: La Constitución Política del Perú, en el artículo 58°, de Economía Social de Mercado, establece que la Iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

Se reconoce la libertad de las personas de emprender, iniciar, establecer, empezar la actividad económica de su preferencia dentro de una economía social de mercado. Esto quiere decir que el Estado no interviene con un rol empresarial activo dentro del mercado ni limita a sus ciudadanos en sus iniciativas de emprendimiento empresarial, sino que es el garante de la competencia entre ellos. Por tanto, el Estado se presenta con un rol protector de dicha iniciativa privada y sólo interviene en materias esenciales como la promoción del empleo, prestación de servicios públicos, seguridad, infraestructura y educación. Se entiende entonces como un Estado que no compite con los particulares en la actuación empresarial, sino que

colabore con ellos, pero que se halle atento a los excesos que pudieran generarse en una economía de mercado.

Libre Mercado: Si bien la Constitución Política del Perú, en el artículo 58°, señala que en el Perú se desarrolla una Economía Social de Mercado, esta se rige por el libre mercado, que no es otra cosa que un sistema en el que **el precio de los bienes y servicios** se rigen por la ley de oferta y demanda. El libre mercado para su implementación requiere una mínima intervención del Estado a través de regulaciones, y que el Estado se abstenga de querer intervenir en el precio a través de regulaciones. Es por ello cuando incorpora o modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación (condiciones de mercado), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos, de manera directa el Estado está interviniendo en **el precio de los bienes y servicios** debido a que los agentes económicos que desean acceder o permanecer en el mercado, deberán trasladar al precio, la variación en el costo que demande el cumplimiento de las barreras burocráticas generadas cuando el Estado modifica condiciones de operación (condiciones de mercado) o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento.

Eliminación de la barrera burocrática

La labor en eliminación de barreras burocráticas representa – justamente- dicho mecanismo pues si bien el Estado tiene la potestad de formular regulaciones y medidas en virtud de la protección del interés público, también se encuentra en el deber de garantizar reglas uniformes para los agentes económicos durante el ejercicio de su derecho a acceder y permanecer en el mercado, así como de emitir medidas de simplificación administrativa y calidad regulatoria para quienes tramitan un procedimiento ante las autoridades estatales.

De la búsqueda por alcanzar dicho equilibrio, nace el "Procedimiento de Eliminación de Barreras Burocráticas" a cargo del Indecopi, el cual comprende una serie de conceptos y lenguaje propios que resulta relevante familiarizar, a fin de comprender- de mejor manera - el análisis de una barrera burocrática, así como la labor de la institución. Los fundamentos y el marco conceptual sobre el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas del Indecopi contribuyen a comprender el balance entre la protección de derechos fundamentales y el interés público, de importancia real dado que "el cumplimiento de trámites derivados de la regulación impacta con un costo directo para ciudadanos y empresas".

El derecho a la libre iniciativa privada es un reconocimiento pleno de la pertenencia del sector privado (todas las personas que quieren ejercer 'empresa') sobre el mercado, mientras que el Estado únicamente establece medidas que contribuyen a un buen funcionamiento del mercado y no crea riqueza directamente mediante un rol empresarial. Parte de ello se refleja en un procedimiento que identifique, evite, reduzca y elimine las trabas burocráticas que afectan el derecho a la libre iniciativa privada. Por ejemplo, si una persona busca ejercer dicho derecho, pero se encuentra frente a regulaciones y trámites excesivos que afectan su acceso o permanencia en el mercado, lo que se está afectando – finalmente – es el derecho a la libre iniciativa privada: libertad de 'iniciar una actividad

económico-empresarial' y/o de desarrollar un negocio porque para lograrlo requiere acceder al mercado y permanecer en éste.

El Tribunal Constitucional Exp. 08-2003-AI/TC, ha señalado que dentro de la libre iniciativa privada existe esta protección estatal, entendida como el conjunto de normas orientadas a establecer las pautas básicas sobre las que debe fundarse el régimen económico de una sociedad.

Libertad de Empresa

La Constitución Política del Perú, en el artículo 59, establece que, El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades.

El Tribunal Constitucional Exp. 3330-2004-AA/TC, ha determinado que el ejercicio al derecho a la libertad de empresa implica lo siguiente: El contenido de la libertad de empresa está determinado por cuatro tipos de libertades, las cuales terminan configurando el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho. En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado significa libertad para emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado, tema que será materia de un mayor análisis infra. En segundo término, la libertad de organización contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros). En tercer lugar, está la libertad de competencia. En último término, la libertad para cesar las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más oportuno

Mediante Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, desarrolla el marco institucional que rige el proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria; así como, establecer los lineamientos generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante y de otros instrumentos que aseguren la idoneidad y la calidad del contenido de las intervenciones regulatorias, estableciendo las reglas y responsabilidades para garantizar el adecuado funcionamiento del marco institucional para la Mejora de la Calidad Regulatoria; así como, la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (AIR Ex Ante): Es un proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público bien definido, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de adoptar la mejor alternativa de intervención en base a evidencia (política pública basada en evidencias). Si la alternativa resultante de la evaluación correspondiente es una regulación,

su desarrollo debe ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico vigente de calidad regulatoria, así como establecer los mecanismos para su cumplimiento.

Agenda temprana. - Es el instrumento mediante el cual la entidad pública programa y publica sus problemas públicos y posibles intervenciones regulatorias teniendo en cuenta el alcance del AIR Ex Ante establecido en el artículo 10 del presente Reglamento, durante el año fiscal, con la finalidad de lograr mayor predictibilidad, participación y transparencia en el proceso de producción regulatoria.

Análisis de Impacto Regulatorio Ex Post (AIR Ex Post): Es un proceso de evaluación de regulaciones vigentes, en base a un análisis sistemático e integral, con el propósito de determinar si el problema público permanece y, de ser el caso, si ha sido abordado efectivamente, si se han cumplido con los objetivos planteados, y/o si hubo situaciones o impactos no previstos. Permite también identificar oportunidades de mejora, modificaciones y/o derogaciones de las regulaciones como parte de la retroalimentación del ciclo para la Mejora de la Calidad Regulatoria. La evaluación AIR Ex Post no constituye la derogación o conclusión de la vigencia de una regulación. Se efectúa teniendo en cuenta los lineamientos que para tal efecto se emitan.

Aplicativo informático para el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante (Aplicativo Informático AIR Ex Ante): Soporte informático administrado por la Secretaría de Gestión Pública, en el cual las entidades públicas ingresan la información del AIR para su posterior revisión por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. Permite compilar, sistematizar, gestionar y difundir la información generada.

ANTECEDENTES

Si bien a partir del año 2000, la economía peruana mostró una expansión económica sostenida, con tasas superiores a décadas anteriores, los agentes económicos siguen enfrentando diversas barreras burocráticas que obstaculizan su actividad empresarial debido a una serie de exigencias que no cuentan con el debido sustento y/o justificación técnica y que obstruyen el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado con lo cual se limita drásticamente las tasas de crecimiento económico generadas a partir del año 2000. Estas exigencias no sólo se encuentran como requisitos de procedimientos administrativos contenidos en el **Texto Único de Procedimiento Administrativo** (**TUPA**) de la entidad que impone la barrera burocrática, sino que, también se encuentran contenidos en disposiciones normativas de carácter general que aprueban **condición de operación (condición de mercado)** o cualquier otra exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos.

En este contexto, una preocupación de distintos formuladores de políticas públicas desde los 90s, ha sido establecer el **marco legal** que impida la generación de barreras burocráticas desde su génesis, en lugar de tener que buscarlas para inaplicarlas con posterioridad, pues lo segundo genera doble trabajo a la administración pública el tener que identificar barreras burocráticas para eliminarlas cuando ya han sido promulgadas, además del daño irreparable de restar competitividad y productividad a los agentes económicos al impedir su acceso o

permanencia en el mercado a través de la exigencia de **condiciones de operación (condiciones de mercado)** que no cuentan con el debido sustento y/o justificación técnica contenida en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que aprueba dicha **exigencia**. Así, a modo de ejemplo, el 07 de octubre de 1999, mediante Ley 27181, se aprobó en el texto primigenio del **artículo 5.- De la promoción a la inversión privada** el articulado que puede denominarse predecesor del **Análisis de Impacto Regulatorio**, pues señalaba lo siguiente;

> *"5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente las condiciones de mercado sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte."*

Lo dispuesto en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 27181, se encuentra alineado a lo que señalaba el Decreto Ley 25868 promulgado en noviembre de 1992, el cual creó el **Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)**, uno de cuyos órganos, la "**Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado**" tenía como función, entre otras, supervisar que no se impongan barreras burocráticas que afecten el "acceso" o la "salida" de las empresas en la actividad económica, además de velar por las normas de simplificación administrativa. En el año 1996, mediante Decreto Ley 807, dicho órgano cambió su denominación por "**Comisión de Acceso al Mercado**" con la facultad de conocer los actos y disposiciones de las entidades de la administración pública que generan barreras de acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y para velar por el cumplimiento de las normas que garantizan la **simplificación administrativa** y que protegen la libre iniciativa privada.

Del párrafo anterior se acredita la necesidad de que a INDECOPI se le añada la facultad de velar por el cumplimiento de las normas que buscan la **calidad regulatoria** y que protegen la libre iniciativa privada a través de garantizar el cumplimiento del **Análisis de Impacto Regulatorio** como una metodología que permite que se elabore el debido sustento y/o justificación técnica cuando se establezca, incorpore o modifique cualquier exigencia para acceder o permanecer en el mercado, con la finalidad de garantizar la estabilidad de las reglas de juego y que no se alteren injustificadamente las **condiciones de operación** (condiciones de mercado) sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación los agentes económicos.

Ahora bien, si bien la OCDE sugirió que para implementar el AIR se deba hacer mediante la aprobación de una **Ley General de Mejora Regulatoria** que tenga el objetivo de: 1) Crear y organizar el funcionamiento de un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; 2) Establecer la **obligación legal** de que toda entidad de la administración pública, en el ámbito nacional, regional y local, deba elaborar el debido sustento y/o justificación técnica previo a la elaboración de cualquier disposición normativa de carácter general que **establezca**, **incorpore** o **modifique** una **condición de operación** o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos; entre otros. El 09 de octubre de 2016, el Congreso delegó esta iniciativa mediante la Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, entre otros, en cuyo **literal a.7) del artículo 2. Materia de la delegación de facultades legislativas**, se señala;

> *"En el marco de la delegación de facultades a la que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, el Poder Ejecutivo está facultado para:*

1) Legislar en materia de reactivación económica y formalización a fin de:
(...)
a.7) ***Adecuar la legislación nacional a los estándares y recomendaciones internacionales emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)...***"

Es así como amparados en la Ley 30506, el 10 de noviembre de 2016, funcionarios del Poder Ejecutivo elaboraron e hicieron promulgar el Decreto Legislativo 1246, Decreto Legislativo que aprueba diversas medidas de **simplificación administrativa** donde la PCM no consideró como una acción de **calidad regulatoria**, crear una **obligación legal** para que toda entidad de la administración pública, en el ámbito nacional, regional y local, tenga que elaborar el debido sustento y/o justificación técnica previo a la elaboración de cualquier disposición normativa de carácter general que **establezca**, **incorpore** o **modifique** una **condición de operación** o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos.

El 30 de diciembre de 2016, elaboraron e hicieron promulgar el Decreto Legislativo 1310, Decreto Legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa, en cuyos **numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2. Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos**, se señala;

> *"2.1. Las entidades del Poder Ejecutivo deben realizar un* ***Análisis de Calidad Regulatoria*** *de todas las disposiciones normativas de alcance general, a excepción de las contenidas en leyes o normas con rango de ley, que establezcan procedimientos administrativos, a fin de identificar, reducir y/o eliminar aquellos que resulten* ***innecesarios***, ***injustificados***, ***desproporcionados***, ***redundantes*** *o no se encuentren adecuados a la Ley del Procedimiento Administrativo General o a las* ***normas con rango de ley*** *que les sirven de sustento. (...)*
>
> *2.2. Mediante el* ***Análisis de Calidad Regulatoria*** *se evalúan principios como el* ***costo – beneficio***, ***necesidad***, ***efectividad***, ***proporcionalidad***, *de las disposiciones normativas señaladas en el 2.1, conforme se establecerá en el Reglamento del presente Decreto Legislativo."*

Lamentablemente, en este Decreto Legislativo 1310 tampoco se consideró como una acción de **calidad regulatoria**, la creación de una **obligación legal** para que toda entidad de la administración pública, en el ámbito nacional, regional y local, deba elaborar el debido sustento y/o justificación técnica previo a la elaboración de cualquier disposición normativa de carácter general que **establezca**, **incorpore** o **modifique** una **condición de operación** o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos, sustento y/o justificación que debe usar como plantilla la metodología del **Análisis de Impacto Regulatorio** para su elaboración, y que debe colocarse en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que aprueba dicha exigencia.

En su lugar, el Decreto Legislativo 1310 creó un constructo que genera confusión con el **AIR**, pues lo denomina **Análisis de Calidad Regulatoria** (**ACR**), el cual no fue sugerido por la OCDE y a diferencia del AIR, el ACR no es una **obligación legal** para garantizar la **calidad regulatoria** que permita que se elabore el debido sustento y/o justificación técnica cuando se establezca, incorpore o modifique cualquier exigencia para acceder o permanecer en el mercado, con la finalidad de garantizar la estabilidad de las reglas de juego y que no se alteren injustificadamente las **condiciones de operación** (condiciones de mercado) sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación los agentes económicos.

El Decreto Legislativo 1448, que modifica el artículo 2 del DL 1310, a pesar de que, si incorpora como parte de los instrumentos de mejora de la calidad regulatoria al Análisis de Impacto Regulatorio, conforme al detalle presentado a continuación:

> *"Artículo 5.- Instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria*
> *Son instrumentos para la mejora de la calidad regulatoria, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes:*
> *(...)*
> ***c) El análisis de impacto regulatorio ex ante y ex post."***

tampoco consideró la necesidad de crear una **obligación legal** para que toda entidad de la administración pública deba elaborar el debido sustento y/o justificación técnica previo a la elaboración de cualquier disposición normativa de carácter general que **establezca**, **incorpore** o **modifique** una **condición de operación** o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos.

Ahora bien, también amparados en la Ley 30506, el 08 de diciembre de 2016, funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) elaboraron e hicieron promulgar el Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la LEY DE PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÀTICAS donde la PCM nuevamente tampoco consideró como una acción de **calidad regulatoria**, **a fin de cumplir el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología que permite identificar y eliminar barreras burocráticas ilegales**, que toda entidad de la administración pública, en el ámbito nacional, regional y local, que pretenda promulgar cualquier disposición normativa de carácter general que **establezca**, **incorpore** o **modifique** una **condición de operación** o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos tal como lo sugirió la OCDE y había sido desarrollado ampliamente por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) que posteriormente lo consolido en la "Guía sobre el **Análisis de Impacto Regulatorio**. Guía para asesores jurídicos del Estado".

DESARROLLO DE LA PROPUESTA

Lo Desarrollado en el párrafo anterior justifica la necesidad del presente **proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1256, ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, a fin de cumplir el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología que permite identificar y eliminar las barreras burocráticas ilegales** impuestas por las entidades de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local. Más aún, se justifica el presente proyecto de Ley pues la metodología para realizar el Análisis de Impacto Regulatorio ya existe, no necesita ser creada al haber sido desarrollada por la OCDE, y en el Perú ya existe en nuestro ordenamiento jurídico desde el **13 de diciembre de 2017**, fecha en la cual fue aprobada mediante **Resolución Directoral 004-2017-JUS/DGDNCR** la "Guía sobre el **Análisis de Impacto Regulatorio**. Guía para asesores jurídicos del Estado" en la cual se señala que el AIR, como fue originalmente pensado por la OCDE, está impregnado de un desafío fundamental. El análisis normalmente se realiza una vez que la decisión sobre qué política pública seguir ya ha sido tomada, cuando debería hacerse antes de que exista alguna propuesta normativa. Siendo esto así, entonces, las etapas o componentes del AIR consisten en:

> *"**1. Definición del problema:** el primer paso siempre es identificar exactamente cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante una norma. La definición del problema, desde el punto de vista económico, se identifica con las fallas de mercado. Sin embargo, dado que los intereses que busca resolver la sociedad*

pueden ser -y suelen ser- extra económicos, el problema a resolver puede ser, por ejemplo, mejorar la salud o la educación de la población o reducir la criminalidad.

2. Identificación de posibles afectados: *se debe identificar a las personas que podrían resultar afectadas o beneficiadas con la regulación. La finalidad de esto es calcular correctamente el impacto de la norma, por un lado; y, conocer las opciones de los involucrados, por otra.*

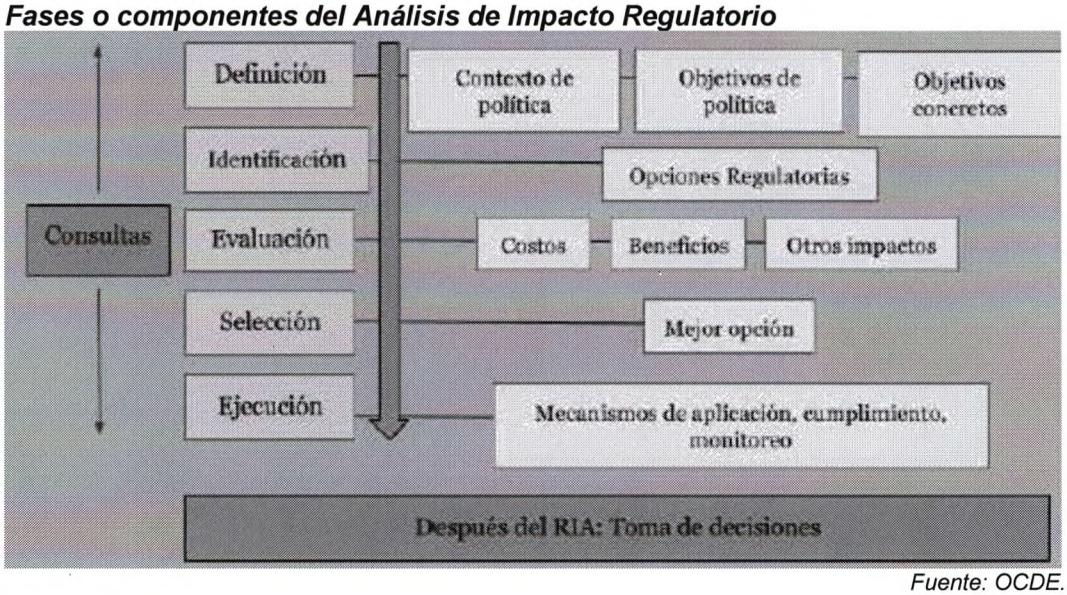
3. Identificación de alternativas de solución: *en este punto se señalan las normas o políticas que podrían resolver -idealmente- el problema. Por ejemplo, si se busca que las personas coman más sanamente, las alternativas pueden ir desde informar a los consumidores, pasando por poner impuestos a ciertos alimentos, hasta prohibir ciertos productos. Nunca se debe dejar de lado la alternativa "no hacer nada", considerando que muchas veces la solución estatal no es razonable, por generar mayores costos (fallas del Estado) o por no tener los efectos esperados. A veces, dejar que el mercado se corrija a sí mismo o soportar la falla de mercado son alternativas más razonables.*

4. Análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas: *se debe realizar una valorización de cada una de las alternativas viables. Muchas veces se comete el error de hacer el ACB sobre la propuesta elegida, pero esto pierde de vista que la utilidad y la función del ACB es comparar alternativas. Por tanto, se debe realizar el ACB sobre cada una de las alternativas propuestas.*

5. Consulta: *significa que las alternativas deben ser presentadas a los interesados -o la población en general- **para el debate público**. No existe una forma única de realizar esta consulta y tampoco un momento específico en el RIA. El momento en que se haga dependerá del problema y la necesidad de recabar información.*

6. Definición de la alternativa: *tanto el AIR como el ACB son métodos para obtener información, por lo que no les corresponde tener la última palabra al definir la política pública o la norma a elegir. La decisión final dependerá de criterios -como el político- que van más allá del resultado que arroje el AIR.*

Fases o componentes del Análisis de Impacto Regulatorio



Fuente: OCDE.

Para un mayor abundamiento respecto de la necesidad del presente **proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1256, ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, a fin de cumplir el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología que permite identificar y eliminar las barreras burocráticas ilegales** impuestas por las entidades de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, a continuación se presenta un comparativo entre las seis componentes del ciclo regulatorio usando el AIR, y las consideraciones que se deben seguir durante el análisis de razonabilidad según el **artículo 18.- Análisis de razonabilidad** del DL 1256 a modificar, donde la entidad denunciada debe acreditar alguno de los elementos indicados a continuación, caso contrario, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declaraba la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática.

> *"18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso, considera que **han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad** de la barrera burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la medida, verificando el cumplimiento de los siguientes elementos:*
>
> *a. **Que la medida no es arbitraria**, lo que implica que la entidad acredite:*
>
> *1. La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad.*
>
> *2. La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada.*
>
> *3. Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida.*
>
> *b. **Que la medida es proporcional a sus fines**, lo que implica que la entidad acredite:*
>
> *1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.*
>
> *2. Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.*
>
> *3. Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación."*

Lo que se desea demostrar en el siguiente cuadro es que las seis (06) componentes consideradas dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR, ya tienen incorporados los elementos indicados en los literales precedentes, es decir que la carga de la prueba debe recaer en la entidad denunciada y ya no en el agente económico que presenta la denuncia por imposición de barrera burocrática. Es así como la entidad denunciada deberá demostrar de manera clara, expresa, taxativa e indubitable ***que la medida denunciada no es arbitraria*** y ***que la medida denunciada es proporcional a sus fines***, y en caso la entidad no logre demostrar ambas exigencias, se declara que la medida denunciada es una barrera burocrática ilegal, pues el análisis de

razonabilidad es incorporado dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR.

Comparativo de componentes del AIR y demostraciones del análisis de razonabilidad

Componentes del AIR	Análisis de Razonabilidad	Comentarios
1. Definición del problema: *el primer paso siempre es identificar exactamente cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante una norma.*	**a. Que la medida no es arbitraria**, lo que implica que la entidad acredite: 1. ***La existencia del interés público*** que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad. 2. ***La existencia del problema*** que se pretendía solucionar con la medida cuestionada.	Que la entidad denunciada acredite la **existencia de un problema de política pública** que suscite un **interés público** sobre la medida cuestionada (regulación denunciada), deberá realizarse en la componente 1 del AIR, con lo cual **su verificación ocurrirá durante el análisis de legalidad de la medida cuestionada**, por lo que ya no será necesario realizarlo durante el análisis de razonabilidad, razón que justifica su eliminación.
2. Identificación de posibles afectados: *se debe identificar a las personas que podrían resultar afectadas o beneficiadas con la regulación.*		Ahora la entidad denunciada deberá identificar durante la realización de la componente 2 del AIR, a los agentes económicos afectados por **la medida cuestionada, o alternativa elegida**
3. Identificación de alternativas de solución: *en este punto se señalan las normas o políticas que podrían resolver -idealmente- el problema.*	3. ***Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema*** y/o para alcanzar el objetivo de la medida	Que la entidad denunciada acredite **que la medida cuestionada, o alternativa elegida resulta idónea para lograr la solución al problema** que suscita el **interés público**, debe realizarse en la componente 3 del AIR, con lo cual **su verificación ocurrirá durante el análisis de legalidad de la medida cuestionada**, por lo que ya no será necesario realizarlo durante el análisis de razonabilidad, razón que justifica su eliminación.
4. Análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas: *se debe realizar una valorización de cada una de las alternativas viables.*	**b. Que la medida es proporcional a sus fines**, lo que implica que la entidad acredite: 1. ***Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla***, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado. ***2. Que la referida evaluación permite concluir que la medida***	Que la entidad denunciada acredite; 1) Que la **elección de la medida cuestionada, o alternativa elegida resulta idónea para lograr la solución al problema** que suscita el **interés público**, 2) Que la **elección de la medida cuestionada, o alternativa elegida** genera mayores beneficios que costos, 3) Que **otras medidas, o alternativas** no resultarían menos

	genera mayores beneficios que costos. 3. ***Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas***. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación.	costosas, o no serían igualmente efectivas, deben realizarse en la componente 4 del AIR, con lo cual **su verificación ocurrirá durante el análisis de legalidad de la medida cuestionada**, por lo que ya no será necesario realizarlo durante el análisis de razonabilidad, razón que justifica su eliminación.
5. Consulta: *significa que las alternativas deben ser presentadas a los interesados -o la población en general-* ***para el debate público***.		Ahora la entidad denunciada, durante la realización de la componente 5 del AIR, deberá realizar una consulta a los agentes económicos identificados durante la realización de la componente 2 del AIR, para lo cual deberá consultar; - Si en verdad es válido **el problema identificado** y si este suscita un **interés público** - Si se encuentran adecuadamente identificados los agentes económicos afectados. - Deberá presentar las alternativas de solución planteadas para resolver **el problema identificado**, así como el análisis costo-beneficio sobre cada una de las alternativas propuestas ***Toda esta información se deberá analizar en mesas técnicas con los representantes de los agentes económicos afectados, y hacer un debate público***.
6. Definición de la alternativa: *tanto el AIR como el ACB son métodos para obtener información.*		Recién luego de que la entidad desarrolle las primeras cinco componentes del ciclo regulatorio usando el AIR, es que se encuentra lista para realizar la componente 6 del AIR, **que consiste en la elección de la alternativa elegida**, que deberá incluir la opción de no regular nada y dejar que el mercado se regule sólo.

Fuente: OCDE. Elaboración: Propia

Ahora bien, según como se encuentra redactado el **artículo 15.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad** del DL 1256 a modificar, donde el agente económico que denuncia la barrera burocrática debe acreditar indicios suficientes que demuestren la carencia de

razonabilidad de la medida denunciada, se debe señalar claramente que ello atenta directamente contra el ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR, pues como se vio en los párrafos anteriores, la **CARGA DE LA PRUEBA** recae en la entidad denunciada por imponer la barrera burocrática que restringe el acceso o la permanencia del agente económico en el mercado, y no recae en el propio agente económico. En ese orden de ideas, se justifica la eliminación del siguiente articulado del **artículo 15** del DL 1256, donde se afirma que la Comisión o la Sala, no cumplirán con el **artículo 18.- Análisis de razonabilidad** del DL 1256, si el agente económico denunciante no acredita ***indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia***, los cual es innecesario pues como ya se demostró líneas arriba es que las seis (06) componentes consideradas dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR, ya tienen incorporados los elementos indicados en el **artículo 18.- Análisis de razonabilidad** del DL 1256, es decir que la carga de la prueba recae en la entidad denunciada, la cual deberá demostrar de manera clara, expresa, taxativa e indubitable ***que la medida denunciada no es arbitraria*** y ***que la medida denunciada es proporcional a sus fines***, análisis que ya se encuentra incorporados dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR.

> *"La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte,* ***siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia*** *y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve la admisión a trámite de esta. En los procedimientos iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho análisis en caso de que, a través de la resolución de inicio, se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida."*

Finalmente, como se encuentra redactado el **artículo 16.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad** del DL 1256 a modificar, que señala lo siguiente;

> *"16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos:*
>
> a. ***Medida arbitraria:*** *es una medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o*
> b. ***Medida desproporcionada****: es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa.*
>
> *16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos:*
>
> a. *Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada.*
> b. *Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública.*
> c. *Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria y/o desproporcionada.*
> d. *Alegar como único argumento que la medida genera costos."*

Lo que se desea demostrar en el siguiente cuadro es que las seis (06) componentes consideradas dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR, ya tienen incorporados el análisis si la ***medida denunciada es***

arbitraria o si la ***medida denunciada es desproporcionada***. Es decir que la carga de la prueba recae en la entidad denunciada, la cual deberá demostrar de manera clara, expresa, taxativa e indubitable;

1) ***Que la medida denunciada cuenta con el adecuado fundamento y/o justificación*** el cual debe encontrarse alineado al ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR, pero además la entidad denunciada deberá demostrar
2) ***Que la medida denunciada es proporcional a sus fines***, es decir, que dicha medida no resulta excesiva en relación con sus fines y que, respecto a la alternativa elegida, no existe otra alternativa que pueda lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa, lo cual también se encuentra alineado al ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR.

En caso la entidad no logre demostrar ambas exigencias, se declara que la medida denunciada es una barrera burocrática ilegal, pues el análisis de razonabilidad es incorporado dentro del ciclo regulatorio que implica la elaboración del sustento y/o justificación usando el AIR. Por otro lado, sobre aquellas afirmaciones que señalan que no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos;

a. Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada: No aplica pues la carga de la prueba recaerá en la entidad denunciada, la cual deberá demostrar que ha elaborado el debido sustento y/o justificación de la barrera burocrática cuestionada, y que este sustento y/o justificación se encuentra referido a la barrera burocrática cuestionada, y además cumple con el ciclo regulatorio del AIR.

b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública: No aplica pues la carga de la prueba recaerá en la entidad denunciada, la cual deberá demostrar que ha elaborado el debido sustento y/o justificación de la barrera burocrática cuestionada, y que antes de elaborar el debido sustento y/o justificación se ha definido adecuadamente **cuál es el problema que se pretende solucionar** con la regulación que la política pública pretende introducir, y además cumple con el ciclo regulatorio del AIR.

c. Alegaciones o afirmaciones genéricas: No aplica pues la carga de la prueba recaerá en la entidad denunciada, la cual deberá demostrar que la medida denunciada no es arbitraria y no es desproporcionada, lo cual se hace cumpliendo con el desarrollo del ciclo regulatorio del AIR, como se verá en el cuadro a presentar más adelante.

d. Alegar como único argumento que la medida genera costos: No aplica pues esta restricción atenta directamente contra la definición de **Barrera burocrática ilegal** introducida en el presente proyecto de ley, que la define como todo requisito, limitación, prohibición, obligación, condición de operación, responsabilidad, cobro o cualquier exigencia que imponga cualquier entidad, y que **genere o implique variación de costos en su cumplimiento** por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil. Además, atenta directamente contra lo señalado en el **numeral 10.1 del Artículo 10. Ámbito de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio**,

> *"10.1 La entidad pública del Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia* ***que genere o implique variación***

de costos en su cumplimiento *por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil"*

Comparativo de componentes del AIR e Indicios sobre la carencia de razonabilidad.

Componentes del AIR	Análisis de Razonabilidad	Comentarios
1. Definición del problema: *el primer paso siempre es identificar exactamente cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante una norma.* ***2. Identificación de posibles afectados:*** *se debe identificar a las personas que podrían resultar afectadas o beneficiadas con la regulación.* ***3. Identificación de alternativas de solución:*** *en este punto se señalan las normas o políticas que podrían resolver -idealmente- el problema.*	***a. Medida arbitraria: es una medida que carece de fundamentos y/o justificación***, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o	La entidad denunciada debe acreditar si la medida denunciada no es arbitraria, es decir cuenta con el debido fundamento o justificación, para lo cual deberá demostrar; - Que ha **identificado un problema que la regulación planteada pretender resolver** y que suscite un **interés público** sobre la medida cuestionada, lo cual se debe realizarse en la componente 1 del AIR. - Que ha **identificado a los posibles afectados** de la medida cuestionada, lo cual se debe realizarse en la componente 2 del AIR. - Que ha **identificado las alternativas de regulación (solución) posibles**, lo cual se debe realizarse en la componente 3 del AIR.
4. Análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas: *se debe realizar una valorización de cada una de las alternativas viables.* ***5. Consulta:*** *significa que las alternativas deben ser presentadas a los interesados -o la población en general-* ***para el debate público.*** ***6. Definición de la alternativa:*** *tanto el AIR como el ACB son métodos para obtener información.*	***b. Medida desproporcionada:*** ***es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines*** y/o respecto de la cual existe otra ***u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa***.	La entidad denunciada debe acreditar si la medida denunciada no es desproporcionada, es decir que es una medida que no resulta **excesiva en relación con sus fines** o **no existe otra alternativa menos gravosa**, para lo cual deberá demostrar; - Que ha **realizado un adecuado análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas**, lo cual se debe realizarse en la componente 4 del AIR. - Que ha **realizado una consulta técnica con los representantes de los agentes económicos posiblemente afectados**, lo cual se debe realizarse en la componente 5 del AIR. - Que ha **elegido adecuadamente menos gravosa de las alternativas propuestas**, lo cual se debe realizarse en la componente 6 del AIR.

Fuente: OCDE. Elaboración: Propia

Mediante la siguiente dirección electrónica: https://www.gob.pe/institucion/pcm/informes-publicaciones/2023285-manual-para-la-aplicacion-del-analisis-de-impacto-regulatorio-ex-ante-air, En fecha 16 de julio de 2021, la PCM presenta el manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), aprobado mediante **RESOLUCIÓN MINISTERIAL 151-2021-PCM**. La PCM afirma que el Manual para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), provee a las entidades públicas de información necesaria y sustancial ante las interrogantes que pudieran surgir al momento de desarrollar y aplicar el AIR, y la considera una guía sobre los elementos más relevantes para su aplicación, con información sobre sus componentes y con los formatos que permiten ordenar y sistematizar los resultados de las evaluaciones hechas sobre un problema público. Afirmando finalmente, que este Manual se irá actualizando y enriqueciendo progresivamente a fin de acompañar a las entidades públicas en su proceso para la implementación del AIR.

Este manual aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 151-2021-PCM no es más que la extensión del reglamento que desarrolla el marco institucional que rige el proceso de mejora de la calidad regulatoria y establece los lineamientos generales para la aplicación del análisis de impacto regulatorio, en cuyo **artículo 11. Componentes del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante** se señala;

"11.1 En la elaboración del AIR Ex Ante por parte de las entidades públicas se consideran los siguientes componentes:

1. *Análisis de contexto, identificación de afectados, magnitud y diagnóstico del problema público identificado en base a evidencia, lo que implica el análisis de datos estadísticos, investigaciones, estudios empíricos u otra información nacional o internacional de fuente oficial o confiable.*

2. *Identificación y desarrollo del o los objetivo/s consistente con el análisis del problema público identificado.*

3. *Identificación y desarrollo de las alternativas de solución regulatorias o no regulatorias.*

4. *Evaluación de los impactos de las alternativas de solución (costos y beneficios que generan incluyendo sus mecanismos de cumplimiento) con la finalidad de elegir la mejor alternativa de solución del problema público identificado (regulatoria o no regulatoria).*

5. *Identificación, descripción y desarrollo de los mecanismos de implementación y cumplimiento para asegurar la viabilidad de la mejor alternativa seleccionada.*

6. *Identificación, descripción y desarrollo de criterios y de los mecanismos de monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos y del proyecto regulatorio seleccionado."*

A continuación, se procederá a comparar estas seis componentes del ciclo regulatorio planteadas por la PCM mediante la Resolución Ministerial N° 151-2021-PCM, contra las seis componentes del ciclo regulatorio planteadas por la OCDE, para sustentar la necesidad del presente **proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1256, ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, a fin de cumplir el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología que permite identificar y eliminar las barreras burocráticas ilegales** impuestas por las entidades de la administración pública, según las indicaciones de la OCDE.

Comparativo entre componentes del AIR, reglamento y manual para aplicación del AIR

Componentes del AIR	Reglamento desarrolla aplicación del AIR	Manual para la aplicación del AIR - RM151-2021-PCM
1. Definición del problema: *el primer paso siempre es identificar exactamente cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante una norma.*	1. Análisis de contexto, identificación de afectados, magnitud y **diagnóstico del problema público** identificado en base a evidencia, lo que implica el análisis de datos estadísticos, investigaciones, estudios empíricos u otra información nacional o internacional de fuente oficial o confiable.	**COMPONENTE 1:** ANÁLISIS DE CONTEXTO, IDENTIFICACIÓN DE AFECTADOS, MAGNITUD Y **DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA PÚBLICO**.
Vemos como mientras la OCDE sugiere, en la columna de la izquierda, que la primera componente para realizar el AIR sea una definición clara, expresa, taxativa e indubitable de cuál es la definición del problema que la regulación intentará resolver, la PCM mediante la RM 151-2021-PCM, confunde diagnosticar el problema con definirlo para comprenderlo.		
2. Identificación de posibles afectados: *se debe identificar a las personas que podrían resultar afectadas o beneficiadas con la regulación.*	2. Identificación y desarrollo del o los objetivo/s consistente con el análisis del problema público identificado.	**COMPONENTE 2:** IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL O LOS OBJETIVO/S CONSISTENTE CON EL ANÁLISIS DEL PROBLEMA PÚBLICO IDENTIFICADO.
Vemos como mientras la OCDE sugiere, en la columna de la izquierda, que la segunda componente para realizar el AIR sea identificar de manera clara, expresa, taxativa e indubitable quienes son los agentes económicos afectados o beneficiados por la regulación, la PCM mediante la RM 151-2021-PCM, pretende que se desarrollen los objetivos de la regulación, confundiendo que en el ciclo regulatorio usando el AIR, primero se debe definir las alternativas de regulación, cada una de las cuales traerá su propio objetivo regulatorio.		
3. Identificación de alternativas de solución: *en este punto se señalan las normas o políticas que podrían resolver -idealmente- el problema.*	3. Identificación y desarrollo de las alternativas de solución regulatorias o no regulatorias.	**COMPONENTE 3:** **IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN** REGULATORIAS O NO REGULATORIAS
En esta tercera componente, la PCM si ha considerado la recomendación de la OCDE, así en los tres casos se ha considerado la identificación y desarrollo de alternativas de solución al problema definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en la primera componente del ciclo regulatorio usando el AIR.		
4. Análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas: *se debe realizar una valorización de cada una de las alternativas viables.*	4. Evaluación de los impactos de las alternativas de solución (**costos y beneficios** que generan incluyendo sus mecanismos de cumplimiento) con la finalidad de elegir la mejor alternativa de solución del problema público identificado (regulatoria o no regulatoria).	**COMPONENTE 4:** EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
En esta cuarta componente, la PCM si ha considerado la recomendación de la OCDE, así en los tres casos se ha considerado realizar el análisis costo-beneficio de cada alternativa de solución al problema definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en la primera componente del ciclo regulatorio usando el AIR.		
		COMPONENTE 5:

5. Consulta: *significa que las alternativas deben ser presentadas a los interesados -o la población en general-* ***para el debate público****.*	5. Identificación, descripción y desarrollo de los mecanismos de implementación y cumplimiento para asegurar la viabilidad de la mejor alternativa seleccionada.	IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LOS MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO.
Lamentablemente, vemos en esta quinta componente del ciclo regulatorio usando el AIR como mientras la OCDE sugiere, en la columna de la izquierda, que se deben presentar a los agentes económicos afectados por la regulación o a la población en general, las alternativas de solución, así como el análisis costo-beneficio de cada una de las alternativas de solución del problema definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en la primera componente del ciclo regulatorio usando el AIR, la PCM mediante la RM 151-2021-PCM, pretende actuar a espaldas de los agentes económicos afectados, limitándose a desarrollar mecanismos de implementación y cumplimiento si antes definir la alternativa de regulación elegida.		
6. Definición de la alternativa: *tanto el AIR como el ACB son métodos para obtener información.*	6. Identificación, descripción y desarrollo de criterios y de los mecanismos de monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento de los objetivos y del proyecto regulatorio seleccionado.	**COMPONENTE 6:** IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE CRITERIOS Y DE LOS MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN.
Finalmente, vemos en esta sexta componente del ciclo regulatorio usando el AIR como mientras la OCDE sugiere, en la columna de la izquierda, que recién en la sexta y última etapa se debe elegir la alternativa de solución del problema definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en la primera componente del ciclo regulatorio usando el AIR, la PCM mediante la RM 151-2021-PCM, no lo considera, limitándose a desarrollar criterios de los mecanismos de monitoreo y evaluación, pero sin antes definir la alternativa de regulación elegida, ni el motivo por el cual esta fue elegida.		

Fuente: OCDE y PCM. Elaboración: Propia

Para un mayor abundamiento respecto de la necesidad del presente **proyecto de ley que modifica el Decreto Legislativo 1256, ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, a fin de cumplir el Análisis de Impacto Regulatorio como metodología que permite identificar y eliminar las barreras burocráticas ilegales** impuestas por las entidades de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, a continuación se presenta el caso de una barrera burocrática ilegal presentada por la **Autoridad de Transporte Urbano (ATU) Para Lima y el Callao**, la cual mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 068-2022/ATU-PE, que aprobó el Reglamento que regula la prestación del Servicio Público de Transporte Especial en las modalidades de turístico, de trabajadores y de estudiantes en Lima y Callao (en adelante, el Reglamento), presenta la siguiente **condición de operación** que genera o implica variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), que prestan el servicio turístico de transporte turístico terrestre.

(...)
Artículo 32.- De las condiciones específicas de acceso y/o permanencia para prestar el Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Turístico, aprobado mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva 068-2022/ATU-PE.
32.1 Los vehículos destinados a la prestación del Servicio Público de Transporte Especial en la modalidad de Turístico **deben cumplir, adicionalmente** a lo establecido en el numeral 28.2 del artículo 28, **con los siguientes requisitos técnicos específicos mínimos**:

1. Vehículos de la categoría M1:
a) Sistema de aire acondicionado y calefacción

2. Vehículos de la categoría M2:

a) Sistema de aire acondicionado y calefacción 3. Vehículos de la categoría M3: **a) Sistema de aire acondicionado y calefacción**

En el presente ejemplo, se acredita que la ATU para Lima y Callao, **entidad pública del Poder Ejecutivo** tiene la obligación de realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, **condiciones**, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia **que genere o implique variación de costos en su cumplimiento** por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

La ATU para Lima y Callao ha pretendido sustentar y/o justificar esta exigencia para lo cual ha presentado los siguientes argumentos;

Respecto a la implementación de **condiciones de confort** en vehículos de servicio público de transporte en la modalidad de turístico, como es que el vehículo que presta el servicio turístico de transporte turístico terrestre de categoría M1, M2 y M3 cuente con un **Sistema de aire acondicionado y un sistema de calefacción.**

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao | Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo | BICENTENARIO PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

2.520. Debido a la baja satisfacción de los turistas internacionales y nacionales en el servicio de transporte, diversos países en la región han evaluado alternativas regulatorias consistentes en la implementación de medidas de confort para los usuarios del servicio de transporte turístico. Al respecto, en la siguiente tabla analizamos las condiciones técnicas de confort en vehículos que realizan el servicio de transporte turístico en países vecinos, considerando como precedente la importancia de la comodidad del turista en el viaje.

Tabla 95. Normas Técnicas sectoriales de Colombia y Ecuador

Requisitos de los equipos para la prestación del servicio.	**Norma técnica sectorial NTS AV009[299]**	**Reglamento de transporte terrestre turístico[300]**
	Colombia	**Ecuador**
Equipos de 4 a 9 pasajeros	• Equipo de sonido	• Asientos libres de aristas vivas
	• Aire acondicionado	• Aire acondicionado
	• Calefacción	• Calefacción
	• Recipientes para depositar desechos	• Recipientes para depositar desechos
	• Portaequipaje o bodega apropiada para el número de pasajeros autorizados para transportar.	• Portaequipaje o bodega apropiada para el número de pasajeros autorizados para transportar.
	• Equipo de comunicación bidireccional	

La ATU para Lima y Callao pretende justificar la barrera burocrática denunciada aduciendo que esta corresponde a una **condición de confort** que todo vehículo que presta el servicio turístico de transporte turístico debería tener, para lo cual señala que en Colombia y Ecuador también se exige que los vehículos cuenten con "Aire acondicionado" y "Calefacción". Sin embargo, este argumento atenta contra el **libre mercado** al evitar que el **precio** del servicio turístico de transporte turístico terrestre se de mediante la ley de la oferta y la demanda, por el contrario, todos los agentes

económicos se verán obligados por esta regulación a **aumentar el precio** debido a que para cumplir con la regulación exigida, poner aire acondicionado y calefacción, deberán pasar el costo que implica cumplir con dicha regulación al precio, cuando hay muchos clientes que no están dispuestos a pagar dicho aumento pues no desean ni aire acondicionado, ni calefacción.

Así, esta pretendida justificación de la ATU colisiona con la primera etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

> **1. Definición del problema:** *el primer paso siempre es identificar exactamente cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante una norma. La definición del problema, desde el punto de vista económico, se identifica con las fallas de mercado. Sin embargo, dado que los intereses que busca resolver la sociedad pueden ser -y suelen ser- extra económicos, el problema a resolver puede ser, por ejemplo, mejorar la salud o la educación de la población o reducir la criminalidad.*

En ese sentido, la ATU no ha señalado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable cuál es el problema de política pública que se intenta resolver mediante la norma que exige que todo vehículo que presta el servicio turístico de transporte turístico terrestre tenga que contar con un **Sistema de aire acondicionado y un sistema de calefacción**.

Por el contrario, la ATU aduce que en aras de mantener una **condición de confort** para los turísticas que usan el servicio turístico de transporte turístico terrestre en el Perú, ha decidido exigir esta condición de operación, lo cual pretende respaldar de la siguiente manera.

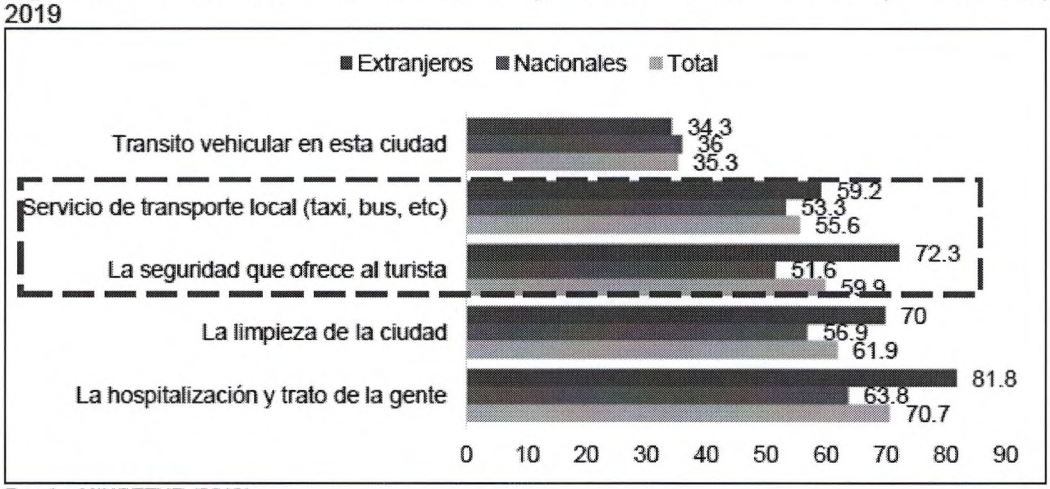
✓ **Baja percepción de confort**

2.112. El transporte es un componente clave que vincula cada una de las partes del sistema turístico[57], actuando como elemento integrador entre ellas (alojamientos, empresas de bebidas y alimentos, centros de recreación turística, agencias mayoristas y turoperadores).

2.113. El transporte en el turismo cumple dos funciones[58]: la primera se refiere al transporte como mecanismo utilitario que permite el desplazamiento del turista y, en esa línea, la satisfacción del turista está relacionada con el coste y con el tiempo de viaje. La segunda función se refiere al transporte como atracción turística cumpliendo funciones estrictamente de conexión entre el área generadora del turismo y el destino turístico, por lo que debe brindar confort al turista durante el viaje.

2.114. En particular, de acuerdo al estudio de nivel de satisfacción del turista nacional y extranjero que visita Lima 2019, realizado por la Dirección de Estudios de Prospectiva del Turismo y Artesanía – MINCETUR[59], el nivel de satisfacción del servicio de transporte local realizado en distintos medios de transporte terrestre, muestra un 53,3% como nivel de satisfacción de los turistas respecto al servicio de transporte en la ciudad de Lima, y los usuarios internacionales, un 59.2% de satisfacción, obteniendo en promedio 55,6% de satisfacción, manifestando que el servicio estuvo por debajo de su expectativas (menor al 70%) tal como se observa en la siguiente figura.

Figura 30. Nivel de satisfacción del turista respecto de los servicios de transporte en Lima, 2019



Fuente: MINCETUR (2019)

2.521. Asimismo, diversos autores que abordan la materia han identificado al confort como uno de los factores de mayor relevancia para la decisión de viaje del turista, Viñals (2014)[301] que sostiene que el confort es un componente determinante de la satisfacción del visitante, mientras que Sierra et. al (2003)[302] citado por Peralta J. (2006)[303] alude que el confort es una de las dimensiones que determinan la calidad del producto o servicio.

2.522. Por otro lado, según los datos del Mincetur (2019), el 78.5% de los turistas que llegan a Lima manifiestan encontrarse satisfechos con la comodidad al interior del vehículo de servicio de transporte terrestre en la ciudad, por lo que el 21.5% no se encontraría conforme respecto a la comodidad en dicho servicio, que se traduce en la disminución de la demanda del servicio, poniendo en evidencia la necesidad de atender dicha problemática con la finalidad de mitigar sus efectos negativos. Por lo que se ha determinado viable la incorporación de dispositivos que contribuyan a la mejora de la percepción del confort en dicho servicio.

En el numeral 2.522 se evidencia que la ATU comete los siguientes errores;

- En primer lugar, la ATU afirma erróneamente que como según los datos del Mincetur (2019), el 78.5% de los turistas que llegan a Lima manifiestan encontrarse satisfechos con la comodidad al interior del vehículo de servicio de

transporte terrestre en la ciudad, entonces, asume como cierto que el resto de los turistas, es decir el 21.5% de ellos, **no se encontraría conforme respecto a la comodidad en dicho servicio**. Esta afirmación que hace la ATU es temeraria pues no se puede extrapolar de esa manera el informe del Mincetur. Así, si en la encuesta no se hace la pregunta de manera clara, expresa, taxativa e indubitable respecto al grado de satisfacción o necesidad de los turistas de contar con un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción**, y no se hace la pregunta si están dispuestos a pagar un costo extra por ese servicio adicional, entonces no se puede afirmar que el 21.5% de los turistas que visitan Lima demandan un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción.**

- En segundo lugar, la ATU no considera que hay diferentes tipos de turistas que utilizan el servicio turístico de transporte turístico terrestre en Lima y el Callao. Tenemos al turista extranjero (turismo receptivo), que si está acostumbrado a usar un sistema de aire acondicionado y un sistema de calefacción pues en sus países de origen es común tener dichos sistemas en los vehículos e incluso en sus casas, por lo que están dispuestos a pagar un precio mayor por dicho servicio adicional. Sin embargo, no es la misma realidad de los turistas peruanos que utilizan el servicio turístico de transporte turístico terrestre en Lima y el Callao. Los turistas peruanos no demandan un **Sistema de aire acondicionado ni un Sistema de calefacción** como parte del servicio turístico de transporte turístico terrestre que consumen para realizar full days en Lima y Callao.

- En tercer lugar, la ATU tampoco considera que hay otro grupo de turistas peruanos que, aunque quisieran, no podrían pagar un **Sistema de aire acondicionado ni un Sistema de calefacción** pues son turistas que realizan la actividad de turismo social al ser peruanos pobres, excluidos de la actividad turística debido a su mínima capacidad económica, este tipo de servicio turístico se encuentra consignado en los artículos **45ª Turismo Social**, y **46ª Programa de Turismo Social** de la Ley General de Turismo (Ley 29408, 17.09.2009), la cual contiene el marco legal para el desarrollo y la regulación de la actividad turística, los principios básicos de la actividad turística y los objetivos de la política estatal, declarando al MINCETUR como el ente rector a nivel nacional competente en materia turística.

De esta manera se evidencia algunas de las inconsistencias en los argumentos vertidos en el numeral 2.522 planteado por la ATU con la finalidad de justificar la barrera burocrática denunciada por ser ilegal al no haber ***definido adecuadamente el problema*** que requiere la regulación planteada.

La ATU tampoco ha cumplido con identificar adecuadamente a los afectados por la regulación que exige obligatoriamente que los vehículos de transporte turístico cuenten con un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción**, que corresponde a la segunda etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

> ***2. Identificación de posibles afectados:*** *se debe identificar a las personas que podrían resultar afectadas o beneficiadas con la regulación. La finalidad de esto es calcular correctamente el impacto de la norma, por un lado; y, conocer las opciones de los involucrados, por otra.*

Debido a que la ATU ha invisibilizado a los turistas peruanos que realizan turismo social y consumen el servicio de transporte turístico social, no ha calculado el impacto de la norma sobre los peruanos pobres que se encuentran debajo de la línea de pobreza o pobreza extrema, los cuales hacen uso del servicio turístico de transporte turístico terrestre de carácter social, y no pueden darse el lujo de pagar por servicios premium adicionales como son un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción**. Los agentes económicos hemos identificado que estos peruanos pertenecen al nivel socioeconómico "C", "D" o "E", quienes no podrían pagar el excesivo incremento en el precio que traería que todos los vehículos de transporte turístico deban proveer aire acondicionado y calefacción. Así se acredita que la ATU no ha identificado a todos los posibles afectados por su mala calidad regulatoria.

La ATU tampoco ha cumplido con identificar diversas alternativas de solución a la supuesta problemática que ha identificado, lo cual corresponde a la tercera etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

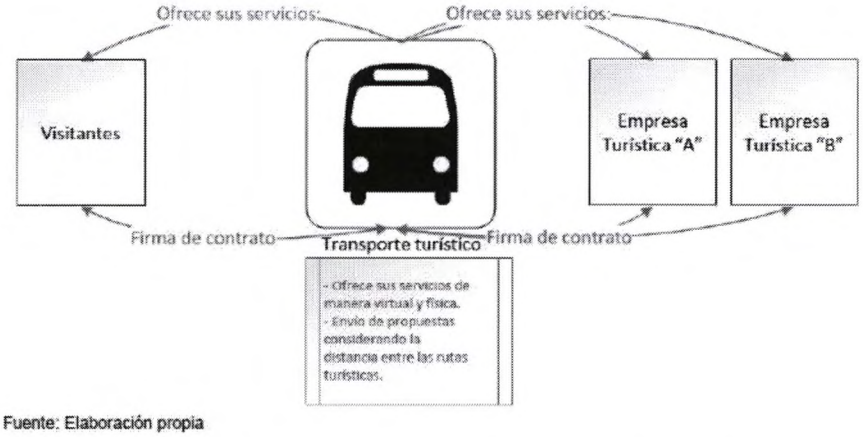
> ***3. Identificación de alternativas de solución:*** *en este punto se señalan las normas o políticas que podrían resolver -idealmente- el problema. Nunca se debe dejar de lado la alternativa "no hacer nada", considerando que muchas veces la solución estatal no es razonable, por generar mayores costos (fallas del Estado) o por no tener los efectos esperados. A veces, dejar que el mercado se corrija a sí mismo o soportar la falla de mercado son alternativas más razonables.*

Creemos que, en este caso, lo mejor es "no hacer nada", pues el mercado se regulará sólo. Así, si es que el turista en verdad necesita un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción** cuando desee contratar un servicio turístico de transporte turístico terrestre, hará conocer dicho requerimiento y sólo los agentes económicos que cuenten con dicha **condición de confort** le enviarán la cotización, con el respectivo incremento en el precio por dicho servicio adicional.

Por otro lado, los peruanos pobres que realizan la actividad de turismo social, como no tienen dinero para pagar por lujos como es aire acondicionado o calefacción, y sólo requieren un servicio básico de transporte turístico, también debieran poder contar con dicha oferta formal de transporte turístico sin aire acondicionado y sin calefacción.
En la siguiente imagen se evidencia como, tanto los agentes económicos que cuentan con vehículos de transporte turístico terrestre con un **Sistema de aire acondicionado y un Sistema de calefacción**, como los agentes económicos que no cuentan con dichos servicios adicionales, deben ofrecer sus servicios tanto a agencias de viaje, otros operadores turísticos, como turistas quienes deben tener la libertad de contratar o no contratar, vehículos de transporte turístico con aire acondicionado o calefacción, dependiendo si están dispuestos a pagar el precio por ese confort adicional.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao | Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo | BICENTENARIO PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Fuente: Elaboración propia

La ATU tampoco ha cumplido con realizar el análisis costo-beneficio de las diversas alternativas de solución a la supuesta problemática que se ha identificado, lo cual corresponde a la cuarta etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

> ***4. <u>Análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas</u>:*** *se debe realizar una valorización de cada una de las alternativas viables. Muchas veces se comete el error de hacer el ACB sobre la propuesta elegida, pero esto pierde de vista que la utilidad y la función del ACB es comparar alternativas. Por tanto, se debe realizar el ACB sobre cada una de las alternativas propuestas.*

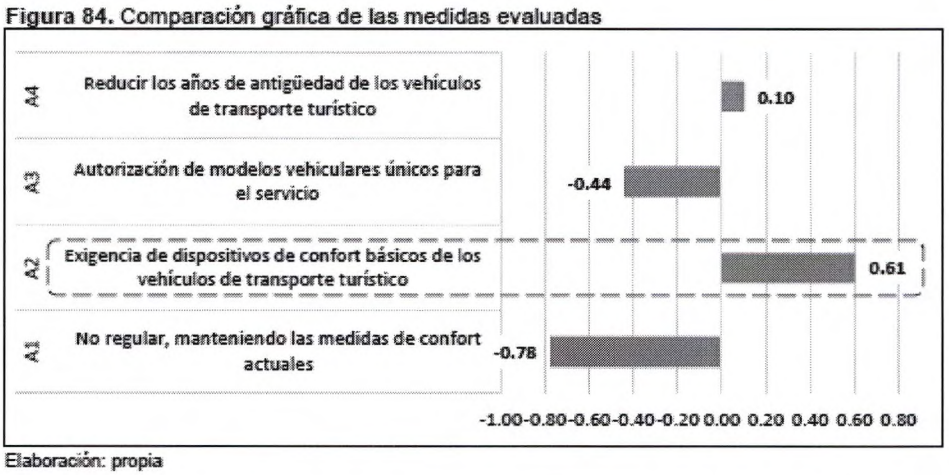
En este punto, respecto al **<u>Costo Beneficio de las Opciones de Política relativas a la mejora del confort del servicio de transporte turístico</u>**. En la tabla 83 se presenta el Análisis Costo Beneficio bajo el enfoque Multicriterio de la iniciativa relacionada a la mejora de la calidad del servicio, a través de la **<u>mejora del confort</u>**.

Grupo de Interés	Pond	Variables	Peso	A1	A2	A3	A4
				No regular, manteniendo las medidas de confort actuales	Exigencia de dispositivos de confort básicos de los vehículos de transporte turístico	Autorización de modelos vehiculares únicos para el servicio	Reducir los años de antigüedad de los
Usuario	50%	Rapidez y continuidad del Servicio	35%	-2	2	2	1
		Alcance o cobertura del servicio	25%	-1	3	0	1
		Seguridad	20%	-2	3	1	1
		Calidad	20%	-1	3	2	1
Operador	40%	Costos de transacción de la medida	20%	0	-1	-1	-1
		Costos Económicos de la medida	80%	0	-2	-3	-1
Sector	10%	Costos de implementación de la medida	50%	0	0	0	0
		Costos de Supervisión y Fiscalización	50%	0	0	-1	0
Asignación de valor				-0.78	0.61	-0.44	0.10

Elaboración propia.

En la figura 84, se realiza una comparación gráfica de las medidas evaluadas de la iniciativa relacionada a la mejora de la calidad del servicio, a través de la **mejora del confort**.

Figura 84. Comparación gráfica de las medidas evaluadas



Elaboración: propia

2.394. Al respecto, de acuerdo a procedimiento de evaluación costo-beneficio de alternativas regulatorias adoptado en el presente informe, se evalúa la posibilidad de no regular la problemática en cuestión, del cual se obtiene que, al considerar medidas regulatorias para brindar un mejor servicio en el transporte turístico, este porcentaje de personas que se consideran insatisfechas por el confort disminuirían.

Sin embargo, sobre las cuatro (04) alternativas planteadas;

- Reducir los años de antigüedad de los vehículos de transporte turístico.
- Autorización de modelos vehiculares únicos para el servicio.
- **Exigencia de dispositivos de confort básicos de los vehículos de transporte turístico.**
- No regular, manteniendo las medidas de confort actuales.

Ninguna hace referencia de manera directa a como cada una de estas alternativas son una solución posible a la ***definición del problema*** *de política pública que se intenta resolver mediante una norma.* Por el contrario, sin hacer un debido ***análisis costo-beneficio sobre las alternativas propuestas***, se ha elegido una alternativa y se ha presupuestado los Costos referenciales sobre la implementación de dicha alternativa como medida de confort en el servicio de transporte turístico, como es **Aire acondicionado** y **Calefacción**. Así los costos referenciales a dicha alternativa son los siguientes;

2.397. En esta línea, y en correlato con las medidas dispuestas en el Reglamento Nacional de Administración de Transportes, las medidas de confort que deberán ser adoptadas por las empresas de servicio de transporte turístico cuyas unidades de servicio de transporte no contengan los dispositivos detallados, y su respectivo costo referencial, se encuentran precisadas en la siguiente tabla.

Tabla 84. Costos referenciales sobre la implementación de medidas de confort en el servicio de transporte turístico

Cantidad instalada	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total
4 a 9 asientos	Equipo de sonido[254]	S/ 355.00	1	S/ 355.00
	Aire acondicionado[255]	S/ 103.00	1	S/103.00
	Calefacción[256]	S/ 141.90	1	S/141.90
	Total			**S/599.90**
De 10 a 19 asientos (microbús)	Equipo de sonido	S/ 355.00	1	S/355.00
	Aire acondicionado	S/ 103.00	1	S/103.00
	Calefacción	S/ 141.90	1	S/141.90
	Cortinas laterales elaboradas con material no inflamable[257]	S/ 375.90	1	S/375.90
	Total			**S/975.80**
Más de 19 asientos (Bus)	Equipo de sonido	S/ 355.00	1	S/355.00
	Aire acondicionado	S/ 103.00	1	S/103.00
	Calefacción	S/ 141.90	1	S/141.90
	Cortinas laterales elaboradas con material no inflamable	S/ 825.90	1	S/825.90
	Total			**S/1,425.80**

Elaboración: propia

Sobre la consulta pública, donde la ATU debe presentar el análisis costo-beneficio de las diversas alternativas de solución a la supuesta problemática que se ha identificado, lo cual corresponde a la quinta etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

> ***5. Consulta:*** *significa que las alternativas deben ser presentadas a los interesados -o la población en general-* ***para el debate público****. No existe una forma única de realizar esta consulta y tampoco un momento específico en el RIA. El momento en que se haga dependerá del problema y la necesidad de recabar información.*

La ATU ha expuesto lo siguiente;

IV. CONSULTA PÚBLICA

4.1 Una de las etapas definidas en el marco del proceso de evaluación de impacto de las regulaciones, es la consulta pública (temprana y de proceso), como parte del stakeholders engagement, que permitió a la autoridad a partir de la coordinación, cooperación y comunicación de las alternativas, identificar aquellas sobre las cuales va a girar el análisis de decisiones.

4.2 Así, en el marco de la elaboración del informe de prepublicación del Reglamento de Transporte Especial, se ejecutaron una serie de reuniones con los grupos de interés conformado por asociaciones, gremios y personas naturales con autorización para desarrollar el servicio, de acuerdo a la siguiente tabla.

Sin embargo, la ATU no ha organizado una consulta pública con todos los grupos afectados por la regulación planteada ***para que se genere un debate técnico y público***, en su lugar, la ATU sólo ha convocado a grupos favorables a la decisión ya tomada, como son; La Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) y la Asociación Peruana de Turismo APPTUR, que además son gremios que no tienen representatividad en el ámbito de Lima y Callao, ámbito de la ATU, pues los agentes económicos asociados a dichos gremios, no cuentan con vehículos de transporte turístico con autorización en el ámbito provincial de Lima y Callao, sino que cuentan con autorización en el ámbito nacional brindado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual no demanda como una **condición de operación** (condición de mercado) contar con un sistema de calefacción y aire acondicionado. Lo cual se acredita en la siguiente imagen.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU | DIRECCION DE INTEGRACION DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Fecha	Asistentes	Temas abordados
07/01/2020, 10:00hrs	Representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, y de la Subdirección de Regulación de la ATU.	Socialización del Reglamento de Transporte Especial
08/01/2020, 10:00hrs	Representantes de la Dirección de Infraestructura, Dirección de Operaciones, Oficina de Asesoría Jurídica, Dirección de Asuntos Ambientales y Sociales, Dirección de Integración de Transporte Urbano y Recaudo, Subdirección de Regulación, y Subdirección de Planificación, de la ATU.	Socialización del Reglamento de Transporte Especial
08/01/2020, 14:00hrs	Representantes de la Cámara Nacional de Turismo – CANATUR, Asociación Peruana de Turismo – APTTUR, Guías Oficiales de Turismo – AGOTUR, y de la Subdirección de Regulación de la ATU.	Revisión de las consideraciones regulatorias del Reglamento de transporte Especial, en particular en la modalidad de turístico.
09/01/2020, 16:00hrs	Representantes de la Asociación Gran Movimiento Escolar y de la Subdirección de Regulación de la ATU.	Revisión de las consideraciones regulatorias del Reglamento de transporte Especial, en particular en la modalidad de Estudiantes

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU | DIRECCION DE INTEGRACION DE TRANSPORTE URBANO Y RECAUDO

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Fecha	Asistentes	Temas abordados
04/09/2021, 19:00 hrs	Representantes de la Asociación Peruana de Transporte Turístico – APTTUR	Consultas puntuales sobre el marco normativo del Servicio de Transporte Turístico
07/06/2021, 15:00 hrs	Representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima - MML	Consultas vinculadas a los acápites vinculados al transporte turístico
16/06/2021, 16:00 hrs	Representantes de Cámara Nacional de Turismo – CANATUR, Asociación Peruana de Transporte Turístico – APTTUR, Asociación de Operadores de Servicio Especial de Transporte Turístico del Perú – ASOSETTUR y Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo – APAVIT. Es pertinente precisar que, pese a la convocatoria, no se contó con la participación de Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno - APOTUR	Socialización y consulta pública posterior de las consideraciones normativas del Reglamento de Transporte Especial en la modalidad de Turístico.
01/07/2021, 15:00 hrs	Cámara Nacional de Turismo – CANATUR	Consultas puntuales respecto al Reglamento de Transporte Especial en la modalidad Turístico

Elaboración: propia

Sobre la definición de la alternativa elegida, lo cual corresponde a la sexta etapa o componente del ciclo regulatorio usando el AIR, el cual señala lo siguiente;

> **6. <u>Definición de la alternativa</u>:** *tanto el AIR como el ACB son métodos para obtener información, por lo que no les corresponde tener la última palabra al definir la política pública o la norma a elegir. La decisión final dependerá de criterios -como el político- que van más allá del resultado que arroje el AIR.*

Ya hemos demostrado que la ATU ya tenía una alternativa previamente elegida, a la que ha tratado de justificar sin éxito.

Ahora bien, por otro lado, el 31 de diciembre de 2018 se promulga el Decreto Supremo 345-2018-EF que aprueba la **<u>Política Nacional de Competitividad y Productividad</u>** la cual afirma que, de conformidad con lo dispuesto en los literales a) y v) del artículo 3 del Reglamento de Organización y Funciones del **Ministerio de Economía y Finanzas** (**MEF**), aprobado con Decreto Supremo 117-2014-EF, es función de dicha entidad formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política económica y financiera nacional y sectorial, aplicable <u>a todos los niveles de gobierno</u>; así como formular, proponer, ejecutar y evaluar las políticas, normas y lineamientos técnicos sobre (...) **<u>calidad normativa</u>**.

Es así como en el **Objetivo Prioritario 6: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo**, en específico en los numeral **2.6.1: Ambiente de Negocios** y **2.6.2: Entorno Regulatorio** se señala;

> *"**2.6.1: Ambiente de Negocios**: Es definido como el conjunto de factores de mercado, institucionales, **regulatorios**, entre otros, que moldean las oportunidades y los incentivos para que las empresas puedan **realizar inversiones**, crear empleos y expandir sus operaciones."*

Es en ese marco que el 28 de julio de 2019, se promulga el Decreto Supremo 237-2019-EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019 – 2030 en cuyo **Objetivo Prioritario 6: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo**, en específico en la **Medida de Política 6.10: Instrumentos de Calidad Regulatoria** señala;

> *"La mejora de la calidad regulatoria es un proceso ordenado, integral, coordinado, gradual y continúo orientado a promover la eficiencia, eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función normativa del Estado y el fomento de una cultura de gestión gubernamental centrada en el ciudadano. En el "**Estudio sobre Política Regulatoria del Perú**" elaborado por la OCDE en el marco del Programa País, se recomienda al Gobierno Peruano la implementación de una **política explícita de calidad regulatoria** con objetivos claros y definidos. Entre sus principales recomendaciones se encuentra;*
>
> > ***1) crear un organismo supervisor encargado de impulsar la institucionalización de una política de mejora regulatoria**,*
> >
> > ***2)** impulsar el desarrollo de capacidades de los funcionarios que intervienen en el desempeño de la gestión regulatoria,*
> >
> > ***3) implementar el análisis de impacto regulatorio** y realizar una revisión del stock normativo con la finalidad de establecer una línea de base respecto a la identificación y reducción de cargas administrativas.*
>
> *Para este fin, se tendrán en cuenta las recomendaciones de la OCDE para la implementación del AIR, así como los avances de cada institución en la implementación del AIR en el Perú, las buenas prácticas internacionales, y el respeto a las funciones y competencias asignadas por ley a las instituciones; considerando que la mejora de la calidad regulatoria es un proceso coordinado, gradual y continúo orientado a promover la eficiencia, eficacia, transparencia y neutralidad en el ejercicio de la función normativa del Estado.*
>
> *(…) la presente medida se orienta a profundizar y ampliar el diseño, implementación y seguimiento de instrumentos de calidad regulatoria **en los tres niveles de gobierno**, así como en las distintas entidades que ya vienen implementando medidas de calidad regulatoria, en el marco de sus competencias.*
>
> *En este sentido, se busca que las entidades apliquen el **Análisis de Impacto Regulatorio** de acuerdo con la metodología que será establecida de manera coordinada por la PCM, el MEF y el MINJUS. El objetivo último de la medida es contar con regulaciones que no generen cargas innecesarias a los ciudadanos y a las empresas. Se espera contar con un mayor efecto en la optimización de las*

regulaciones de las entidades del Gobierno Nacional y subnacionales relacionadas con sectores que tengan mayor incidencia en la productividad nacional."

La implementación del ***Análisis de Impacto Regulatorio*** *liderada por la PCM, a través de la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de PCM, y en específico a través de la Subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la SGP, se orienta a profundizar y ampliar el diseño, implementación y seguimiento de instrumentos de calidad regulatoria (Análisis de Calidad Regulatoria – ACR - de procedimientos administrativos,* ***Análisis de Impacto Regulatorio ex ante*** *y ex post, costeo de la regulación y de trámites, revisiones y derogaciones del ordenamiento jurídico)* ***en los tres niveles de gobierno****, así como en las distintas entidades que ya vienen implementando medidas de calidad regulatoria, en el marco de sus competencias. En la actualidad, el AIR es validado por una* ***Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria*** *(****CMCR****), la cual es presidida por la PCM, y conformada por el MINJUS y el MEF.*

Se evidencia que la CMCR no ha cumplido con el **hito 1** planteado en el Decreto Supremo 237-2019-EF, el cual señala que, al 31 de diciembre de 2019, se debió aprobar el Decreto Supremo que apruebe el Reglamento que establece la metodología del AIR, y que a julio del 2021 el 50% de las entidades del Poder Ejecutivo ya debieron haber aplicado el AIR, y al mismo tiempo el 50% de los gobiernos regionales debieron haber aplicando el AIR, como se acredita en el siguiente cuadro.

Hito 1	Hasta Jul-2021	Hasta Jul-2025	Hasta Jul-2030
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que establece metodología RIA en el Poder Ejecutivo (Dic-2019)	50% de entidades del Poder Ejecutivo aplican RIA	Todas las entidades del Poder Ejecutivo y de los Gobiernos Regionales aplican RIA	Todas las entidades de los Gobiernos Locales priorizados aplican RIA
	50% de Gobiernos Regionales aplican RIA	50% de los Gobiernos Locales priorizados aplica RIA	

Sin embargo, a pesar de que en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo 1310.- **Falta de carácter disciplinario por el incumplimiento de las disposiciones y plazos**, señala;

"Constituye falta de carácter disciplinario del directivo o servidor bajo cualquier régimen y modalidad contractual con la entidad de la Administración Pública, el incumplimiento de las disposiciones y plazos establecidos en el presente Decreto Legislativo ***(y***

***modificatorias)**. La falta será sancionada según su gravedad, previo proceso administrativo".*

A la fecha no se ha iniciado ningún procedimiento administrativo disciplinario en contra de los funcionarios que han incumplido los siguientes plazos.

1) **Al 31 de diciembre de 2019** debieron promulgar el Decreto Supremo que aprueba el reglamento que establece la metodología del AIR en el Poder Ejecutivo. Recién el 3 de abril de 2021, quince (15) meses después del plazo vencido, aprobaron el Decreto Supremo 063-2021-PCM que aprueba el Reglamento que establece los lineamientos generales para la aplicación del AIR.

2) **Al 31 de julio de 2021** el 50% de las entidades del Poder Ejecutivo debieron aplicar el AIR para elaborar el debido sustento y/o justificación técnica de cualquier condición de operación u cualquier otra exigencia que se espera sea cumplida por los agentes económicos para acceder o permanecer en el mercado, o en su defecto sea declarado como barrera burocrática por Indecopi. Estamos febrero de 2023, dieciocho (18) meses después del plazo vencido, y a la fecha ni una sola entidad del Poder Ejecutivo ha aplicado el AIR.

3) **Al 31 de julio de 2021** el 50% de los Gobiernos Regionales debieron aplicar el AIR para elaborar el debido sustento y/o justificación técnica de cualquier condición de operación u cualquier otra exigencia que se espera sea cumplida por los agentes económicos para acceder o permanecer en el mercado, o en su defecto sea declarado como barrera burocrática por Indecopi. Estamos febrero de 2023, dieciocho (18) meses después del plazo vencido, y a la fecha ni un solo Gobierno Regional ha aplicado el AIR.

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY 2850/2022-CR

Aprovechando el cierre del Congreso por parte de Martín Vizcarra, el Poder Ejecutivo modificó el texto primigenio del numeral 5.2 del artículo 5 de la ley N° 27181 con la finalidad de eliminar del ordenamiento legal la exigencia que previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de Ley), cuando **establezcan**, **incorporen** o **modifiquen condiciones de mercado**, o cualquier exigencia que genere o implique **variación de costos** en su cumplimiento por parte de los agentes económicos del sector transporte, no se alteren injustificadamante, y en caso contrario, en caso el MTC no elabore de manera previa el respecto sustento y/o justificación de **las condiciones de mercado** sobre la base de las cuales tomamos nuestras decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte, el INDECOPI declararía dicha exigencia como **barrera burocrática ilegal**.

Funcionarios del Poder Ejecutivo, aprovechando el cierre del Congreso, mediante el Decreto de Urgencia 019-2020 introdujeron un texto sustitutorio del numeral 5.2 del artículo 5 de la ley N° 27181, como se acredita en el siguiente cuadro comparativo.

Texto Original del artículo 5 de la ley N° 27181	Texto Sustitutorio del artículo 5 de la ley N° 27181, MODIFICADO por el DU 019-2020

5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente **las condiciones de mercado** sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte.	5.2. El Estado promueve la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren **los términos contractuales** sobre la base de los cuales dichos agentes han efectuado inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las Leyes respectivas.

De una lectura de ambos cuadros, es evidente que el único cambio realizado por el Poder Ejecutivo fue eliminar el constructo **condiciones de mercado**, y reemplazarlo por el constructo **términos contractuales**. Este cambio en el artículo 5 de la Ley General de Transporte lo hicieron aprovechando que Vizcarra cerró el Congreso, mediante el Decreto de urgencia 019-2020, a espaldas del Congreso y de toda fiscalización de **calidad regulatoria**.

Debido a este cambio en la Ley, los agentes económicos del sector transporte viven en permanente inestabilidad jurídica pues tanto el MTC como la ATU para Lima y Callao, vienen cambiando las reglas de juego sin presentar ningún sustento y/o justificación técnica, cuando **establecen**, **incorporan** o **modifican** **condiciones de operación** (condiciones de mercado) como se acredita en el siguiente descargo del procurador público del MTC ante una denuncia por imposición de barrera burocrática ante INDECOPI.

El procurador público del MTC declara;

> "Actualmente, para la aplicación de cambios en las condiciones de los servicios de transporte **no resulta necesario que exista un sustento** que las respalde conforme lo disponía el texto original del artículo 5 de la ley N° 27181".

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Procuraduría Pública

BICENTENARIO PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EXPEDIENTE N° 00073-2020/CEB
SECRETARIO: Nelwin Castro
ESCRITO N°: Correlativo
SUMILLA:SE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN

SEÑORES DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DE INDECOPI:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, debidamente representado por su Procurador Público **DAVID ANIBAL ORTÍZ GASPAR**, designado mediante Resolución Suprema N° 228-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05 de noviembre de 2019, en los seguidos por **EMPRESA DE TURISMO EL CHASQUI S.C.R.L.** contra la **AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO (ATU)** y contra el **MTC** sobre **DENUNCIA POR IMPOSICIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS**, a ustedes atentamente digo:

Actualmente para la aplicación de cambios en las condiciones de los servicios de transporte no resulta necesario que exista un sustento que las respalde conforme lo disponía el texto original del artículo 5 de la Ley N° 27181, tal como se ha señalado en la Resolución N° 0131-2020/CEB-INDECOPI del 16 de junio de 2020.

art. 5 – Términos contractuales (incorporado con DU 019-2020)

Es así que, por ejemplo, funcionarios de la ATU para Lima y Callao **establecen**, **incorporan** o **modifican condiciones de mercado** para los vehículos que prestan el servicio turístico de transporte turístico terrestre siendo dos **condiciones de mercado**;

1) Que los vehículos tengan aire acondicionado.
2) Que los vehículos tengan calefacción.

Pero la ATU, en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general (reglamentos de transporte turístico), donde aprueba dichas **condiciones de mercado** no han presentado un solo sustento y/o justificación.

Se ha denunciado esta exigencia como barrera burocrática, pero la ATU responde de la misma manera que el MTC a continuación.

PERÚ | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Procuraduría Pública

BICENTENARIO PERÚ 2021

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

EXPEDIENTE N° 00073-2020/CEB
SECRETARIO: Nelwin Castro
ESCRITO N°: Correlativo
SUMILLA:SE INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN

SEÑORES DE LA COMISIÓN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS BUROCRÁTICAS DE INDECOPI:

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, debidamente representado por su Procurador Público **DAVID ANIBAL ORTÍZ GASPAR**, designado mediante Resolución Suprema N° 228-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05 de noviembre de 2019, en los seguidos por **EMPRESA DE TURISMO EL CHASQUI S.C.R.L.** contra la **AUTORIDAD DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA Y CALLAO (ATU)** y contra el **MTC** sobre **DENUNCIA POR IMPOSICIÓN DE BARRERAS BUROCRATICAS**, a ustedes atentamente digo:

Actualmente para la aplicación de cambios en las condiciones de los servicios de transporte no resulta necesario que exista un sustento que las respalde conforme lo disponía el texto original del artículo 5 de la Ley N° 27181, tal como se ha señalado en la Resolución N° 0131-2020/CEB-INDECOPI del 16 de junio de 2020.

art. 5 – Términos contractuales (incorporado con DU 019-2020)

El Proyecto de Ley 2850/2022-CR, esta alineado a lo que dispone el **numeral 10.1 del artículo 10 del Ámbito de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)**, Decreto Supremo N° 063-2021-PCM que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.

*"10.1 La entidad pública del Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar el AIR Ex Ante previo a la elaboración de **disposiciones normativas de carácter general**, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social".*

Así, el siguiente cuadro acredita que el **Texto Original del numeral 5.2 del artículo 5 de la ley N° 27181** es equivalente a lo que se dispone en el **numeral 10.1 del artículo 10 del Ámbito de aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)**, Decreto Supremo N° 063-2021-PCM.

Artículo 5 de la Ley 27181	Artículo 10.1 del DS 063-2021-PCM
5.2 El Estado garantiza la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente **las condiciones de mercado** sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte.	10.1. La entidad pública del Poder Ejecutivo tiene la obligación de realizar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante previo a la elaboración de **disposiciones normativas de carácter general**, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.

Para mayor claridad, vamos a desagregar ambos párrafos en su equivalencia en el otro párrafo.

Artículo 5 de la Ley 27181	Artículo 10 del DS 063-2021-PCM
5.2 El Estado	10.1 La entidad pública del Poder Ejecutivo
garantiza	tiene la obligación de
la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente	realizar el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante previo a la elaboración de **disposiciones normativas de carácter general**, cuando establezcan, incorporen o modifiquen

las condiciones de mercado	reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, **condiciones**, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia
sobre la base de las cuales toman sus decisiones sobre inversión y operación en materia de transporte	que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social

- Así, mientras **en el artículo 5 de la Ley 27181 se llama** "Estado", en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM se le llama "entidad pública del Poder ejecutivo", que al final de cuentas juntos forman al Estado. Así se acredita que son equivalentes.

- Mientras **en el artículo 5 de la Ley 27181 se llama** "garantiza", en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM se le llama "tiene la obligación de". Así se acredita que son equivalentes.

- Mientras **en el artículo 5 de la Ley 27181 se denomina** "la estabilidad de las reglas y el trato equitativo a los agentes privados de manera que no se alteren injustificadamente", en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM se le llama "realizar el Analisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general". En este caso son equivalentes pues estabilidad en las reglas corresponde a estabilidad en las disposiciones normativas de carácter general (como son los reglamentos de la ley). Son equivalentes pues no se alteren injustificadamente, es decir que no se pueden alterar si previamente **no se presente el debido sustento y/o justificación técnica** en la exposición de motivos de la norma donde se aprueba el cambio en las reglas de juego (regulación), corresponde a que dicho **sustento y/o justificación técnica** corresponde a la realización del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), que es la manera como la OCDE le sugirió al Perú como realizar el debido sustento y/o justificación técnica de todo cambio normativo, el cual deberá realizarse para garantizar la estabilidad de las reglas de juego (normas regulatorias también llamadas disposiciones normativas de carácter general) y deben colocarse en la exposición de motivos de dichas disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen. Así se acredita que son equivalentes.

- Mientras **en el artículo 5 de la Ley 27181 se llama** "las condiciones de mercado", en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM es mucho más amplio, y se le llama "reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones (**de mercado** o **de operación**), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia". Así se acredita que son equivalentes.

- Mientras **en el artículo 5 de la Ley 27181 se llama** "sobre la base de las cuales toman sus **decisiones sobre inversión y operación** en materia de transporte", en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM es mucho más amplio, y se le llama "que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social". Que genere variación en los costos de operación o de inversión el cumplimiento de la exigencia es una manera de afectar la decisión sobre inversión y operación que tenemos los empresarios. Que limite el otorgamiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicos, es una manera de afectar la decisión sobre inversión y operación que tenemos los empresarios. Así se acredita que son equivalentes.

Por lo tanto, sirva la presente para presentar el texto sustitutorio sugerido, el cual está alineado a la política de Estado de incorporar al Perú en OCDE, organismo de cooperación internacional cuya razón de ser es el intercambio de información para armonizar políticas públicas con la finalidad de maximizar el crecimiento económico y el desarrollo social de los países miembros, razón por la cual el Perú ha suscrito un acta para unirse y lo ha convertido en política de Estado.

La siguiente tabla presenta el comparativo del texto sustitutorio que cuenta con dictamen aprobatorio por unanimidad en la Octava sesión Ordinaria, de fecha 16 de noviembre de 2022, en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la cual se encuentra alineada a lo que manda la OCDE.

Texto Sustitutorio aprobado por la Comisión de Transportes	**Texto Sustitutorio sugerido por APETUR alineado a lo que dispone la OCDE y el Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM**
5.2 El Estado **garantiza** la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes privados **que cuenten con autorizaciones de transporte terrestre a través de contratos de concesión o actos administrativos de la entidad**, de manera que no se alteren injustificadamente los términos contractuales **ni las condiciones de mercado**, sobre la base de los cuales se efectúan inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las leyes respectivas	5.2.1 El Estado **garantiza** la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes privados **que deseen acceder o permanecer en el mercado a través de contratos de concesión**, de manera que no se alteren injustificadamente los **términos contractuales**, sobre la base de los cuales se efectúan inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las leyes respectivas.
	5.2.2 El Estado **garantiza** la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes **económicos que deseen acceder o permanecer en el mercado a través de actos administrativos de la entidad**, de manera que **la entidad del sector transportes que corresponda, en el ámbito nacional, regional o local, tenga la obligación de elaborar un sustento y/o justificación usando la metodología del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) planteado por la OCDE, previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes u ordenanzas), cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de los agentes económicos, ciudadanos o sociedad civil**, sobre la base de los cuales se efectúan inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución, las leyes y **reglamentos** respectivos **de calidad regulatoria**.

Los fundamentos de los cambios sugeridos son los siguientes:

1. En primer lugar, no se puede regular en un mismo párrafo la estabilidad jurídica de agentes económicos del sector transporte que obtienen su autorización mediante una **concesión**, los

cuales representan menos del 0.01% del total de las empresas de transporte, con la estabilidad jurídica de los agentes económicos del sector transporte que obtienen su autorización mediante un **procedimiento administrativo**, del TUPA de la entidad. Además, que en este último caso hay una nueva regulación de calidad regulatoria que debe ser incorporada, la cual fue introducida mediante el **Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM**. Por ello planteamos dividir el numeral 2.2 en dos subnumerales; el 2.2.1 para empresas que obtienen su autorización mediante una **concesión**, y el numeral 2.2.2 para empresas que obtienen su autorización mediante un **acto administrativo de la entidad**,

2. En segundo lugar, no se puede preservar la estabilidad jurídica solamente de los agentes económicos que ya cuenten con autorizaciones de transporte, pues vivimos en una economía social de mercado que favorece que nuevos agentes económicos ingresen al mercado, a los cuales también se les debe garantizar la seguridad jurídica y el trato equitativo. Por ello nuestro texto sustitutorio es; "El Estado garantiza la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes económicos que deseen acceder o permanecer en el mercado".

3. En tercer lugar, mantengamos igual los contratos de concesión y los términos contractuales asociados a esos contratos de concesión, pero, ya no existe más en el marco jurídico peruano de calidad regulatorio el constructo "condiciones de mercado". En su lugar, mediante el Decreto Supremo 063-2021-PCM se introdujo los siguientes constructos; "reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones (de operación o de mercado), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos" y que no cuentan con el debido sustento y/o justificación técnica elaborado usando la metodología del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), como se ejemplifica a continuación.

Tabla: Proceso de formación normativa usando el AIR.

Contenido	Finalidad
1) Definición del problema	- Definir adecuadamente problema que la regulación pretende resolver. - Definir si la causa del problema es una falla de mercado o una falla de regulación, para lo cual se analiza causas, naturaleza e implicancias.
2) Identificación de posibles afectados	- Identificar a los agentes económicos afectados o beneficiados. - Identificar a los gremios que representan a dichos agentes económicos. - Recabar opinión de dichos gremios respecto a problema identificado.
3) Identificación de alternativas	- Alternativa de solución 1: Alternativa de la entidad reguladora. - Alternativa de solución 2: Alternativa de los agentes económicos. - Alternativa de solución 3: Dejar que el mercado se regule sólo.
4) Análisis costo beneficio	- Hacer análisis costo-beneficio de cada alternativa de solución. - Costos de medida para agentes económicos debe ser validado por ellos.
5) Consulta alternativas	- Matriz de comparación de alternativas presentadas a interesados. - Mesas técnicas con gremios representan "stakeholders" afectados.
6) Definición de alternativas	- Desarrollar proceso transparente de elección de la alternativa elegida. - Alternativa elegida no debe ser arbitraria y debe ser "proporcional a sus fines".

Fuente: MINJUS (2017). Elaboración propia.

4. En cuarto lugar, hemos agregado a los **actos administrativos de la entidad**, las **disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes)**, tal como se redactó en el numeral 10.1 del artículo 10 del Decreto Supremo Nº 063-2021-PCM, pues en la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas, aprobada mediante Decreto Legislativo N°

1256 se considera como barrera burocrática ilegal todo cambio en las condiciones de operación o cualquier exigencia aprobado en **disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes)** que no presenten el debido sustento y/o justificación técnica.

5. Finalmente, hemos agregado que toda modificación de **actos administrativos de la entidad**, o **disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes) de la entidad**, que **establezcan, incorporen o modifiquen** condiciones de operación, etc. Deben tener el debido sustento y/o justificación técnica, los cuales deben seguir la estructura planteada en el Decreto Supremo 063-2021-PCM, que establece Lineamientos para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), el cual es una metodología para elaborar el debido sustento y/o justificación técnica de toda condición de operación que genere exigencias que condicionen el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones, en su **VIII Sesión Ordinaria** del 16 de noviembre de 2022, acordó por **UNANIMIDAD** y con **TEXTO SUSTITUTORIO** la **APROBACIÓN** del dictamen recaído en el proyecto 2850/2022-CR, con el voto favorable de los congresistas **Luis Aragón Carreño, Eduardo Salhuana Cavides, Yessica Amuruz Dulanto, Guido Bellido Ugarte, Paul Gutiérrez Ticona, David Jimenez Heredia, Esdras Medina Minaya, Segundo Montalvo Cubas, Auristela Obando Morgan, Wilson Quispe Mamani, César Revilla Villanueva, Magaly Ruíz Rodríguez, Nivardo Tello Montes, Elvis Vergara Mendoza y Norma Yarrow Lumbreras.** Asimismo, en la misma sesión, se aprobó por **UNANIMIDAD** la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados.

El texto sustitutorio del Proyecto de Ley 2850/2022-CR es el siguiente;

TEXTO SUSTITUTORIO

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27181, LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE, A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD JURÍDICA EN LAS CONDICIONES DEL MERCADO DEL TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE

Artículo Único. Modificación del artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

Se modifica el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en los siguientes términos:

(...)

5.2 El Estado **garantiza** la seguridad jurídica y el trato equitativo a los agentes privados **que cuenten con autorizaciones de transporte terrestre a través de contratos de concesión o actos administrativos de la entidad**, de manera que no se alteren injustificadamente los términos contractuales **ni las condiciones de mercado**, sobre la base de los cuales se efectúan inversiones y realizan operaciones en materia de transporte, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y las leyes respectivas.

Salvo mejor parecer,
Dese cuenta.
Sala de Comisión.
Lima, 16 de noviembre de 2022.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, tiene como objetivo promover políticas que mejoren el bienestar social y económico de la población mundial. Es un foro donde los gobiernos pueden trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a problemas comunes. La OCDE trabaja con los gobiernos para entender las causas de los cambios económicos, sociales y medioambientales. Mide la productividad y los flujos globales de comercio e inversiones. Analiza y compara datos para predecir tendencias futuras y establece estándares internacionales en distintas áreas.

Después de 50 años de existencia, la OCDE intenta apoyar a los gobiernos en cuatro grandes áreas: recobrar la confianza en los mercados, e instituciones y empresas que les hacen funcionar, **a través de mejoras regulatorias y una gobernanza más eficiente a todos los niveles**; conseguir unas finanzas públicas saneadas como base para el futuro crecimiento económico sostenible; desarrollar nuevas fuentes de crecimiento a través de la innovación, del "crecimiento verde" y del desarrollo de los países.

Durante la década de los noventa, a nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, jugó un rol importante para colocar en la agenda de los países miembros el desarrollo de la reforma regulatoria. La mejora de la **calidad de la regulación** como un instrumento de gobernanza se ha convertido en un elemento central de la mayoría de las reformas implementadas por los países para fomentar la inversión y promover el crecimiento económico; así como, la buena gobernanza y el Estado de Derecho en general (Banco Mundial, 2010:5), convirtiéndose además en un requisito previo para que un país sea aceptado en el seno de la OCDE.

Durante la década de los noventa, a nivel nacional, fue el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) la entidad que jugó un rol importante para colocar en la agenda de las entidades de la administración pública, la mejora de la **calidad de las regulaciones** que estas emitían, para lo cual mediante Decreto ley Nª 25868 creo la **Comisión de Simplificación de Acceso y Salida del Mercado**, que hoy se denomina **Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas**, como se acredita en el siguiente texto del Decreto legislativo Nª 807, el cual señala;

> *"Artículo 50°.- Agréguese un párrafo adicional al Artículo 26 e incorpórese el Artículo 26 al Decreto Ley N° 25868, en los términos siguientes:*
>
> *"Artículo 26°.- (...)*
> *"Artículo 26° BIS.- **La Comisión de Acceso al Mercado** es competente para conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N°s. 283, 668, 757, el Artículo 61 del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley N° 25035, en especial los principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Artículo 2°, así como las normas reglamentarias pertinentes.*
>
> ***Ninguna otra entidad de la Administración Pública** podrá arrogarse estas facultades. La Comisión, mediante resolución, podré eliminar las barreras burocráticas a que se*

> *refiere este artículo." La Comisión* ***podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la barrera burocrática declarada ilegal****, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de la denuncia penal correspondiente, de ser el caso".*

Con el trascurrir del tiempo, en el ámbito internacional, **la mejora regulatoria** se transformó en una política priorizada por varios países desarrollados; en CALLE, Jean; "Identificación y evaluación de iniciativas previas de implementación del Análisis de Impacto regulatorio – RIA" en entidades del Poder Ejecutivo, 2019, se señaló que su desarrollo se puede encontrar con distintas denominaciones como "calidad regulatoria", "Better Regulation" (Comisión Europea y Banco Mundial), "Regulatory Policy" (OECD), "Regulatory Coherence" (TPP y Alianza del Pacífico), "Good Regulatory Practices (NAFTA) y "Regulatory Reform" (APEC)

Con el trascurrir del tiempo, en el ámbito nacional, **la mejora regulatoria** se fue diluyendo con la creación de múltiples direcciones que atentaban contra lo dispuesto en el Decreto legislativo Nª 807 el cual señalaba de manera clara, expresa, taxativa e indubitable que ¨***Ninguna otra entidad de la Administración Pública*** *podrá arrogarse las facultades de conocer sobre los actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de los agentes económicos en el mercado*¨. Desde aquella fecha se han creado las siguientes direcciones que incorporan funciones en abierta competencia a las que tiene la **Comisión de Eliminación de barreras Burocráticas (CEB)** y la **Sala de Eliminación de barreras Burocráticas (SEL)** del Indecopi. Así tenemos; La Dirección de Eficiencia Normativa para la Productividad y Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), La Dirección General de Desarrollo Normativo de y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia (Minjus), y la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), las cuales han conformado la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) de la cual han excluido a la Comisión y a la Sala de Eliminación de barreras Burocráticas del Indecopi, en su rol de garantizar **la mejora regulatoria** en el Perú.

DESARROLLO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS BUROCRÁTICAS

En los informes; Regulatory Policy in Peru: Assembling the Framework for Regulatory Quality. Paris, Francia: OECD Publishing, OCDE (2016) y Implementación del Análisis de Impacto Regulatorio en el Gobierno Central del Perú: Estudios de caso 2014-16. Paris, Francia: OECD Publishing, OCDE (2019), ya se advertía que se encontró que el Estado peruano no cuenta con una política regulatoria clara, integral y articulada que ampare la incorporación de buenas prácticas en la elaboración de políticas públicas como son el respeto al ciclo regulatorio y la implementación del AIR en la elaboración de las Leyes, reglamentos y demás normas que pretendan imponer condiciones de acceso y/o permanencia a los agentes del mercado. Se señaló que un problema recurrente es la falta de cooperación, coordinación, intercambio de información y experiencias entre las diversas entidades del Poder Ejecutivo. Por otro lado, si bien la CEB y la SEL tienen facultades para suspender trámites, requisitos y condiciones de operación (condiciones de mercado) sobre los que hay quejas justificadas de ilegalidad o irracionalidad; sin embargo, carecen de un mandato legal para realizar evaluaciones de leyes

ya promulgadas o que se encuentren en proceso de elaboración, y de las **disposiciones normativas de carácter general que reglamentan dichas leyes**, lo cual no permite eliminar barreras burocráticas desde la etapa de diseño de la norma regulatoria .

Por todas estas razones en OCDE (2016) se recomienda la creación de un órgano supervisor que absorba todas las actividades y herramientas de política regulatoria y que concentre la función de promover la eficiencia de los mercados y la protección de los derechos del consumidor, lo cual actualmente se encuentra disperso en diversos ministerios y organismos públicos especializados. Esta entidad debiera crearse en el marco de la implementación de una **Ley General de Mejora Regulatoria** o **Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas** que promueva el uso del AIR como una estrategia para la gestión eficaz de todo el ciclo de gobernanza regulatoria y diseño de políticas públicas que solucionen efectivamente las fallas que pueda presentar el mercado, pero que a su vez eviten generar fallas de gobierno que generen barreras burocráticas que afecten la competencia y productividad de los mismos.

A modo de ejemplo en OCDE (2016) se presentaron países de la OCDE que crearon un órgano supervisor que concentre todas las actividades y herramientas de política regulatoria, así en Estados Unidos se creó la **Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA)**, la cual es la autoridad central del gobierno responsable de revisar los reglamentos del Poder Ejecutivo, la aprobación de la información recopilada por el gobierno y el establecimiento de prácticas estadísticas, entre otros. El responsable es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado.

De manera similar, en Inglaterra se creó la **Better Regulation Executive (BRE)**, el cual forma parte del Departamento Británico de Negocios, Energía y Estrategia Industrial. Es así como cualquier norma que imponga costos a empresas debe pasar previamente por una evaluación de impacto de esta entidad pues se sabe que algunas regulaciones son ineficaces e innecesarias, y cumplir con ellas cuesta tiempo y dinero que puede restringir el crecimiento económico.

Finalmente, en México se creó la **Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)**, órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía cuya misión es promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. Su función es revisar el marco regulatorio, diagnosticar su aplicación y elabora propuestas legislativas y administrativas, así como programas para mejorar la regulación en actividades o sectores económicos específicos y priorizados. Conforme a la Ley General de Mejora Regulatoria, en el artículo 23° y siguientes, publicado el 20 de junio de 2021, que mejora y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Administrtivos.

Frente a estas consideraciones desarrolladas e incorporados los nuevos conceptos y procedimientos para la medición de las Barreras burocráticas, en el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, es de necesidad la modificación, supresión y adición en el Decreto Legislativo 1256, con la siguiente propuesta:

Cuadro comparativo de la Ley Primigenia y propuesta legislativa:

Decreto Legislativo 1256, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocráticas	Propuesta Legislativa modificatoria
Artículo 1.- Finalidades de la ley La presente ley tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública.	**Artículo 1.- Finalidades de la ley** La presente ley tiene como finalidad supervisar el cumplimiento del marco legal que protege los derechos a la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, en beneficio de personas naturales o jurídicas, mediante la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR)** con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública. **Para operacionalizar esta finalidad el presente artículo introduce la obligación legal de que toda entidad de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, deban realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación (condiciones de mercado), requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.**
Artículo 3.- Definiciones Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones: [...] 3. Barrera burocrática: exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro que imponga cualquier entidad, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa. La sola calidad de exigencia, requisito, limitación, prohibición y/o cobro no implica necesariamente su carácter ilegal y/o su carencia de razonabilidad.	**Artículo 3.- Definiciones** Para efectos de la presente ley, debe tenerse en cuenta las siguientes definiciones: [...] 3. Barrera burocrática ilegal: Es todo requisito, limitación, prohibición, **obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad**, cobro **o cualquier exigencia que imponga cualquier entidad, y que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas (agentes económicos), ciudadanos o sociedad civil**, dirigido a condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos sujetos a las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR).** La sola calidad de requisito, limitación, prohibición, **obligación, condición de operación (condición de mercado), responsabilidad**, cobro **o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento** no implica necesariamente su carácter ilegal, **pero si la disposición normativa de carácter general que estableció, incorporó o modificó dicha exigencia no cuenta con el respectivo sustento y/o justificación usando la metodología del AIR de manera previa a su aprobación, o un agente económico denuncia esta**

	exigencia como barrera burocrática y la entidad denunciada no es capaz de presentar el debido sustento y/o justificación cumpliendo con los criterios de calidad regulatoria planteados por la OCDE en el AIR, en ese caso, si se considera barrera burocrática ilegal y se ordena su inaplicación.
4. Formas de materialización: las barreras burocráticas se materializan a través de actos administrativos, disposiciones administrativas y/o actuaciones materiales.	4. Formas de materialización: las barreras burocráticas se materializan a través de actos administrativos, **disposiciones normativas de carácter general (reglamentos de leyes)** y/o actuaciones materiales.
6. Disposición administrativa: todo dispositivo normativo emitido por una entidad destinado a producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados y/o agentes económicos.	**6. Disposiciones normativas de carácter general:** todo dispositivo normativo emitido por una entidad **(como el reglamento de una ley),** destinado a producir efectos jurídicos abstractos y generales sobre un grupo indeterminado de administrados y/o agentes económicos**, a partir de establecer, incorporar o modificar exigencias como las que se señalan en el artículo 10 de DS 063-2021-PCM.**
7. Actuación material: todo comportamiento, manifestación y/o actividad material de una entidad o un funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que sin ser viabilizada a través de un acto y/o disposición administrativa, produce efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa.	7. Actuación material: todo comportamiento, manifestación y/o actividad material de una entidad o un funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza funciones administrativas por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, que sin ser viabilizada a través de un acto y/o **Disposición normativa de carácter general**, produce efectos jurídicos capaces de restringir u obstaculizar el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa o **el cumplimiento del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) EX ANTE y el AIR EX POST**.
9. Administrados: personas naturales y/o jurídicas que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un procedimiento administrativo sujeto a las normas y/o principios de simplificación administrativa.	9. Administrados: personas naturales y/o jurídicas que pretendan tramitar o se encuentren tramitando un procedimiento administrativo sujeto a las normas y/o principios de simplificación administrativa o **del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) EX ANTE y el AIR EX POST**.
10. Inaplicación con efectos generales: efecto de una resolución que beneficia a todos los agentes económicos y administrados afectados, real o potencialmente, por una barrera burocrática contenida en una disposición administrativa, en los supuestos regulados en la presente Ley.	10. Inaplicación con efectos generales: efecto de una resolución que beneficia a todos los agentes económicos y administrados afectados, real o potencialmente, por una barrera burocrática contenida en una **disposición normativa de carácter general**.
11. Inaplicación al caso concreto: efecto de una resolución que beneficia únicamente al denunciante que obtiene un pronunciamiento favorable en los supuestos regulados en la presente Ley.	**11.** Inaplicación al caso concreto: efecto de una resolución que beneficia únicamente al denunciante que obtiene un pronunciamiento favorable en los supuestos regulados en la presente Ley**, a menos que la barrera burocrática ilegal declarada en dicha resolución sea respecto a un numeral, literal, inciso, o artículo de una disposición normativa de carácter general, en cuyo caso no existe aplicación al caso concreto sino inaplicación con efectos generales.**
Artículo 4.- Principios de las autoridades a cargo de supervisar la presente ley Además de los principios señalados en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, las autoridades a cargo de hacer cumplir la presente ley se rigen por los siguientes principios:	**Artículo 4.- Principios de las autoridades a cargo de supervisar la presente ley** Además de los principios señalados en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, las autoridades a cargo de hacer cumplir la presente ley se rigen por los siguientes principios:
1. Principio de acción preventiva. - los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales *y/o carentes de razonabilidad* por parte de las entidades sujetas a investigación.	1. Principio de acción preventiva. - los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales por parte de las entidades sujetas a investigación.

2. Principio de encausamiento. - los órganos de primera instancia identifican, de oficio, otros medios de materialización de una barrera burocrática distintos a los indicados en la denuncia, cuando sea evidente su existencia. Del mismo modo, los referidos órganos podrán identificar, de oficio, la barrera burocrática cuestionada del texto íntegro de la denuncia y no únicamente del petitorio.	2. Principio de encausamiento. - los órganos de primera instancia identifican, de oficio, otros medios de materialización de una barrera burocrática distintos a los indicados en la denuncia, cuando sea evidente su existencia. Del mismo modo, los referidos órganos podrán identificar, de oficio, la barrera burocrática cuestionada del texto íntegro de la denuncia y no únicamente del petitorio. **3. Principio de Calidad Regulatoria. - Los órganos encargados del inicio de las acciones de parte o de oficio dentro del Indecopi privilegian el análisis para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de distintas alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias) de un problema público, considerando la identificación y el análisis de riesgos, con el fin de evaluar si la alternativa regulatoria elegida es de calidad, al ser coherente y consistente con el ordenamiento jurídico vigente de Análisis de Impacto Regulatorio.**
CAPÍTULO II **COMPETENCIAS** **Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas** **6.1. De la Comisión y la Sala** La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer los actos administrativos, disposiciones administrativas y actuaciones materiales, incluso del ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad. Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley. **6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión** La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en el órgano instructor en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Es competente para realizar todo tipo de acciones preventivas, investigaciones, inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones de supervisión de oficio sobre la materia, así como para realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033. **6.3. De la Secretaría Técnica de la Sala** La Secretaría Técnica de la Sala es competente para tramitar y realizar las labores de instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Sala, a estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.	**CAPÍTULO II** **COMPETENCIAS** **Artículo 6. - Atribuciones de las autoridades en materia de eliminación de barreras burocráticas** **6.1. De la Comisión y la Sala** La Comisión y la Sala en segunda instancia, son competentes para conocer los actos administrativos, **las disposiciones normativas de carácter general** y actuaciones materiales, **además de en el ámbito nacional, en el ámbito regional e incluso en el ámbito municipal provincial y distrital**, que impongan barreras burocráticas ilegales. Asimismo, son competentes para velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en **el Decreto Supremo N 063-2021-PCM y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales,** los Decretos Legislativos N° 283, 668, 757 y el artículo 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, así como las normas reglamentarias pertinentes, o las normas que las sustituyan. Ninguna otra entidad podrá arrogarse estas facultades. Sus resoluciones son ejecutables cuando hayan quedado consentidas o sean confirmadas por la Sala, según corresponda de conformidad con lo establecido en el artículo 32 de la presente Ley. **6.2. De la Secretaría Técnica de la Comisión** La Secretaría Técnica de la Comisión se constituye en el órgano instructor en los procedimientos de eliminación de barreras burocráticas. Es competente para realizar todo tipo de acciones preventivas, investigaciones, inspecciones con o sin notificación previa y/o acciones de supervisión de oficio sobre la materia. **Es competente para realizar el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE a las disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones de operación, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento**, así como para realizar las labores de inicio, tramitación e instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Comisión. A estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM,** Decreto Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033. **6.3. De la Secretaría Técnica de la Sala** La Secretaría Técnica de la Sala es competente para tramitar y realizar las labores de instrucción de los procedimientos administrativos seguidos ante la Sala, a estas funciones se aplican supletoriamente lo dispuesto en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales,** Decreto

	Legislativo N° 807, la Ley N° 27444 y el Decreto Legislativo N° 1033.
Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones administrativas 8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas, dispone su inaplicación con efectos generales.	**Artículo 8.- De la inaplicación con efectos generales de barreras burocráticas ilegales contenidas en disposiciones normativas de carácter general** 8.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en **disposiciones normativas de carácter general**, dispone su inaplicación con efectos generales.
Artículo 9.- De la declaración de barreras burocráticas carentes de razonabilidad en procedimientos de oficio En los procedimientos iniciados de oficio en los que se declare la carencia de razonabilidad de barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas, la Comisión o la Sala, de ser el caso, ordena la publicación de un extracto de la resolución en el diario oficial "El Peruano".	**Artículo 9.- De la declaración de barreras burocráticas ilegales** Las entidades de la administración pública, tanto en el ámbito nacional, como en los ámbitos regional y local, tienen la obligación de realizar el AIR previo a la elaboración de disposiciones normativas de carácter general, cuando establezcan, incorporen o modifiquen reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil que limite el otorgamiento o reconocimiento de derechos para el óptimo desarrollo de actividades económicas y sociales que contribuyan al desarrollo integral, sostenible, y al bienestar social.
Artículo 10.- De la inaplicación al caso concreto 10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad o carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en disposiciones administrativas o la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y/o actuaciones materiales, dispone su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante.	**Artículo 10.- De la inaplicación al caso concreto** 10.1. Cuando en un procedimiento iniciado a pedido de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declare la ilegalidad de barreras burocráticas materializadas en **actos administrativos o actuaciones materiales**, dispone su inaplicación al caso concreto en favor del denunciante. Sin embargo, si la declaratoria de ilegalidad de barreras burocráticas es materializada en **disposiciones normativas de carácter general o en actos administrativos o actuaciones materiales que tienen como sustento un numeral, literal, inciso o artículo de una disposición normativa de carácter general**, en ese caso, dispone su inaplicación con efectos generales.
Artículo 11.- Mecanismos para lograr la derogación de las disposiciones administrativas que contienen barreras burocráticas En los procedimientos iniciados de oficio, el Indecopi puede interponer la demanda de acción popular contra decretos supremos u otras normas de inferior jerarquía que contengan barreras burocráticas identificadas como ilegales y/o carentes de razonabilidad, a fin de lograr su derogación o nulidad. Asimismo, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra normas municipales y regionales de carácter general con rango de ley que contengan barreras burocráticas identificadas como ilegales y/o carentes de razonabilidad.	**Artículo 11.- Mecanismos para lograr la derogación de las disposiciones normativas de carácter general que contienen barreras burocráticas** En los procedimientos iniciados **a pedido de parte o** de oficio, **en contra de disposiciones normativas de carácter general que no han cumplido el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) Ex Ante para aprobar condiciones de operación o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil, el Indecopi debe comunicar a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR) para que esta presente, durante la inmediatamente siguiente sesión del Consejo de Ministros, la necesidad de la modificación de cualquier numeral, literal, inciso o artículo de cualquier disposición normativa de carácter general u otras normas de inferior jerarquía del Poder Ejecutivo que contengan las barreras burocráticas identificadas como ilegales, a fin de lograr su derogación o nulidad. En caso la barrera burocrática declarada ilegal se encuentre consignada en** normas municipales y regionales de carácter general con rango de ley, **Indecopi deberá** acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad contra

	dichas normas que contengan barreras burocráticas identificadas como ilegales.
CAPÍTULO II **METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BARRERAS BUROCRÁTICAS** **Artículo 13.- Metodología de análisis** La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad y/o razonabilidad de las barreras burocráticas contenidas en disposiciones administrativas en los procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo. La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y actuaciones materiales se efectúa de acuerdo a la metodología del presente capítulo en cuanto corresponda.	**CAPÍTULO II** **METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE BARRERAS BUROCRÁTICAS** **Artículo 13.- Metodología de análisis** La Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúa la legalidad de las barreras burocráticas contenidas en **disposiciones normativas de carácter general** en los procedimientos de parte y de oficio, de acuerdo con la metodología desarrollada en el presente capítulo **y la contenida en el Decreto Supremo N 063-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales donde se establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante y Ex Post.** La evaluación de la legalidad y/o de la razonabilidad de las barreras burocráticas materializadas en actos administrativos y actuaciones materiales se efectúa de acuerdo **con la** metodología del presente capítulo en cuanto corresponda.
Artículo 14.- Análisis de legalidad 14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis. b. Si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la emisión y/o publicación de la disposición administrativa que materializa la barrera burocrática. c. Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa o cualquier dispositivo legal.	**Artículo 14.- Análisis de legalidad** 14.1. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica**, en un primer momento,** que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúe los siguientes aspectos: a. Si existen o no atribuciones conferidas por ley que autoricen a la entidad a establecer y/o aplicar la barrera burocrática bajo análisis y si la entidad siguió los procedimientos y/o formalidades que exige el marco legal vigente para la **elaboración, aprobación,** emisión y/o publicación de la **disposición normativa de carácter general** que materializa la barrera burocrática **denunciada**. **b.** Si a través de la imposición y/o aplicación de la barrera burocrática se contravienen normas y/o principios de simplificación administrativa **o de calidad regulatoria como las contenidas en el DECRETO SUPREMO N° 063-2021-PCM y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales,** o cualquier **otro** dispositivo legal **vigente al momento en el cual la disposición normativa de carácter general fue aprobada o promulgada en el Diario Oficial El Peruano, lo que ocurra primero.** **14.2. El análisis de legalidad de una barrera burocrática implica, en un segundo momento, que la Comisión o la Sala, de ser el caso, evalúen si la entidad denunciada ha desarrollado en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que aprueba la condición de operación u otra exigencia objeto de denuncia como barrera burocrática, todas y cada una de las seis (06) componentes del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) de manera previa a la elaboración de dicha disposición normativa de carácter general, la cual establece, incorpora o modifica reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil. Para ello se deberá evaluar;**

	a. Si se ha definido de manera clara, expresa, taxativa e indubitable cuál es el problema de política pública que la entidad denunciada intenta resolver mediante el establecimiento, incorporación o modificación de la condición de operación o cualquier otra exigencia cuestionada. Para ello se debe demostrar la existencia de un interés público que sustente la aplicación de la medida cuestionada, y la existencia del problema que se pretendería solucionar con la medida cuestionada. Para acreditar que existe un real problema de política pública a resolver, se debe presentar evidencias objetivas, cuantitativas y/o cualitativas, para lo cual se debe realizar un diagnóstico del problema público identificando sus causas en base a evidencia, lo que implica el análisis de datos estadísticos, investigaciones, estudios empíricos u otra información verificable. **b. Si se ha identificado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable quiénes son los posibles afectados por la condición de operación o cualquier otra exigencia que se va a establecer, incorporar o modificar. Se debe identificar a las personas naturales o jurídicas que podrían resultar afectadas y beneficiadas con la regulación cuestionada si son los consumidores, los proveedores, o es la sociedad en su conjunto. La finalidad de esto es calcular correctamente el impacto de la norma, por un lado; y, conocer las opciones de los involucrados, por otra.** **c. Si se ha identificado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable cuáles son las alternativas de solución planteadas para resolver el problema de política pública identificado en el paso uno y si se ha identificado y redactado un objetivo SMART que se pretenda alcanzar por cada una de las alternativas de regulación planteadas. El objetivo SMART debe de ser; específico: es decir que debe redactarse de tal manera que sea claro lo que se pretende conseguir y debe circunscribirse a un aspecto, tarea o acción determinada por la entidad, medible: es decir que se pueda contar con los medios para medir los resultados alcanzados, alcanzable: es decir que el objetivo sea perfectamente realizable en las condiciones con las que se cuenta, relevante: es decir que se encuentra alineada con los objetivos generales de la entidad, y temporal: es decir que se encuentran limitados en el tiempo, un tiempo determinado para alcanzar el objetivo planteado, y pueda ser verificado mediante el AIR "Ex Post". Para ello se debe identificar y desarrollar cada alternativa de solución regulatorio o no regulatoria. Nunca se debe dejar de lado la alternativa "no hacer nada", considerando que muchas veces la solución estatal no es razonable, por generar mayores costos (fallas del Estado) o por no tener los efectos esperados. A veces, dejar que el mercado se corrija a sí mismo o soportar la falla de mercado son alternativas más razonables.** **d. Si se ha realizado una adecuada evaluación de los impactos de cada una de las alternativas de solución planteadas por la entidad o los agentes económicos afectados al resolver el problema de política pública identificado en el paso uno. Para ello se debe identificar cuáles son los costos y beneficios que genera cada alternativa incluyendo sus mecanismos de cumplimiento, con la finalidad de elegir la mejor alternativa de solución del problema público identificado (regulatoria o no regulatoria). Para realizar el análisis costo-beneficio (ACB) sobre las alternativas propuestas, se debe realizar una valorización de los costos fijos y variables que implica su cumplimiento para los agentes económicos posiblemente afectados por cada una de las alternativas viables. Muchas veces se comete el error de**

	hacer solamente el ACB sobre la propuesta elegida, pero esto pierde de vista que la utilidad y la función del ACB es comparar alternativas. Por tanto, se debe realizar el ACB sobre cada una de las alternativas propuestas. **e. Si se ha realizado una presentación de las alternativas de solución y su respectivo análisis costo-beneficio, así como su matriz de evaluación de impactos a los grupos de interés afectados por la regulación denunciada como barrera burocrática, para el debate público. No existe una forma única de realizar esta consulta y tampoco un momento específico en el AIR. El momento en que se haga dependerá del problema y la necesidad de recabar información de los stakeholders a quienes afecta la regulación denunciada. Además, se deberá identificar, describir y desarrollar los mecanismos de implementación y cumplimiento para asegurar la viabilidad de la alternativa seleccionada como resultado del input de la socialización de las alternativas de solución y de la matriz de evaluación de impactos. También se deberá presentar el sustento y/o justificación del motivo por el cual se seleccionó la alternativa elegida, teniendo que demostrar que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida.** **f. Si se ha demostrado que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite los siguiente tres puntos de manera complementaria;** **1. Se realizó una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida elegida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado.** **2. Que se acredite que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos.** **3. Que se acredite que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas.** **14.3. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara barrera burocrática ilegal la condición de operación o la exigencia denunciada.**
Artículo 15.- Condiciones para realizar el análisis de razonabilidad La Comisión o la Sala, de ser el caso, realiza el análisis de razonabilidad de una barrera burocrática en los procedimientos iniciados a pedido de parte, siempre que el denunciante presente indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad de la misma en la denuncia y hasta antes de que se emita la resolución que resuelve la admisión a trámite de esta. En los procedimientos iniciados de oficio, la Comisión o la Sala realiza dicho análisis en caso de que, a través de la resolución de inicio, se hubiera sustentado la existencia de indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la medida.	**Se suprime pues cuando se aplica el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE, el análisis para determinar si una barrera burocrática es carente de razonabilidad, es subsumido por el análisis para determinar si dicha barrera burocrática es ilegal.** **Este artículo también se elimina pues no es posible que la CARGA DE LA PRUEBA para determinar si una barrera burocrática no es arbitraria o no es desproporcionada recaiga en el agente económico, a quien se le obliga a pagar estudios técnicos para acreditar indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad, cuando la CARGA DE LA PRUEBA debe recaer en la entidad administrativa que estableció, incorporó o modificó la condición de operación o cualquier exigencia denunciada como barrera burocrática por no haber**

	presentado como sustento y/o justificación el respectivo Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE.
Artículo 16.- Indicios sobre la carencia de razonabilidad 16.1 Los indicios a los que hace referencia el artículo precedente deben estar dirigidos a sustentar que la barrera burocrática califica en alguno de los siguientes supuestos: a. Medida arbitraria: es una medida que carece de fundamentos y/o justificación, o que teniendo una justificación no resulta adecuada o idónea para alcanzar el objetivo de la medida; y/o b. Medida desproporcionada: es una medida que resulta excesiva en relación con sus fines y/o respecto de la cual existe otra u otras medidas alternativas que puedan lograr el mismo objetivo de manera menos gravosa. 16.2 Sin que se considere como una lista taxativa, no se consideran indicios suficientes para realizar el análisis de razonabilidad los siguientes argumentos: a. Que no se encuentren referidos a la barrera burocrática cuestionada. b. Que tengan como finalidad cuestionar la pertinencia de una política pública. c. Alegaciones o afirmaciones genéricas. Se deben justificar las razones por las cuales se considera que la medida es arbitraria y/o desproporcionada. d. Alegar como único argumento que la medida **genera costos**.	**Se suprime pues cuando se aplica el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE, el análisis para determinar si una barrera burocrática es carente de razonabilidad, es subsumido por el análisis para determinar si dicha barrera burocrática es ilegal.** **Este artículo también se elimina pues no es posible que la CARGA DE LA PRUEBA para determinar si una barrera burocrática no es arbitraria o no es desproporcionada recaiga en el agente económico, a quien se le obliga a pagar estudios técnicos para acreditar indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad, cuando la CARGA DE LA PRUEBA debe recaer en la entidad administrativa que estableció, incorporó o modificó la condición de operación o cualquier exigencia denunciada como barrera burocrática por no haber presentado como sustento y/o justificación el respectivo Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE.**
Artículo 17.- Posibilidad de cuestionar los indicios sobre carencia de razonabilidad Durante el procedimiento, la entidad puede presentar información y/o documentación que desacredite los indicios de carencia de razonabilidad de la medida.	**Se suprime pues cuando se aplica el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE, el análisis para determinar si una barrera burocrática es carente de razonabilidad, es subsumido por el análisis para determinar si dicha barrera burocrática es ilegal.** **Este artículo también se elimina pues no es posible que la CARGA DE LA PRUEBA para determinar si una barrera burocrática no es arbitraria o no es desproporcionada recaiga en el agente económico, a quien se le obliga a pagar estudios técnicos para acreditar indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad, cuando la CARGA DE LA PRUEBA debe recaer en la entidad administrativa que estableció, incorporó o modificó la condición de operación o cualquier exigencia denunciada como barrera burocrática por no haber presentado como sustento y/o justificación el respectivo Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE.**

Artículo 18.- Análisis de razonabilidad 18.1. Una vez que la Comisión o la Sala, de ser el caso, considera que han sido presentados indicios suficientes sobre la presunta carencia de razonabilidad de la barrera burocrática cuestionada, analiza la razonabilidad de la medida, verificando el cumplimiento de los siguientes elementos: a. Que la medida no es arbitraria, lo que implica que la entidad acredite: 1. La existencia del interés público que sustentó la medida cuestionada. El interés público alegado debe encontrarse dentro del ámbito de atribuciones legales de la entidad. 2. La existencia del problema que se pretendía solucionar con la medida cuestionada. 3. Que la medida cuestionada resulta idónea o adecuada para lograr la solución del problema y/o para alcanzar el objetivo de la medida. b. Que la medida es proporcional a sus fines, lo que implica que la entidad acredite: 1. Una evaluación de los beneficios y/o el impacto positivo que generaría la medida y de los costos y/o el impacto negativo de la misma para los agentes económicos obligados a cumplirla, así como para otros agentes afectados y/o para la competencia en el mercado. 2. Que la referida evaluación permite concluir que la medida genera mayores beneficios que costos. 3. Que otras medidas alternativas no resultarían menos costosas o no serían igualmente efectivas. Dentro de estas medidas alternativas debe considerarse la posibilidad de no emitir una nueva regulación. 18.2. En caso de que la entidad no acredite alguno de los elementos indicados en los literales precedentes, la Comisión o la Sala, de ser el caso, declara la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática.	**Se suprime pues cuando se aplica el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE, el análisis para determinar si una barrera burocrática es carente de razonabilidad, es subsumido por el análisis para determinar si dicha barrera burocrática es ilegal.** **Este artículo también se elimina pues no es posible que la CARGA DE LA PRUEBA para determinar si una barrera burocrática no es arbitraria o no es desproporcionada recaiga en el agente económico, a quien se le obliga a pagar estudios técnicos para acreditar indicios suficientes respecto a la carencia de razonabilidad, cuando la CARGA DE LA PRUEBA debe recaer en la entidad administrativa que estableció, incorporó o modificó la condición de operación o cualquier exigencia denunciada como barrera burocrática por no haber presentado como sustento y/o justificación el respectivo Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE.**

CAPÍTULO III **REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO**	**CAPÍTULO III** **REGLAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO**
Artículo 19.- Duración del procedimiento El procedimiento seguido ante la Comisión tiene una duración máxima de ciento veinte (120) días hábiles. El mismo plazo se aplica para el procedimiento seguido ante la Sala.	**Artículo 19.- Duración del procedimiento** El procedimiento seguido ante la Comisión tiene una duración máxima de ciento veinte (120) días hábiles **los cuales se computan desde la fecha en la que se presenta la denuncia por imposición de barreras burocráticas en la mesa de partes del Indecopi**. El mismo plazo se aplica para el procedimiento seguido ante la Sala **cuyo plazo de 120 días se computa desde la fecha en la que se emite la resolución de primera instancia por parte de la Comisión, razón por la cual la Comisión dispone de un plazo de 24 horas para poner en conocimiento de la Sala la resolución emitida por dicha instancia, las apelaciones presentadas por las partes del proceso y su resolución de admisión de las apelaciones, si las hubiera**.
Artículo 20.- Requisitos para interponer una denuncia Para interponer una denuncia, además del pago de la respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos, los siguientes aspectos:	**Artículo 20.- Requisitos para interponer una denuncia** Para interponer una denuncia, además del pago de la respectiva tasa, el denunciante debe identificar de manera concisa y/o presentar a través de su denuncia o anexos, los siguientes aspectos:
1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.	1. La(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
2. El medio de materialización: disposición administrativa, acto administrativo y/o actuación material. En caso de denunciar una disposición administrativa, el denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo o parte pertinente en que se encuentra materializada la barrera burocrática.	2. El medio de materialización: **disposiciones normativas de carácter general**, acto administrativo y/o actuación material. En caso de denunciar **una disposición normativa de carácter general**, el denunciante además debe identificar el párrafo, el artículo**, el numeral, el literal, el inciso** o parte pertinente en que se encuentra materializada la barrera burocrática.
3. La entidad (o entidades) que impone(n) y/o aplica(n) la(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.	3. La entidad (o entidades) que impone(n) y/o aplica(n) la(s) barrera(s) burocrática(s) materia de denuncia.
4. Los hechos, cuando la barrera burocrática se materializa en actos administrativos y/o actuaciones materiales.	4. Los hechos, cuando la barrera burocrática se materializa en actos administrativos y/o actuaciones materiales.
5. Los fundamentos jurídicos que sustentan que la barrera burocrática denunciada es ilegal, de ser el caso.	5. Los fundamentos jurídicos que sustentan que la barrera burocrática denunciada es ilegal, de ser el caso.
6. Los indicios que sustentan la presunta carencia de razonabilidad de la barrera burocrática denunciada, de ser el caso.	**6. Se elimina este numeral pues cuando se aplica el Análisis de Impacto Regulatorio EX ANTE, el análisis para determinar si una barrera burocrática es carente de razonabilidad, es subsumido por el análisis para determinar si dicha barrera burocrática es ilegal.**
7. Los medios probatorios que se requieran para acreditar lo afirmado en los literales anteriores, cuando corresponda.	**6**. Los medios probatorios que se requieran para acreditar lo afirmado en los literales anteriores, cuando corresponda.

Artículo 21.- Representación en el procedimiento 21.3. Cuando las denuncias sean presentadas por una asociación, esta última debe precisar si lo hace en nombre propio o como representante de otros agentes económicos y/o administrados. De ser este último caso, la asociación actúa como representante legal, por lo que debe acreditar que cuenta con el otorgamiento de poderes de representación procesal suficientes para representar a cada uno de los asociados. La inaplicación al caso concreto a la que hace referencia el artículo 10 de la presente Ley, solo beneficia a aquellos asociados cuya representación fue acreditada por la asociación mediante los citados poderes antes de la admisión a trámite de la denuncia.	**Artículo 21.- Representación en el procedimiento** 21.3. Cuando las denuncias sean presentadas por una asociación, **no es necesario que** esta última deba precisar si lo hace en nombre propio o como representante de otros agentes económicos y/o administrados **si es que la barrera burocrática denunciada es materializada** en **disposiciones normativas de carácter general, pues en caso declararse barrera burocrática ilegal se** dispone su inaplicación con efectos generales. **En caso la barrera burocrática denunciada sea materializada en actos administrativos o actuaciones materiales, se debe acreditar la representación de aquellos agentes económicos que aporten los medios probatorios que acrediten la imposición de la barrera burocrática denunciada, y en caso sea declarada ilegal, su inaplicación será al caso concreto de los agentes económicos que hayan otorgado poderes de representación procesal suficientes para ser representados por dicha asociación. Si la declaratoria de ilegalidad de barreras burocráticas es materializada en actos administrativos o actuaciones materiales que tengan como sustento un numeral, literal, inciso o artículo de una disposición normativa de carácter general, en ese caso, se dispone su inaplicación con efectos generales.** La inaplicación al caso concreto a la que hace referencia el artículo 9 de la presente Ley, solo beneficia a aquellos asociados cuya representación fue acreditada por la asociación mediante los citados poderes antes de la admisión a trámite de la denuncia. **Adicionalmente a ello, una asociación puede iniciar un procedimiento a pedido de parte pagando la tasa correspondiente, o presentar una denuncia informativa para que esta se inicie de oficio, en caso sea este último caso,** la Comisión o la Sala, **deben incorporar a la asociación como parte del procedimiento, para que le pueda llegar los descargos de la entidad denunciada, presente aclaraciones o apelaciones a la resolución de la Comisión en caso lo estime conveniente.**
Artículo 23.- Medidas cautelares 23.1. En cualquier etapa del procedimiento, la Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, puede dictar, de oficio o a pedido de quien haya presentado una denuncia de parte, una medida cautelar con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente ilegal y/o carente de razonabilidad a ser evaluada, de manera previa a la emisión de la resolución final. La medida cautelar dictada por la Secretaría Técnica se otorga con cargo a dar cuenta a la Comisión. 23.2. En caso de que la medida cautelar haya sido dictada por la Comisión o su Secretaría Técnica, el efecto de la misma permanece hasta que la Sala emita pronunciamiento final o la revoque al declarar fundada una apelación en su contra. **Artículo 24.- Requisitos para dictar medidas cautelares** Para dictar una medida cautelar, la Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, debe verificar la existencia concurrente de: 1. La barrera burocrática que se pretende inaplicar. 2. La verosimilitud del carácter ilegal o de la carencia de razonabilidad de la barrera burocrática. 3. La posibilidad de que por el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, en primera o segunda instancia, se cause un daño que se torne en irreparable para el denunciante. **Artículo 25.- De las costas y costos** 25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos en los que haya	**Artículo 23.- Medidas cautelares** **23.1. A sólo pedido del agente económico o gremio que lo representa, y que han presentado una denuncia de parte,** la Comisión debe **emitir una resolución que conceda la** medida cautelar **solicitada, juntamente con la resolución de admisión a trámite,** con el objeto de que la entidad denunciada se abstenga de aplicar o imponer la barrera burocrática presuntamente ilegal a ser evaluada, **mientras se emita** la resolución final. **23.2.** En caso de que la medida cautelar haya sido dictada por la Comisión, el efecto de **esta** permanece hasta que la Sala emita pronunciamiento final o la revoque al declarar fundada una apelación **de la entidad denunciada**. **Artículo 24.- Requisitos para dictar medidas cautelares** Para dictar una medida cautelar, la Comisión debe verificar la existencia concurrente de: 1. La barrera burocrática que se pretende inaplicar. 2. La verosimilitud del carácter ilegal de la barrera burocrática **denunciada**. 3. La posibilidad de que por el transcurso del tiempo entre la interposición de la denuncia y la resolución que ponga fin al procedimiento, **120 días hábiles** en primera instancia **y otros 120 días hábiles** segunda instancia, se cause un daño que se torne en irreparable para el denunciante. **Artículo 25.- De las costas y costos** 25.1. En los procedimientos iniciados a solicitud de parte, la Sala, **debe** ordenar a la entidad vencida el reembolso de las costas y costos en los que haya incurrido el denunciante, **sin**

incurrido el denunciante, siempre que este lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento.	**necesidad de** que este lo hubiese solicitado al inicio o durante el procedimiento, **ello con la finalidad de ofrecer desincentivos para que las entidades de la administración pública sigan aprobando condiciones de operación o cualquier otra exigencia sin realizar el debido Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, como sustento y/o justificación de las condiciones de operación u otras exigencias que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil.**
25.2. Las reglas aplicables a los procedimientos para la liquidación de costas y costos son las dispuestas en la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI del 6 de abril de 2015 o la que la sustituya.	25.2. Las reglas aplicables a los procedimientos para la liquidación de costas y costos son las dispuestas en la Directiva N° 001-2015/TRI-INDECOPI del 6 de abril de 2015 o la que la sustituya.
Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de parte 27.1. La Comisión, su Secretaría Técnica o la Sala, de ser el caso, declara la improcedencia de la denuncia de parte de acuerdo con los supuestos establecidos en el Código Procesal Civil.	**Artículo 27.- Improcedencia de la denuncia de parte** 27.1. **La Secretaría Técnica de la Comisión** declara la improcedencia de la denuncia de parte de acuerdo con los supuestos establecidos en el Código Procesal Civil.
27.2. En primera instancia, si la Comisión o su Secretaría Técnica, estima que la denuncia es improcedente, la declara de manera liminar, finalizando así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por la Comisión o su Secretaría Técnica, pudiendo admitir los demás extremos.	27.2. **Si la Secretaría Técnica de la Comisión**, estima que la denuncia es improcedente, la declara de manera liminar, finalizando así el procedimiento. Si el defecto se refiere a alguna de las pretensiones, la declaración de improcedencia se limita a aquellas que adolecen del defecto advertido por la Secretaría Técnica, pudiendo admitir los demás extremos.
27.3. Si la Comisión lo considera necesario, también puede declarar la improcedencia de la denuncia, luego de admitida a trámite y presentados los descargos.	27.**3 la Secretaría Técnica de la Comisión** puede efectuar requerimientos de información respecto de aspectos de procedencia de la denuncia.
27.4 La Secretaría Técnica o la Comisión pueden efectuar requerimientos de información respecto de aspectos de procedencia de la denuncia.	
Artículo 29.- Plazo para la presentación de descargos [...]	**Artículo 29.- Plazo para la presentación de descargos** 29.1. La entidad denunciada podrá formular sus descargos [...]
29.2. En sus descargos, la entidad debe:	29.2. En sus descargos, la entidad debe:
a. Presentar los argumentos de legalidad y/o razonabilidad, dependiendo de lo cuestionado en la denuncia o en el procedimiento de oficio, respecto de la barrera burocrática cuestionada, conforme a la metodología de análisis señalada en la presente ley.	a. Presentar los argumentos de legalidad, dependiendo de lo cuestionado en la denuncia o en el procedimiento de oficio, respecto de la barrera burocrática cuestionada, conforme a la metodología de análisis **señalada en el artículo 13.- Análisis de legalidad, de la** presente ley.
b. Pronunciarse sobre cada uno de los argumentos presentados por la parte denunciante; o,	b. Pronunciarse sobre cada uno de los argumentos presentados por la parte denunciante; o,
c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación de la barrera burocrática cuestionada denunciada y/o la inaplicación de la misma al denunciante en caso la barrera burocrática se encuentre materializada en un acto administrativo o actuación material. Esta obligación se mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento. La entidad debe presentar los documentos que acrediten sus afirmaciones.	c. Comunicar sobre la derogación y/o modificación de la barrera burocrática cuestionada denunciada **en caso esta se encuentre contenida en una disposición normativa de carácter general** y/o la inaplicación de **esta** al denunciante en caso la barrera burocrática se encuentre materializada en un acto administrativo o actuación material. Esta obligación se mantiene a lo largo de la tramitación del procedimiento. La entidad debe presentar los documentos que acrediten sus afirmaciones. [...]
[...]	
Artículo 30.- Informe oral En cualquier etapa del procedimiento, ya sea a pedido de parte o de oficio, la Comisión o la Sala, de ser el caso, puede citar a las partes a audiencia de informe oral con el objeto de contar con mayores elementos para resolver la cuestión controvertida.	**Artículo 30.- Informe oral** **El procedimiento seguido ante la Comisión incorpora una audiencia de informe oral a llevarse a cabo dentro de los primeros 30 días del plazo de 120 días que tiene la Comisión para resolver. Esta primera audiencia es donde las partes presentan sus alegatos de apertura, y comunican a los comisionados la teoría del caso, que debe presentarse de manera ordenada y estructurada, siguiendo la siguiente estructura; la introducción, presentación de los hechos, presentación de los fundamentos jurídicos y la conclusión.**

	En el procedimiento seguido ante la Sal también se incorpora una audiencia de informe oral a llevarse a cabo dentro de los primeros 30 días del plazo de 120 días que tiene la Sala para resolver. En esta segunda audiencia es donde las partes presentan sus alegatos de cierre o clausura, y comunican a los vocales los argumentos de la apelación, o descargos contra la apelación de la otra parte, que debe presentarse de manera ordenada y estructurada, siguiendo la siguiente estructura; la introducción, presentación de los hechos, presentación de los fundamentos jurídicos y la conclusión. **Ambas audiencias de informe oral, de apertura y de cierre, deben ser transmitidos en tiempo real, y deben permanecer en el Facebook y el canal de YouTube del INDECOPI, con la finalidad de promover una cultura de calidad regulatoria en la sociedad.**
Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal al que se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley. 2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal y/o carente de razonabilidad, según sea el caso, al que se hace referencia en el artículo 10 de la presente ley. 3. Cuando, luego de publicado lo resuelto en los procedimientos de oficio a los que hace referencia el artículo 9, aplique u ordene aplicar la barrera burocrática previamente declarada carente de razonabilidad, o cuando pudiendo disponer su inaplicación, omita hacerlo.	**Artículo 34.- Conductas infractoras de funcionarios o servidores públicos por incumplimiento de mandato** La Comisión puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias al funcionario, servidor público o cualquier persona que ejerza función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, en cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal **con efectos generales** al que se hace referencia en el artículo 8 de la presente ley. 2. Cuando incumpla el mandato de inaplicación de la barrera burocrática declarada ilegal **con efectos al caso concreto** al que se hace referencia en el artículo 9 de la presente ley.
Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales 35.1. La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, a la entidad cuando verifique que alguno de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre, función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas que involucre alguno de los supuestos que se detallan a continuación. [...] b. Exigir requisitos que no constan en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la entidad. c. Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con sustento normativo vigente.	**Artículo 35.- Conductas infractoras de entidades por aplicación de barreras burocráticas ilegales** **35**.1. La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede imponer multas de hasta veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, a la entidad cuando verifique que alguno de sus funcionarios, servidores públicos o cualquier persona que ejerza en su nombre, función administrativa por delegación, bajo cualquier régimen laboral o contractual, aplica u ordena la aplicación de barreras burocráticas que involucre alguno de los supuestos que se detallan a continuación. [...] b. Exigir requisitos que no constan en el Texto Único de Procedimientos Administrativos -TUPA de la entidad. c. Exigir requisitos que, estando en el TUPA de la entidad, no cuentan con sustento normativo vigente, **o estando aprobado dicho sustento en una disposición normativa de carácter general esta no cumple con haber elaborado el debido sustento y/o justificación usando la metodología del Análisis de Impacto Regulatorio Ex ante señalado de manera clara, expresa, taxativa e indubitable en el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM que establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante** .
Artículo 42.- Responsabilidad del procurador público o abogado defensor de la entidad denunciada [...]	**Artículo 42.- Responsabilidad del procurador público o abogado defensor de la entidad denunciada** [...]

42.3. El órgano de control interno de la entidad respectiva, dispone las acciones que considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.	**42.3. Es obligación del procurador público o abogado defensor de una entidad a la que se le denunció, de parte o de oficio, por imposición de barreras burocráticas, que antes de presentar al Indecopi, los descargos elaborados por la dirección responsable de redactar dicha barrera burocrática, revise si esta ha cumplido con presentar en la exposición de motivos de la disposición normativa de carácter general que establece, incorpora o modifica la condición de operación u otra exigencia objeto de denuncia como barrera burocrática, el debido sustento y/o justificación usando para ello la estructura expuesta en los lineamientos para implementar el Análisis de Impacto Regulatorio planteados en el artículo 13 de la presente ley, y en el artículo 10 del DS 063-2021-PCM.** **42.4. El órgano de control interno de la entidad respectiva dispone las acciones que considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.**
CAPÍTULO II **MEDIDAS CORRECTIVAS**	**CAPÍTULO II** **MEDIDAS CORRECTIVAS**
Artículo 43.- Medidas correctivas La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar y/o conceder las siguientes medidas correctivas: [...] 2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad mediante las resoluciones de la Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las resoluciones de la Sala, como medida complementaria.	**Artículo 43.- Medidas correctivas** La Comisión o la Sala, de ser el caso, puede ordenar y/o conceder las siguientes medidas correctivas: [...] 2. Que las entidades informen a los ciudadanos acerca de las barreras burocráticas declaradas ilegales mediante las resoluciones de la Comisión que hayan agotado la vía administrativa y/o las resoluciones de la Sala, como medida complementaria **para lo cual, en el portal de transparencia de la entidad, al costado del botón de acceso a la información pública, deberá crearse un botón denominado "calidad regulatoria", donde se almacenen todas las resoluciones del Indecopi que han fallado en contra de las barreras burocráticas impuestas por la mencionada entidad, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades de la sociedad.**
Artículo 44.- Forma de implementación y plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas: 44.1. Para cumplir la medida correctiva señalada en el inciso 1. del artículo precedente, el plazo máximo con el que cuenta la entidad es de quince (15) días hábiles contado desde el día siguiente de la fecha del consentimiento de la resolución de la Comisión o de la fecha de notificación de la resolución de la Sala, según sea el caso. 44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en el inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con el que cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles. Las entidades pueden emplear medios de comunicación tanto físicos como virtuales que estén disponibles para todo administrado y/o agente económico que acuda al área de trámite documentario, así como el portal de la entidad.	**Artículo 44.- Forma de implementación y plazo para el cumplimiento de las medidas correctivas:** **44.1. Para cumplir la medida correctiva señalada en el inciso 1. del artículo precedente, el plazo máximo con el que cuenta la entidad es de quince (15) días hábiles contado desde el día siguiente de la fecha del consentimiento de la resolución de la Comisión o de la fecha de notificación de la resolución de la Sala, según sea el caso.** **44.2. En el caso de la medida correctiva señalada en el inciso 2. del artículo precedente, el plazo máximo con el que cuenta la entidad es de cinco (5) días hábiles.**
TÍTULO IV **ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PERSUASIÓN** **CAPÍTULO I** **ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN**	**TÍTULO IV** **ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PERSUASIÓN** **CAPÍTULO I** **ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN**
Artículo 45.- Autoridad a cargo La Comisión y su Secretaría Técnica tienen facultades para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia e iniciar procedimientos de oficio, las mismas que son ejercidas por los funcionarios que designen para tal fin. Las atribuciones en materia de investigaciones se rigen por lo señalado en la presente ley y por lo dispuesto en los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo N° 807 y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan.	**Artículo 45.- Autoridad a cargo** La Comisión y su Secretaría Técnica tienen facultades para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia e iniciar procedimientos de oficio, las mismas que son ejercidas por los funcionarios que designen para tal fin. Las atribuciones en materia de investigaciones se rigen por lo señalado en la presente ley, **por lo dispuesto en el Decreto Supremo N 063-2021-PCM,** y por lo dispuesto en los artículos 1 al 8 del Decreto Legislativo N° 807 y

	supletoriamente por lo dispuesto en la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan.
Artículo 46.- Finalidad de las actividades de prevención De conformidad con lo establecido por el principio de acción preventiva, los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales y/o carentes de razonabilidad por parte de las entidades sujetas a investigación.	**Artículo 46.- Finalidad de las actividades de prevención** **De conformidad con lo establecido por el principio de acción preventiva, los órganos encargados del inicio de las acciones de oficio dentro del Indecopi privilegian las acciones de prevención y/o coordinación con el objeto de promover la eliminación voluntaria de las barreras burocráticas presuntamente ilegales por parte de las entidades sujetas a investigación.**
Artículo 47.- Actividades de supervisión, investigación e inspección en materia de eliminación de barreras burocráticas Las actividades de supervisión, investigación e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio de procedimientos administrativos de competencia de la Comisión se rigen por el principio de acción preventiva reconocido en la presente ley, así como por las disposiciones sobre la materia establecidas en el Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan. La Comisión y/o su Secretaría Técnica puede solicitar toda la información o documentación que consideren necesarias para el cumplimiento de las actividades descritas, a través de cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o electrónico.	**Artículo 47.- Actividades de supervisión, investigación e inspección en materia de eliminación de barreras burocráticas** Las actividades de supervisión, investigación e inspección dirigidas y/o vinculadas con el inicio de procedimientos administrativos de competencia de la Comisión se rigen por el principio de acción preventiva reconocido en la presente ley, así como por las disposiciones sobre la materia establecidas en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM**, Decreto Legislativo N° 807 y la Ley N° 27444, o las normas que las sustituyan. La Comisión y/o su Secretaría Técnica puede solicitar toda la información o documentación que consideren necesarias para el cumplimiento de las actividades descritas, a través de cartas, oficios o cualquier otro medio escrito, físico o electrónico.
CAPÍTULO II **ACTIVIDADES DE PERSUASIÓN**	**CAPÍTULO II** **ACTIVIDADES DE PERSUASIÓN**
Artículo 48.- Elaboración y difusión del Ranking de entidades en materia de barreras burocráticas 48.1. El Indecopi, previa propuesta de la Secretaría Técnica de la Comisión, puede elaborar y difundir documentos en los que incluya una relación de entidades según su nivel de cumplimiento respecto de las normas sobre eliminación de barreras burocráticas y simplificación administrativa, con la finalidad de dar a conocer esta información a los agentes económicos y administrados. De manera enunciativa y no limitativa, estos documentos pueden tratar de alguno de los siguientes supuestos: a. Un ranking en el que se incluya la lista de las entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad identificadas a través de procedimientos iniciados de parte y de oficio por la Comisión durante el año, que hayan agotado la vía administrativa. b. Un ranking en el que se incluya la lista de las entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas que han sido eliminadas voluntariamente, antes del inicio de un procedimiento administrativo o antes de la emisión de una resolución final, que hayan agotado la vía administrativa. c. Un ranking de entidades que han implementado medidas de prevención de eliminación de barreras burocráticas.	**Artículo 48.- Elaboración y difusión del Ranking de entidades en materia de barreras burocráticas** **48**.1. El Indecopi, previa propuesta de la Secretaría Técnica de la Comisión, **debe** elaborar y difundir **anualmente, en enero de cada año, informes** en los que incluya una relación de entidades según su nivel de cumplimiento respecto de las normas sobre eliminación de barreras burocráticas, simplificación administrativa **y calidad regulatoria usando el Análisis de Impacto Regulatorio**, con la finalidad de dar a conocer esta información a los agentes económicos y administrados. De manera enunciativa y no limitativa, estos **informes deben desarrollar** los siguientes **temas**: **a. Un ranking en el que se incluya la lista de las entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas ilegales identificadas a través de procedimientos iniciados de parte y de oficio por la Comisión durante el año anterior, que hayan agotado la vía administrativa.** b. Un ranking en el que se incluya la lista de las entidades que cuentan con mayor cantidad de barreras burocráticas que han sido eliminadas voluntariamente **durante el año anterior**, antes del inicio de un procedimiento administrativo o antes de la emisión de una resolución final, que hayan agotado la vía administrativa. c. Un ranking de entidades que han implementado medidas de prevención de eliminación de barreras burocráticas. **d. Un archivo Excel conteniendo en orden cronológico; el número de expediente, el número de resolución, la fecha de resolución, el nombre y RUC de la entidad denunciada, y la sumilla de la resolución final, de las resoluciones que declaran barreras burocráticas ilegales identificadas a través de procedimientos iniciados de parte y de oficio por la Comisión, y que, durante el año anterior, la Sala hubiera emitido Resolución final que haya agotado la vía administrativa.**
48.2. El Indecopi, a través de su Consejo Directivo, aprueba las disposiciones necesarias para la implementación de los	**48**.2. El Indecopi, a través de su Consejo Directivo, aprueba las disposiciones necesarias para la implementación de los

diferentes tipos de "rankings" a los que hace referencia el presente artículo.	diferentes tipos de "rankings" a los que hace referencia el presente artículo.
Artículo 49.- Abogacía para la eliminación de barreras en leyes Si durante la tramitación de los procedimientos, la Comisión o la Sala identifica la existencia de algún requisito, exigencia, limitación, prohibición y/o cobro dentro de una ley o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa, que pueda restringir o limitar el desarrollo de una actividad económica o las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa, puede disponer que su respectiva secretaría técnica emita una opinión a través de un informe técnico, recomendando la implementación de medidas que promuevan la eliminación de tales obstáculos en resguardo de las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o la simplificación administrativa. De ser el caso, el informe técnico debe ser puesto en conocimiento del Congreso de la República o el Poder Ejecutivo, según corresponda.	**Artículo 49.- Abogacía para la eliminación de barreras en leyes** Si durante la tramitación de los procedimientos, la Comisión o la Sala identifica la existencia de **reglas, prohibiciones, limitaciones, obligaciones, condiciones, requisitos, responsabilidades o cualquier exigencia que genere o implique variación de costos en su cumplimiento por parte de las empresas, ciudadanos o sociedad civil** dentro de una ley o en una norma emitida en ejercicio de la función legislativa, que pueda restringir o limitar el desarrollo de una actividad económica o las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa **o del Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) EX ANTE y el AIR EX POST**, **debe** disponer que su respectiva secretaría técnica emita una opinión a través de un informe técnico, recomendando la implementación de medidas que promuevan la eliminación de tales obstáculos en resguardo de las libertades de empresa y/o la iniciativa privada y/o la simplificación administrativa **y/o calidad regulatoria**. **Dicho** informe técnico debe ser puesto en conocimiento del Congreso de la República y de **la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria (CMCR)** del Poder Ejecutivo.
Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la eliminación de barreras burocráticas 50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se haya declarado la ilegalidad y/o carencia de razonabilidad de una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan quedado consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno de la entidad respectiva, dispone las acciones que considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo. 50.2. El Consejo Directivo del Indecopi aprueba las disposiciones para la implementación de la obligación antes mencionada en el caso de las entidades.	**Artículo 50.- Reporte de acciones tomadas para la eliminación de barreras burocráticas** **50.1. Las entidades que hayan sido parte denunciada en los procedimientos seguidos ante la Comisión, en los que se haya declarado la ilegalidad de una barrera burocrática, cuyas resoluciones hayan quedado consentidas o hayan sido confirmadas por la Sala, deben comunicar al Indecopi sobre las medidas adoptadas respecto de lo resuelto por la Comisión. El órgano de control interno de la entidad respectiva dispone las acciones que considere pertinentes en caso de verificarse el incumplimiento de la obligación señalada en el presente artículo.** 50.2. El Consejo Directivo del Indecopi aprueba las disposiciones para la implementación de la obligación antes mencionada en el caso de las entidades.
Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras burocráticas Créase el portal informativo que promueve la eliminación de barrera burocráticas, el cual es administrado por el Indecopi, teniendo como principal objetivo incluir el registro de resoluciones de la Comisión y de la Sala que declaran barreras burocráticas declaradas ilegales y/o carentes de razonabilidad, para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades.	**Artículo 51.- Portal sobre eliminación de barreras burocráticas** Créase el portal **de transparencia de Indecopi, al costado del botón de acceso a la información pública, un botón denominado "calidad regulatoria", donde se almacenen todas las resoluciones del Indecopi que han fallado en contra de las barreras burocráticas impuestas por diversas entidades de nivel nacional, regional y local,** teniendo como principal objetivo incluir el registro **las** resoluciones de la Comisión y de la Sala que declaran barreras burocráticas ilegales**, y las resoluciones en sede judicial de procedimientos contenciosos administrativos impulsadas por la entidad denunciada,** para conocimiento de los ciudadanos, agentes económicos y entidades de la sociedad. **Este registro debe estar separado por año, entidad denunciada, nivel de gobierno, y si son resoluciones de la Comisión, la Sala o un juzgado contencioso administrativo, entre otros criterios de filtro para búsqueda.**
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS [...]	DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES Y TRANSITORIAS [...]

Tercera.- Aplicación supletoria Las autoridades encargadas de la supervisión de la presente ley se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo N° 1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las normas que las sustituyan, en aquello que sea aplicable.	**Tercera.- Aplicación supletoria** Las autoridades encargadas de la supervisión de la presente ley se rigen supletoriamente por lo dispuesto en el **Decreto Supremo N 063-2021-PCM y los que se señalan en sus disposiciones complementarias finales**, Decreto Legislativo N° 807, Decreto Legislativo N° 1033, la Ley N° 27444 y el Código Procesal Civil, o por las normas que las sustituyan, en aquello que sea aplicable. **Quinta.- Conformación de la Comisión y la Sala** Los Comisionados de la Comisión y los Vocales de la Sala están conformados por tres (3) profesionales designados mediante Resolución Suprema por un periodo de tres (3) años, previo concurso público realizado conforme a lo establecido por el Reglamento. **Sexta.- Requisitos para ser Comisionado o Vocal** Los Comisionados o Vocales deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 1. No ser menor de 35 años de edad. 2. Contar con título profesional o grado de bachiller con maestría. 3. No contar con antecedentes penales ni judiciales. 4. No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada. 5. Contar con 10 años de experiencia profesional acreditada, de los cuales al menos 3 años deben ser en o con la administración pública. 6. No estar en situación de concurso, inhabilitado para contratar con el Estado o encontrarse condenado por delito doloso incompatible con el ejercicio de la función. 7. No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 8. No tener conflicto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su función. En caso de vencimiento del plazo del mandato, el comisionado o vocal ejerce funciones hasta la designación del reemplazante.
Decreto Legislativo 1033, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI	**Propuesta de modificacion del Decreto Legislativo 1033**
Articulo 13. De los vocales de las Salas del Tribunal 13.1 Los vocales de las Salas del Tribunal serán designados por Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del INDECOPI, previa opinión del Órgano Consultivo. 13.2 Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Sala. 13.4 El cargo de vocal de una Sala del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o parcial, según lo establezca el Consejo Directivo.	**Articulo 13. De los vocales de las Salas del Tribunal** **13.1** Los Vocales de las Salas serán designados mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, **previo concurso público**, realizado conforme a lo establecido por el Reglamento. **13.2** Son requisitos para ser designado vocal de una Sala del Tribunal contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional **y moral** y cinco (5) años de experiencia en temas afines a la materia de competencia de la respectiva Sala. Los Comisionados o Vocales deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 1. No ser menor de 35 años de edad. 2. Contar con título profesional y grado de post grado. 3. No contar con antecedentes penales ni judiciales. 4. No encontrarse suspendido o inhabilitado en el ejercicio de la función pública por decisión administrativa firme o sentencia judicial con calidad de cosa juzgada.

	5. Contar con 10 años de experiencia profesional acreditada, de los cuales al menos 5 años deben ser en la administración pública. 6. No estar en situación de concurso, inhabilitado para contratar con el Estado o encontrarse condenado por delito doloso incompatible con el ejercicio de la función. 7. No encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 8. No tener conflicto de intereses con las materias relacionadas al ejercicio de su función. Y otros que establezca el Reglamento. En caso de vencimiento del plazo del mandato, el comisionado o vocal ejerce funciones hasta la designación del reemplazante. **13.4 El cargo de vocal de Sala del Tribunal el desempeñado sera a tiempo completo y exclusivo a excepción de la docencia universitaria previa autorizacion del Consejo Directivo.**
Articulo 22. Designación de Comisionados Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones: a) Son designados por el Consejo Directivo, previo opinión del Organo Consultivo, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y, [...]	**Articulo 22. Designación de Comisionados** Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente capítulo están sujetos a las siguientes disposiciones: a) Son designados por el Consejo Directivo, **previo concurso público**, por cinco (5) años, pudiendo ser designados por un período adicional, aplicándoseles las causales de vacancia previstas para los vocales de las Salas; y, [...]

II. EFECTO DE LA NORMA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

La aprobación de la presente iniciativa modifica el Decreto Legislativo 1256 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de prevención y eliminación de barreras burocrática, a efectos de mejorar en la aplicación con las modificatorias, inclusión de párrafos, y supresión, que mejorara la Ley de Barreras burocráticas.

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La aprobación de la norma propuesta y su aplicación no comporta ningún costo institucional ni financiero para el Estado, por su naturaleza perfectible y normativa. En caso de adecuación y mejora se financia con presupuesto institucional, que es aprobada para el año fiscal.

Los beneficios es la mejora de la sistematización de las normas legales referentes a las Barreras burocráticas, que genera o garantiza una eficiente desarrollo de la actividad empresarial, mejorar las relaciones entre el sector empresarial y el Estado, al disminuir las denuncias ante INDECOPI, reducción de costos para los administrados o agentes económicos y ahorro en la utilización de recursos del Estado, con los plazos propuestos, se dinamiza y reduce los tiempos de tramite desde la presentación hasta la resolución de la denuncia por la Sala.

IV. RELACIÓN DE LA NORMA CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO DEL

ACUERDO NACIONAL.

Esta iniciativa se relaciona con la Política del Estado del Acuerdo nacional, siguientes:

Primero Objetivo: Democracia y Estado de Derecho.

Política 5° Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes.

Política 8° Descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.

Tercer Objetivo: Competitividad del País.

Política 17° Afirmación de la economía social de mercado

Política 18° Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica.

Política 22° Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad.

Cuarto Objetivo: Estado eficiente, transparente y descentralizado

Política 24° Afirmación de un Estado eficiente y transparente

Política 35° Sociedad de la información y sociedad del conocimiento